

PERIODO 123º



REPUBLICA ARGENTINA

DIARIO DE SESIONES

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

3ª REUNION – 2ª SESION ORDINARIA
9 DE MARZO DE 2005

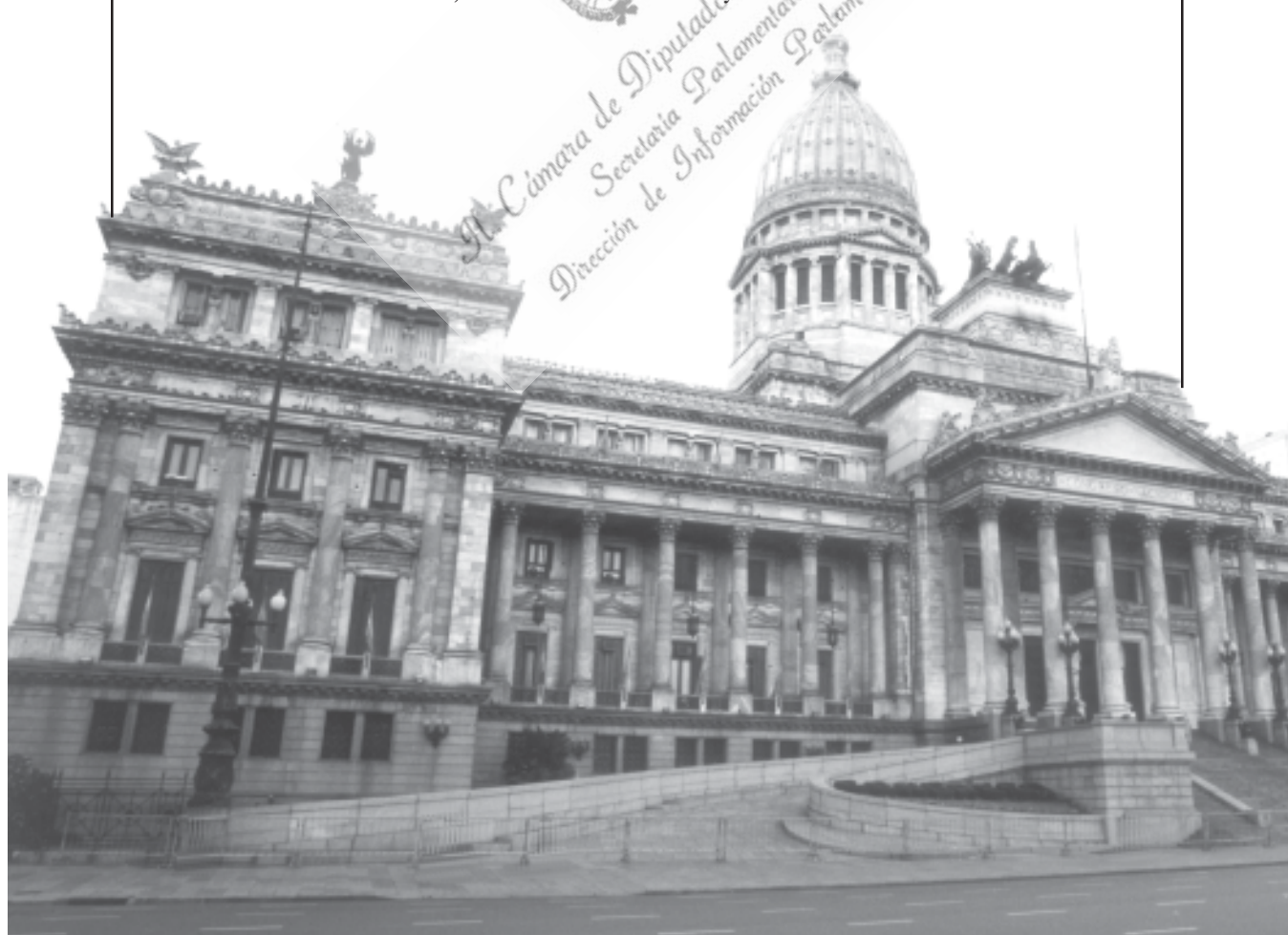
**Presidencia del señor vicepresidente de la Nación,
don DANIEL O. SCIOLI y del señor presidente provisional del
Honorable Senado, doctor MARCELO A. H. GUINLE**

Secretarios:

Señor JUAN H. ESTRADA y señor CARLOS A. MACHIAROLI

Prosecretarios:

Señor JUAN J. CANALS, señor JOSE D. CANATA y señor RICARDO N. GUTIERREZ



PRESENTES:

AGÚNDEZ, Jorge Alfredo
 ARANCIO, Lylia Mónica
 AVELÍN, Nancy Barbarita
 BAR, Graciela Yolanda
 BUSSI, Ricardo Argentino
 CAFIERO, Antonio Francisco
 CAPARRÓS, Mabel Luisa
 CAPITANICH, Jorge Milton
 CAPOS, Liliana
 CASTRO, María Elisa
 CONTI, Diana
 CURETTI, Miriam Belén
 DANIELE, Mario Domingo
 ESCUDERO, Sonia Margarita
 FALCÓ, Luis A.
 FERNÁNDEZ, Nicolás Alejandro
 FERNÁNDEZ DE KIRCHNER, Cristina E.
 GALLEGU, Silvia Ester
 GIRI, Haide Delia
 GIUSTI, Silvia Ester
 GIUSTINIANI, Rubén Héctor
 GUINLE, Marcelo Alejandro Horacio
 IBARRA, Vilma Lidia
 ISIDORI, Amanda Mercedes
 JAQUE, Celso Alejandro
 JENEFES, Guillermo Raúl
 LATORRE, Roxana Itatí
 LEGUIZAMÓN, María Laura
 LESCO, Marcela Fabiana
 LÓPEZ ARIAS, Marcelo Eduardo
 LOSADA, Mario Aníbal
 MARÍN, Rubén Hugo
 MARINO, Juan Carlos
 MARTINAZZO, Luis Eduardo
 MARTÍNEZ PASS DE CRESTO, Laura
 MASSONI, Norberto
 MASTANDREA, Alicia Ester

MAYANS, Miguel Ángel
 MAZA, Ada Mercedes
 MENEM, Eduardo
 MERA, Mario Rubén
 MIRANDA, Julio Antonio
 MORALES, Gerardo Rubén
 MÜLLER, Mabel Hilda
 NEGRE DE ALONSO, Liliana Teresita
 OVIEDO, Mercedes Margarita
 PAZ, Elva Azucena
 PERCEVAL, María Cristina
 PICHETTO, Miguel Ángel
 PINCHETTI, Delia Norma
 PUERTA, Federico Ramón
 REUTEMANN, Carlos Alberto
 RÍOS, Roberto Fabián
 ROSSI, Carlos Alberto
 SALVATORI, Pedro
 SÁNCHEZ, María Dora
 SANZ, Ernesto Ricardo
 SAPAG, Luz María
 TAFFAREL, Ricardo César
 TERRAGNO, Rodolfo
 URQUÍA, Roberto Daniel
 YOMA, Jorge Raúl
 ZAVALÍA, José

AUSENTES CON AVISO:

CASTILLO, Oscar Aníbal
 COLOMBO, María Teresita
 MARTÍN, Eloriana Nélida
 OCHOA, Raúl Ernesto
 PRADES, Carlos Alfonso
 SAADI, Ramón Eduardo

EN COMISION:

GALLIA, Sergio A.

SUMARIO

1. Manifestaciones en minoría. (Pág. 2.)
2. Izamiento de la bandera nacional. (Pág. 3.)
3. Homenaje al Día Internacional de la Mujer. (Pág. 3.)
4. Situación institucional en Bolivia. (Pág. 15.)
5. Continuidad de la institucionalidad en Bolivia. (Pág. 16.)
6. Moción de preferencia. (Pág. 16.)
7. Moción de preferencia. (Pág. 17.)
8. Plan de labor. (Pág. 17.)
9. Cuestión de privilegio. (Pág. 18.)
10. Plan de labor (continuación). (Pág. 25.)
11. Régimen Regulatorio de la Industria y Comercialización de Gas Licuado de Petróleo. (Pág. 25.)

12. Adhesión a festividades en Córdoba. (Pág. 71.)
13. Club Atlético Belgrano de Córdoba. (Pág. 72.)
14. Manifestaciones. (Pág. 72.)
15. Asuntos entrados. (Pág. 72.)
16. Apéndice:

I. Votaciones. (Pág. 214.)

II. Sanciones del Honorable Senado. (Pág. 228.)

III. Inserción. (Pág. 228.)

—En Buenos Aires, a las 13 y 54 del miércoles 9 de marzo de 2005.

1

MANIFESTACIONES EN MINORIA

Sr. Pichetto. — Pido la palabra.

Pero también veo en esta cuestión un plus en cuanto a los cuestionamientos.

Por eso, nos parece muy bien que quien ha dicho esto, que mediáticamente funciona fenómeno –además, con aires doctorales tiene otra coreografía–, alguna vez se haga cargo de sus expresiones. No hay que decir las cosas si no es en serio.

Por todo lo expuesto, vamos a apoyar el tratamiento pedido por quien formuló esta cuestión de privilegio.

Sr. Presidente. – La cuestión de privilegio planteada pasará a la Comisión de Asuntos Constitucionales.

10

PLAN DE LABOR (continuación)

Sr. Presidente. – A continuación, corresponde aprobar el plan de labor.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

–La votación resulta afirmativa.

Sr. Presidente. – Queda aprobado el plan de labor.

11

REGIMEN REGULATORIO DE LA INDUSTRIA Y COMERCIALIZACION DE GAS LICUADO DE PETROLEO

Sr. Presidente. – Corresponde pasar a la consideración de los órdenes del día con proyectos de ley acordados.

En primer lugar, el dictamen de la Comisión de Minería, Energía y Combustibles en las modificaciones introducidas por la Honorable Cámara de Diputados al proyecto de ley que le fuera pasado en revisión sobre Régimen Regulatorio de la Industria y Comercialización de Gas Licuado de Petróleo. La comisión aconseja su aceptación parcial. (Orden del Día N° 1.872.)

–El texto es el siguiente:

Dictamen de comisión

Honorable Senado:

Vuestra Comisión de Minería, Energía y Combustibles ha considerado las modificaciones introducidas por la Honorable Cámara de Diputados al proyecto de ley que le fuera pasado en revisión, sobre

Régimen Regulatorio de la Industria y Comercialización de Gas Licuado de Petróleo; y, por las razones que dará el miembro informante, os aconseja aceptar las modificaciones a los artículos 2°, 5°, 10, 12, 13, 17, 24, 37, 38, 47 y el artículo nuevo numerado 50; y desechar las correspondientes a los artículos 7°, 14, 15, 16, 18, 21, 34 y 46.

De conformidad con las disposiciones pertinentes del Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa directamente al orden del día.

Sala de la comisión, 2 de diciembre de 2004.

*Nicolás A. Fernández. – Pedro Salvatori.
– Sergio A. Gallia. – Mario D. Daniele.
– Marcelo A. H. Guinle. – Celso A.
Jaque. – Haide D. Giri. – Silvia E.
Giusti.*

En disidencia parcial, aceptando modificaciones al artículo 46:

Roberto F. Ríos.

Sanción de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación

(1° de diciembre de 2004)

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...

TITULO I

Disposiciones generales

Artículo 1°. – *Objeto.* La presente ley establece el marco regulatorio para la industria y comercialización de gas licuado de petróleo. Se aplicarán supletoriamente las leyes 24.076 y 17.319 en todo lo que no esté expresamente establecido en la presente.

Constituye un objetivo esencial del marco regulatorio establecido por la presente ley asegurar el suministro regular, confiable y económico de gas licuado de petróleo a sectores sociales residenciales de escasos recursos que no cuenten con servicio de gas natural por redes, para lo cual la autoridad de aplicación estará facultada para ejercer todas las atribuciones previstas en la presente ley, y todas las medidas conducentes para asegurar dicho objetivo.

Art. 2° – *Definiciones.* A los efectos de la presente ley se entiende por:

- a) *GLP. Gas licuado de petróleo:* las fracciones de hidrocarburos gaseosos a temperatura y presiones normales, compuestas principalmente por propano o butano, sus isómeros, derivados no saturados, separados, sus mezclas, que se transportan, envasan y comercializan en estado líquido bajo presión;
- b) *Productor:* Toda persona física o jurídica que obtenga gas licuado a partir de la

refinación de hidrocarburos líquidos o plantas petroquímicas o de la captación o separación del gas licuado de petróleo a partir del gas natural por cualquier método técnico;

- c) *Importador*: Toda persona física o jurídica que importe GLP para comercializarlo en el mercado interno;
- d) *Fraccionador*: Toda persona física o jurídica que, por cuenta propia y disponiendo de instalaciones industriales fracciona y envasa GLP, en envases fijos y móviles, como microgarrafas, garrafas, cilindros, tanques fijos o móviles, o los que en el futuro determine la autoridad de aplicación, de su propia marca, leyenda o de terceros, conforme surge de la presente ley;
- e) *Transportista*: Toda persona física o jurídica que transporte de modo habitual GLP a granel o en envases por cuenta propia o de terceros desde su lugar de producción o almacenaje hasta los puntos de fraccionamiento, distribución o comercialización o entre ellos;
- f) *Distribuidor*: Toda persona física o jurídica que, en virtud de un contrato de distribución con un fraccionador, distribuya y/o comercialice por su cuenta y orden GLP envasado;
- g) *Comercializador*: Toda persona física o jurídica que venda por cuenta propia o de terceros GLP a granel a fraccionadores, usuarios o consumidores finales o a terceros;
- h) *Almacenador*: Toda persona física o jurídica que por cuenta propia o de terceros almacene GLP;
- i) *Prestador de servicios de puerto*: Toda persona física o jurídica que preste servicios de almacenaje, despacho y otras cuestiones vinculadas a actividades o instalaciones portuarias;
- j) *Gran consumidor*: Toda persona física o jurídica consumidora de GLP que por sus características de consumo esté en condiciones de contratar el suministro directamente del productor, o del fraccionador, o de un comercializador, sin pasar por la intermediación del distribuidor, conforme surja de la reglamentación;
- k) *Centro de canje*: Toda persona física o jurídica que opere facilidades de canje de envases.

Art. 3º – *Ámbito de aplicación*. Quedan comprendidas en la presente ley las actividades de producción, fraccionamiento, transporte, almacenaje, distribución, servicios de puerto y comercialización de GLP en el territorio nacional.

Art. 4º – *Sujetos activos*. Son sujetos activos de la industria del gas licuado de petróleo los productores, fraccionadores, transportistas, almacenadores, prestadores de servicios de puerto, centros de canje, distribuidores, grandes consumidores y comercializadores. Las actividades reguladas por la presente ley podrán ser realizadas por personas físicas o jurídicas autorizadas al efecto por la autoridad de aplicación.

Los responsables de la distribución de GLP por redes, y sólo en lo que se refiere estrictamente a esa actividad, se regirán de conformidad con los derechos y obligaciones que surjan de los respectivos contratos, de la ley 24.076 y, supletoriamente, en lo que se refiere a la industria del gas licuado de petróleo por la presente ley.

Art. 5º – *Interés público*. Las actividades definidas en el artículo 3º que integran la industria del GLP son declaradas de interés público, dentro del marco y el espíritu del artículo 42 de la Constitución Nacional y en función de los objetivos señalados en el artículo 7º de la presente ley.

Art. 6º – *Libre ingreso a la actividad*. Las actividades comprendidas en la presente ley serán libremente con arreglo a las disposiciones generales en ella previstas y las normas reglamentarias que de la misma se dicten. Dichas actividades deberán propender a la competencia, la no discriminación, el libre acceso, la asignación eficiente de recursos, la seguridad pública y la preservación del medio ambiente.

Art. 7º – *Política general en la materia*. Fíjense los siguientes objetivos para la regulación de la industria y comercialización de GLP, los que serán ejecutados y controlados por la autoridad de aplicación:

- a) Promover la competitividad de la oferta y la demanda de GLP y alentar su expansión, particularmente en aquellos lugares donde resulte antieconómico el desarrollo de redes de distribución de gas natural;
- b) Garantizar el abastecimiento del mercado interno de gas licuado, así como también el acceso al producto a granel, por parte de los actores de mercado definido en el artículo 2º y de los consumidores del mercado interno, a precios que no superen los de paridad de exportación, la cual deberá ser definida metodológicamente, mediante reglamentación de la autoridad de aplicación. A los efectos del cálculo de la paridad de exportación en cada planta productora se tendrán en cuenta al menos:

1. Los precios vigentes en mercados desafiables que establezcan precios de referencia a nivel mundial.
2. El descuento de todos los costos de transporte, almacenaje y seguros, tan-

to internos como externos, necesarios para acceder a dichos mercados.

3. Los descuentos de los gastos aduaneros y los derechos de exportación aplicables en cada momento;
- c) Proteger adecuadamente los derechos de los consumidores, posibilitando la universalidad del servicio, adecuada información y publicidad y el acceso al mismo a precios justos y razonables, con especial énfasis en el abastecimiento a sectores residenciales de escasos recursos que no cuenten con servicio de gas natural por redes;
- d) Propender a que el precio del GLP al consumidor final sea el resultante de los reales costos económicos totales de la actividad en las distintas etapas, para que la prestación del servicio se realice con las debidas condiciones de calidad y seguridad, tendiendo a su evolución sostenible, desarrollo en el largo plazo y en niveles equivalentes a los que internacionalmente rigen en países con dotaciones similares de recursos y condiciones;
- e) Incentivar la eficiencia del sector y garantizar la seguridad en la totalidad de las etapas de la actividad;
- f) Propender a una mejor operación de la industria del GLP, garantizando la igualdad de oportunidades y el libre acceso de terceros al mercado;
- g) Propender a la diversificación del uso del GLP, en distintos ámbitos, como el transporte, la industria, entre otros.

Art. 8º – *Autoridad de aplicación y organismo de fiscalización.* Será autoridad de aplicación de la presente ley la Secretaría de Energía de la Nación, la que podrá delegar en el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) las tareas de fiscalización y control técnico. Asimismo, la autoridad de aplicación podrá delegar en las provincias el ejercicio de sus facultades mediante acuerdos particulares con cada una de ellas.

Art. 9º – *Condiciones de prestación.* Los sujetos activos de esta ley estarán obligados a mantener los equipos, instalaciones, envases y demás activos involucrados, en forma tal que no constituyan peligro para la seguridad pública. Esta obligación se extiende aun cuando no los utilicen y hasta la destrucción total y/o baja otorgada por la autoridad de aplicación.

Las instalaciones afectadas a la industria estarán sujetas a la fiscalización mediante inspecciones, revisiones, verificaciones y pruebas que periódicamente decida realizar la autoridad de aplicación, quien estará facultada para ordenar medidas que no admitan dilación tendientes a resguardar la seguridad pública.

Art. 10. – *Política de mercado.* El Poder Ejecutivo nacional promoverá el incremento del nivel de competencia y desafiabilidad de cada etapa de la industria, garantizando la igualdad de condiciones para todas las empresas que actúen legítimamente en el sector, en beneficio del interés general y de los usuarios en particular.

La autoridad de aplicación, dentro de los ciento veinte (120) días de sancionada esta ley y con el asesoramiento del Tribunal Nacional de Defensa de la Competencia deberá:

- a) Establecer mecanismos de transferencia del producto entre las etapas de producción, fraccionamiento, comercialización y distribución, que sean transparentes y eficientes a fin de garantizar que todos los agentes del mercado, puedan acceder al producto en igualdad de condiciones y priorizando el abastecimiento del mercado interno;
- b) Establecer mecanismos de estabilización de precios internos para el valor del GLP adquirido por fraccionadores, a fin de evitar bruscas fluctuaciones en los precios internos del mismo;
- c) Realizar un profundo análisis de la constitución del sector y su comportamiento, a los efectos de establecer límites a la concentración de mercado para cada etapa, o a la integración vertical a lo largo de toda la cadena del negocio. La limitación debe comprender a las sociedades vinculadas, controlantes o controladas, según lo establecido en el artículo 33 de la ley 19.550. Esta tarea deberá ser realizada juntamente con la autoridad de aplicación de la ley 25.156 e informada, en reunión conjunta a las comisiones de Energía y Combustibles de la Cámara de Diputados y de Minería, Energía y Combustibles de la Cámara de Senadores, ambas del Congreso de la Nación.

TITULO II

Disposiciones particulares

CAPÍTULO I

Producción

Art. 11. – *La actividad de producción.* La actividad de la producción de GLP bajo cualquiera de sus formas o alternativas técnicas será libre, sin perjuicio de lo cual estará sujeta al cumplimiento de las previsiones de la presente ley y su reglamentación.

Podrán disponerse la apertura de nuevas plantas o la ampliación de las existentes sin otro requisito que el cumplimiento de las reglamentaciones técnicas que se dicten para su aplicación.

CAPÍTULO II

Fraccionamiento

Art. 12. – *La actividad de fraccionamiento.* Se podrá autorizar la instalación de nuevas plantas, o la ampliación de las existentes sin otro requisito que el cumplimiento de la presente ley y su reglamentación.

Para ser fraccionador se deberá contar con la autorización correspondiente otorgada por la autoridad de aplicación, llevar un registro de envases y cumplimentar los otros requisitos que fije la reglamentación.

Los fraccionadores podrán envasar GLP de cualquier productor, comercializador o importador con el solo cumplimiento de la normativa aplicable a la actividad, pudiendo hacerlo para más de una marca o leyenda. El envasado de GLP en envases que no sean de su marca o leyenda podrá ser acordado libremente entre fraccionadores y propietarios del envase mediante contratos bilaterales. Estos contratos deberán ser notificados a la autoridad de aplicación.

El fraccionador deberá acreditar, al momento de solicitar la autorización o su renovación ante la autoridad de aplicación, la titularidad de una marca o leyenda cuyo número de envases que la lleven sea acorde con la magnitud de sus ventas, conforme parámetros que reglamentariamente establecerá esa autoridad conforme a la evolución del mercado.

Art. 13. – *Responsabilidades.* El fraccionador será responsable del envasado de GLP, y del cumplimiento de las normas técnicas, de calidad, seguridad y otras que a los efectos dicte la autoridad de aplicación.

Asimismo, el fraccionador será responsable por el mantenimiento y reposición de los envases propios y de todos aquellos que sean utilizados por éste a los efectos de envasar GLP para su posterior distribución o comercialización, así como por los tanques móviles o fijos de su marca instalados en el domicilio de los usuarios.

El fraccionador deberá vender libremente al público y deberá exhibir en el ingreso de cada planta el precio mayorista y minorista vigente.

Art. 14. – *Envases: su propiedad e identificación.* Los envases podrán circular libremente en el mercado nacional de conformidad con las previsiones contenidas en la presente ley y la reglamentación que se dicte al efecto.

La propiedad de los envases se rige por las normas del Código Civil.

Art. 15. – *Registro.* Créase un registro de envases de marcas y leyendas de GLP el que será llevado por la autoridad de aplicación.

Art. 16. – *Obligación de registración.* Todos los fraccionadores deberán encontrarse registrados y,

a su vez, registrar los envases de su propiedad de conformidad con las reglamentaciones que dicte la autoridad de aplicación.

Art. 17. – *Capitación de envases.* Los fraccionadores, distribuidores y demás integrantes de la cadena de comercialización están obligados a recibir de los consumidores los envases de su marca o leyenda o de terceros. La autoridad de aplicación podrá adoptar un mecanismo de recepción de distintos envases, en función de la evolución tecnológica futura de las mismas y de las consecuentes modalidades de comercialización.

Art. 18. – *Identificación y responsabilidad.* El fraccionador deberá individualizar los envases por él llenados, antes de la salida de la planta fraccionadora, con precinto de llenado en el cual constarán los datos identificatorios, que por reglamentación fije la autoridad de aplicación.

Ante cada llenado de un envase, con marca o leyenda propia o de terceros, para lo cual esté autorizado que el fraccionador realice, deberá registrar en una etiqueta adherida al mismo, fecha de llenado, planta envasadora, prohibición de venta de envases, los datos identificatorios del organismo de control, el número telefónico para la realización de reclamos, así como los demás recaudos que al efecto fije la autoridad de aplicación.

Art. 19. – *Centros de canje.* Los participantes del mercado deberán organizar centros de canje de unidades de envase, debiendo cada uno de esos centros estar registrados ante la autoridad de aplicación, en los términos que la misma determine.

Los centros de canje deberán ser de propiedad de personas físicas o jurídicas sin vinculación societaria directa o indirecta con alguno de los sujetos activos comprendidos en la presente ley, y podrán ser operados por sí o por terceros con la misma limitación de vinculación.

La autoridad de aplicación reglamentará e instrumentará la operatividad y control de los centros de canje en un plazo máximo de seis (6) meses contados desde la fecha de entrada en vigencia de la presente ley, aprobando tarifas máximas y condiciones necesarias para el registro de los mismos.

Art. 20. – *Parque de envases.* Las firmas fraccionadoras de gas licuado de petróleo integrarán un parque de envases de uso común mediante el aporte de envases inscriptos con sus marcas y/o leyendas, cuya cantidad podrá ser establecida por acuerdo voluntario de las firmas fraccionadoras actuantes en la industria o, en su defecto, por la autoridad de aplicación.

El parque de envase de uso común persigue los siguientes objetivos:

- a) Asegurar el acceso a envases por parte de aquellas firmas fraccionadoras que, cumpliendo con toda la normativa vigente, encuentren dificultades para recuperar, a tra-

vés de los centros de canje, los envases identificados con su marca o leyenda;

b) Promover el funcionamiento competitivo, transparente y no discriminatorio del sector gas licuado de petróleo;

c) Crear incentivos para asegurar el cumplimiento de la normativa de seguridad vinculada al uso de los envases de gas licuado de petróleo.

Ante la ausencia de acuerdo de las firmas fraccionadoras, la autoridad de aplicación deberá determinar el número o porcentaje de envases a integrar por cada fraccionadora en particular, cuidando que en ningún caso el número o porcentaje asignado exceda el estrictamente necesario para asegurar el normal cumplimiento de los objetivos antes fijados y sin afectar la operatoria de cada fraccionadora.

Los aportes al parque de envases de uso común deberán realizarse por marca y/o leyenda completa.

Art. 21. – *Seguro obligatorio.* Cada fraccionador deberá contratar un seguro de responsabilidad civil con cobertura integral por los daños causados a terceros, en las instalaciones o por los envases llenados, en las condiciones y hasta el monto que fije la autoridad de aplicación.

El distribuidor estará obligado a especificar en las respectivas facturas de venta la marca y/o leyenda del envase.

CAPÍTULO III

Transporte

Art. 22. – *Transporte.* El transporte del GLP, ya sea por ductos, redes, carreteras, ferrocarril o agua, estará sometido a las normas generales que regulen cada uno de estos medios y las específicas de seguridad y preservación ambiental que se dicten por la autoridad de aplicación.

Los fraccionadores, transportadores y almacenadores de GLP podrán solicitar concesiones de transporte a la autoridad de aplicación. A estos efectos, los titulares de tales concesiones tendrán los derechos contemplados en los artículos 39 a 44 y 66 de la ley 17.319.

CAPÍTULO IV

Distribución

Art. 23. – *De la distribución.* La distribución de GLP deberá efectuarse de acuerdo con las previsiones contenidas en la presente ley, su reglamentación y la normativa vigente o que al efecto se dicte, con excepción de lo dispuesto en el último párrafo del artículo 12 de la ley 24.076.

Art. 24. – *Obligación.* Los distribuidores estarán obligados a inscribirse en el Registro de Distribui-

dores y a recibir los envases que cuenten con la identificación correspondiente y/o marcas o leyendas habilitadas en el territorio nacional. Los depósitos y medios de transporte propios o de terceros que utilicen los distribuidores para el desarrollo de su actividad deberán cumplir con las normas de seguridad y calidad establecidas.

Art. 25. – *Responsabilidad.* Los distribuidores serán responsables por los envases que obren en su poder que no se encuentren debidamente identificados o precintados y pasibles de las sanciones establecidas en la presente ley y sus normas reglamentarias por las violaciones o incumplimientos en que incurrieran.

El distribuidor estará obligado a especificar en las respectivas facturas de venta la marca y/o leyenda del envase.

CAPÍTULO V

Almacenaje

Art. 26. – *Del almacenaje.* Quienes se dediquen a almacenar GLP por cuenta propia o de terceros, deberán cumplir con la normativa de seguridad en la operatoria que al efecto dicte la autoridad de aplicación.

CAPÍTULO VI

Acceso abierto

Art. 27. – *Del acceso abierto.* Se establece un régimen de acceso abierto para la actividad de almacenaje de GLP, de conformidad con las previsiones obrantes en el presente capítulo.

Art. 28. – *Acceso de terceros.* La autoridad de aplicación establecerá mediante reglamentación, los diferentes tipos y las condiciones de utilización de la capacidad sujeta a acceso abierto a terceros y las normas que garanticen la igualdad de oportunidades para todos los interesados. También fijará periódicamente, en caso de falta de acuerdo entre las partes y ante el requerimiento de cualquiera de ellas, las tarifas que, como máximo, deberán abonarse por el servicio.

Cualquier persona física o jurídica que solicite el uso de capacidad sujeta a acceso abierto según lo establecido en el párrafo anterior, deberá estar inscrita, de conformidad con la presente ley, como fraccionador, distribuidor, comercializador o gran consumidor.

Art. 29. – *Procedimiento operativo del acceso abierto a terceros.* La autoridad de aplicación, en un plazo no mayor de sesenta (60) días, dictará las normas de procedimiento operativo del acceso abierto a terceros.

Art. 30. – *Parámetros para la fijación de la tarifa.* La autoridad de aplicación considerará los siguientes parámetros para la determinación del cua-

dro tarifario por los servicios que se corresponden al acceso abierto a terceros:

- a) Costos variables de operación y mantenimiento del activo;
- b) Remuneración del capital; y,
- c) Rentabilidad razonable para el operador o titular del activo.

En ningún caso, las tarifas podrán superar la media de los parámetros internacionales.

CAPÍTULO VII

Comercializadores

Art. 31. – *Comercializadores.* Los comercializadores deberán inscribirse en el registro correspondiente y podrán vender GLP a granel, con el solo cumplimiento de la normativa aplicable a la actividad. También podrán comercializar libremente en el mercado interno el GLP que se importe.

Ningún fraccionador podrá imponer a los comercializadores cláusulas o condiciones de exclusividad o de obligaciones de compra. Las disposiciones contractuales que de alguna manera violen esta prohibición serán nulas de nulidad absoluta, no pudiendo ser opuestas contra el cocontratante ni terceros.

A los fines de la fiscalización de lo normado en el presente artículo, la autoridad de aplicación podrá solicitar en cualquier tiempo la exhibición de los contratos de vinculación entre fraccionadores y comercializadores.

CAPÍTULO VIII

Gran consumidor

Art. 32. – *Gran consumidor.* La autoridad de aplicación determinará el nivel de volumen a partir del cual se considerará al consumidor como gran consumidor y deberá inscribirse en el registro correspondiente. Los grandes consumidores no podrán fraccionar ni comercializar el GLP que almacenen y sólo podrán almacenar para consumo propio, en cantidades razonables que permitan el desarrollo normal de sus actividades.

Art. 33. – *Instalaciones de almacenaje.* Los grandes consumidores deberán contar con instalaciones de almacenaje que cumplan con las normas de seguridad y cuidado del ambiente que la autoridad de aplicación establecerá a tales efectos.

CAPÍTULO IX

Precios de referencia del GLP para uso domiciliario

Art. 34. – *Precio de referencia para GLP en envases.* La autoridad de aplicación fijará, para cada región y para cada semestre estacional de invierno y verano, un precio de referencia para el GLP de uso

doméstico nacional en envases de hasta cuarenta y cinco (45) kg, el que deberá ser ampliamente difundido.

Dicho precio referencial será calculado, propendiendo a que los sujetos activos tengan retribución por sus costos eficientes y una razonable rentabilidad, con base en el precio mensual del GLP a granel a la salida de la planta productora calculado según los principios determinados en el inciso b) e inciso d) del artículo 7º, los valores que los respectivos fraccionadores envíen bajo declaración jurada de venta, la información del mercado de la distribución y las estimaciones que realice la autoridad de aplicación.

Si se verifican en el mercado apartamientos significativos a los precios de referencia por abuso de posición dominante, la autoridad de aplicación deberá aplicar las sanciones establecidas en el artículo 42, capítulo II –contravenciones y sanciones–, y los mecanismos previstos en el artículo 10 de la presente ley, o lo previsto en el artículo 13 de la ley 25.561 y sus modificatorias.

CAPÍTULO X

Operaciones de importación y exportación

Art. 35. – *De la importación y exportación.* Queda autorizada la libre importación de GLP sin otro requisito que el cumplimiento de la normativa vigente y sin necesidad de autorización previa.

La exportación de GLP será libre una vez garantizado el volumen de abastecimiento interno, debiendo mediar en cada caso autorización del Poder Ejecutivo, dentro del plazo de treinta (30) días de recibida la solicitud. El silencio implicará conformidad.

Art. 36. – *Restricciones.* El Poder Ejecutivo, por sí o a solicitud de la autoridad de aplicación, podrá disponer medidas restrictivas a las operaciones de importación de GLP, salvaguardas y otras medidas compensatorias preventivas o punitivas cuando las mismas estén subsidiadas en su país de origen, en tanto no contravengan disposiciones contenidas en acuerdos multilaterales, regionales o bilaterales suscritos por la República Argentina de aplicación al sector.

TÍTULO III

CAPÍTULO I

De la autoridad de aplicación

Art. 37. – *Funciones y facultades.* La autoridad de aplicación de la presente ley tendrá las siguientes funciones y facultades:

- a) Hacer cumplir la presente ley, su reglamentación y disposiciones complementarias, en el ámbito de su competencia;
- b) Dictar las normas reglamentarias para cada una de las etapas de la actividad;

- c) Evitar conductas anticompetitivas, oligopólicas, discriminatorias o de abuso de posición dominante, que afecten el libre funcionamiento del mercado de GLP y el interés público;
 - d) Dictar las resoluciones e instrucciones que sean necesarias tendientes a asegurar el suministro del servicio;
 - e) Reglamentar la contratación del seguro obligatorio en cada etapa de la comercialización;
 - f) Dictar las normas básicas a las cuales deberán ajustarse los fraccionadores en materia de procedimientos de prueba, reparación, destrucción y reposición de envases. Además deberá fijar la vida útil de los envases de modo de garantizar el uso seguro del mismo para el usuario consumidor;
 - g) Establecer mecanismos fiables e inviolables de identificación de envases, ya sea para su llenado con GLP o para establecer inequívocamente la leyenda y/o marca del recipiente;
 - h) Dictar las normas a las que deberán someterse las distintas instalaciones de almacenaje, fraccionamiento, comercialización y medios de transporte;
 - i) Dictar las normas a las que deberán ajustarse los participantes de esta ley en materia de seguridad, normas y procedimientos técnicos;
 - j) Requerir a los actores del presente régimen la documentación respaldatoria e información que sea necesaria para verificar el cumplimiento de la presente ley y su reglamentación. Asimismo, realizará las fiscalizaciones e inspecciones que sean necesarias a los mismos efectos y habilitará los registros pertinentes;
 - k) Promover ante los tribunales competentes las acciones pertinentes que tiendan a asegurar el cumplimiento de sus funciones y los fines de esta ley y su reglamentación;
 - l) Realizar el registro de exportaciones y el cálculo de la paridad de exportación;
 - m) Aplicar las sanciones previstas en la presente ley y su reglamentación;
 - n) Realizar el control sistemático de la calidad del GLP;
 - o) Ordenar, procesar y publicar la información sobre la industria de GLP; de las decisiones que adopte y los antecedentes en que las mismas se basen, publicando, entre otras cosas, la paridad de exportación del GLP, los precios a la salida de las plantas fraccionadoras y toda otra información del mercado de distribución y comercialización que sea de interés para el usuario final;
 - p) Dar a publicidad en el marco del Sistema de Información Federal de Combustibles las paridades de exportación correspondientes a cada planta productora, las declaraciones juradas de los precios de las fraccionadoras y toda la información de mercado de distribución y comercialización que se considere relevante;
 - q) Controlar la cantidad de producto envasado, la calidad del producto, así como también el estado de conservación y mantenimiento de los envases en circulación;
 - r) Garantizar el funcionamiento de centros de atención de reclamos de los usuarios, con la debida participación de los organismos de defensa del consumidor;
 - s) Capacitar a los funcionarios y empleados técnico-administrativos que sean necesarios para el cumplimiento de sus fines; y,
 - t) En general, realizar todos los actos que sean necesarios para el mejor cumplimiento de sus funciones y de los objetivos de esta ley y su reglamentación.
- Art. 38. – *De los recursos.* A los fines de la presente ley, asignase a la autoridad de aplicación la recaudación de la tasa de fiscalización y control, creada por el artículo 39.
- Art. 39. – *Tasa de fiscalización. Determinación. Obligados al pago.* Las personas físicas o jurídicas que realicen las actividades que se encuentran reguladas en la presente ley deberán abonar anualmente al organismo correspondiente una tasa de fiscalización y control que a los efectos fijará el Poder Ejecutivo.
- Art. 40. – *Control jurisdiccional.* A los efectos de la actuación administrativa de la autoridad de aplicación, será de aplicación la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos y sus normas reglamentarias.
- Agotada la vía administrativa procederá el recurso en sede judicial directamente ante la cámara federal de apelaciones con competencia en materia contencioso-administrativa con jurisdicción en el lugar del hecho. Los recursos que se interpongan contra la aplicación de las sanciones previstas en la presente ley tendrán efecto devolutivo.

CAPÍTULO II

Contravenciones y sanciones

Art. 41. – *Régimen sancionatorio.* El concesionario o productor que incurra en maniobras comerciales lesivas contra fraccionadores, almacenadores, distribuidores, comercializadores o consumidores, y también cualquier actor alcanzado por la presente ley que incurra en maniobras como las mencionadas respecto de cualquier otro integrante de la cadena o de los consumidores será pasible de las san-

ciones establecidas en el artículo 42 de la presente ley, sin perjuicio de las sanciones establecidas en la legislación de fondo.

Art. 42. – *Contravenciones y sanciones.* Los incumplimientos de la presente ley y su reglamentación serán sancionados por la autoridad de aplicación con:

- a) Apercibimientos;
- b) Multas que oscilarán hasta mil (1.000) veces el costo de una tonelada de propano a nivel mayorista, conforme el valor que fije la autoridad de aplicación, la que será graduada teniendo en cuenta la gravedad de la infracción, reiteración de los hechos, la cuantía del perjuicio ocasionado, la conducta posterior a la infracción por parte del incumplidor, la capacidad económico-financiera del infractor y las demás circunstancias y particularidades del caso;
- c) Inhabilitaciones de uno (1) a cinco (5) años;
- d) Suspensiones de entre treinta (30) y noventa (90) días; y,
- e) Clausuras y decomisos.

Art. 43. – *De la fiscalización.* En las acciones de prevención, constatación de contravenciones, cumplimiento de las medidas de secuestro, decomiso u otras que pudieren corresponder, la autoridad de aplicación podrá requerir al juez competente el auxilio de la fuerza pública.

A tal fin bastará presentar ante el juez las correspondientes actuaciones administrativas, y formal requerimiento de autoridad competente.

TITULO IV

Fondo fiduciario para atender las necesidades de GLP de sectores de bajos recursos y para la expansión de redes de gas natural

Art. 44. – Créase un fondo fiduciario para atender el consumo residencial de gas licuado de petróleo envasado para usuarios de bajos recursos y para la expansión de redes de gas a zonas no cubiertas por redes de gas natural.

Art. 45. – El Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos Residenciales de GLP tiene como objeto financiar:

- a) La adquisición de GLP en envases (garrafas y cilindros) por usuarios de bajos recursos y;
- b) La expansión de ramales de transporte, de distribución y redes domiciliarias de gas natural en zonas no cubiertas al día de la fecha, en aquellos casos en que resulte técnicamente posible y económicamente factible. Priorizándose las expansiones de redes de gas natural en las provincias que actualmente no cuentan con el sistema.

Art. 46. – El fondo fiduciario creado en el presente título estará integrado por los siguientes recursos:

- a) La totalidad de los recursos provenientes del régimen de sanciones establecido en la presente ley;
- b) Los fondos que por ley de presupuesto se asignen;
- c) Los fondos que se obtengan en el marco de programas especiales de créditos que se acuerden con los organismos o instituciones pertinentes, nacionales e internacionales;
- d) Lo producido por cargos específicos a pagar por los usuarios que ya estén conectados a las redes de gas natural.

El Poder Ejecutivo reglamentará la constitución y funcionamiento del fondo, debiendo arbitrar los medios para que la operatoria del mismo tenga la mayor transparencia y eficiencia en su funcionamiento.

TITULO V

Disposiciones transitorias y finales

Art. 47. – *Plazo de registro de envases.* Los participantes de la industria del GLP contarán con un plazo máximo de un (1) año a partir de la entrada en vigencia de la presente ley, a los fines de registrar marcas, leyendas y los envases de propiedad de los distintos actores y participantes.

Art. 48. – *Caracterización de la actividad de distribución o comercialización.* La distribución y comercialización mayorista y/o minorista de GLP serán consideradas como actividades de consignación o intermediación, al momento de calcular tributos que graven el ingreso total o ingreso bruto de la misma.

Art. 49. – *Normas técnicas de aplicación supletoria.* Hasta tanto se dicte la reglamentación pertinente, continuarán siendo de aplicación las normas técnicas y de seguridad dictadas por la ex empresa Gas del Estado S.E. con las modificaciones dispuestas por la Secretaría de Energía en todo cuanto sea compatible con las previsiones de la presente ley.

Art. 50. – *Impuesto al valor agregado.* Agréguese el siguiente inciso al cuarto párrafo del artículo 28 de la Ley de Impuesto al Valor Agregado (IVA), texto ordenado 1997 y modificatorias:

- k) Las ventas de propano, butano y gas licuado de petróleo, para uso domiciliario exclusivamente, su importación y las locaciones del inciso c) del artículo 3º de la presente ley, para la elaboración por cuenta de terceros.

Art. 51 – *Orden público.* La presente ley es de orden público. Derógase toda otra disposición que se oponga a la misma.

Art. 52. – *De la reglamentación.* El Poder Ejecutivo nacional deberá reglamentar la presente ley en el término de noventa (90) días a contar desde su entrada en vigencia.

Art. 53. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Se deja constancia que el proyecto en cuestión fue aprobado en general y en cada uno de sus artículos por el voto de los dos tercios de los presentes (artículo 81 de la Constitución Nacional), excepto los artículos 5º, 7º y 46, que se aprobaron por simple mayoría.

Dios guarde al señor presidente.

EDUARDO O. CAMAÑO.

Eduardo D. Rollano.

ANTECEDENTE

Sanción de la Honorable Cámara de Senadores

(22 de septiembre de 2004)

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...

REGIMEN REGULATORIO DE LA INDUSTRIA Y COMERCIALIZACION DE GAS LICUADO DE PETROLEO

TITULO I

Disposiciones generales

Artículo 1º – *Objeto.* La presente ley establece el marco regulatorio para la industria y comercialización de gas licuado de petróleo. Se aplicarán supletoriamente las leyes 24.076 y 17.319 en todo lo que no esté expresamente establecido en la presente.

Constituye un objetivo esencial del marco regulatorio establecido por la presente ley asegurar el suministro regular, confiable y económico de gas licuado de petróleo a sectores sociales residenciales de escasos recursos que no cuenten con servicio de gas natural por redes, para lo cual la autoridad de aplicación estará facultada para ejercer todas las atribuciones previstas en la presente ley, y todas las medidas conducentes para asegurar dicho objetivo.

Art. 2º – *Definiciones.* A los efectos de la presente ley se entiende por:

- a) *GLP: gas licuado de petróleo.* Las fracciones de hidrocarburos gaseosos a temperatura y presiones normales, compuestas principalmente por propano o butano, sus isómeros, derivados no saturados, separados, sus mezclas, que se transportan, envasan y comercializan en estado líquido bajo presión;

b) *Productor.* Toda persona física o jurídica que obtenga gas licuado a partir de la refinación de hidrocarburos líquidos o plantas petroquímicas o de la captación o separación del gas licuado de petróleo a partir del gas natural por cualquier método técnico;

c) *Importador.* Toda persona física o jurídica que importe GLP para comercializarlo en el mercado interno;

d) *Fraccionador.* Toda persona física o jurídica que, por cuenta propia y disponiendo de instalaciones industriales, fracciona y envasa GLP, en envases fijos y móviles, como microgarrafas, garrafas, cilindros, tanques fijos o móviles, o los que en el futuro determine la autoridad de aplicación, de su propia marca, leyenda o de terceros, conforme surge de la presente ley;

e) *Transportista.* Toda persona física o jurídica que transporte de modo habitual GLP a granel o en envases por cuenta propia o de terceros desde su lugar de producción o almacenaje hasta los puntos de fraccionamiento, distribución o comercialización o entre ellos;

f) *Distribuidor.* Toda persona física o jurídica que, en virtud de un contrato de distribución con un fraccionador, distribuya y/o comercialice por su cuenta y orden GLP envasado;

g) *Comercializador.* Toda persona física o jurídica que venda por cuenta propia o de terceros GLP a granel a fraccionadores, usuarios o consumidores finales o a terceros;

h) *Almacenador.* Toda persona física o jurídica que por cuenta propia o de terceros almacene GLP;

i) *Prestador de servicios de puerto.* Toda persona física o jurídica que preste servicios de almacenaje, despacho y otras cuestiones vinculadas a actividades o instalaciones portuarias;

j) *Gran consumidor.* Toda persona física o jurídica consumidora de GLP que por sus características de consumo esté en condiciones de contratar el suministro directamente del productor, o del fraccionador, o de un comercializador, sin pasar por la intermediación del distribuidor, conforme surja de la reglamentación;

k) *Centro de canje.* Toda persona física o jurídica que opere facilidades de canje de envases.

Art. 3º – *Ambito de aplicación.* Quedan comprendidas en la presente ley las actividades de producción, fraccionamiento, transporte, almacenaje, distribución, servicios de puerto y comercialización de GLP en el territorio nacional.

Art. 4° – *Sujetos activos*. Son sujetos activos de la industria del gas licuado de petróleo los productores, fraccionadores, transportistas, almacenadores, prestadores de servicios de puerto, centros de canje, distribuidores, grandes consumidores y comercializadores. Las actividades reguladas por la presente ley podrán ser realizadas por personas físicas o jurídicas autorizadas al efecto por la autoridad de aplicación.

Los responsables de la distribución de GLP por redes y sólo en lo que se refiere estrictamente a esa actividad, se regirán de conformidad con los derechos y obligaciones que surjan de los respectivos contratos, de la ley 24.076 y, supletoriamente en lo que se refiere a la industria del gas licuado de petróleo por la presente ley.

Art. 5° – *Interés público*. Las actividades definidas en el artículo 3° que integran la industria del GLP son declaradas de interés público, en función de los objetivos señalados en el artículo 7° de la presente ley.

Art. 6° – *Libre ingreso a la actividad*. Las actividades comprendidas en la presente ley serán ejercidas libremente con arreglo a las disposiciones generales en ella previstas y las normas reglamentarias que de la misma se dicten. Dichas actividades deberán propender a la competencia, la no discriminación, el libre acceso, la asignación eficiente de recursos, la seguridad pública y la preservación del medio ambiente.

Art. 7° – *Política general en la materia*. Fíjense los siguientes objetivos para la regulación de la industria y comercialización de GLP, los que serán ejecutados y controlados por la autoridad de aplicación:

- a) Promover la competitividad de la oferta y la demanda de GLP y alentar su expansión, particularmente en aquellos lugares donde resulte antieconómico el desarrollo de redes de distribución de gas natural;
- b) Garantizar el abastecimiento del mercado interno de gas licuado, así como también el acceso al producto a granel, por parte de los consumidores del mercado interno, a precios que no superen los de paridad de exportación, la cual deberá ser definida metodológicamente, mediante reglamentación de la autoridad de aplicación;
- c) Proteger adecuadamente los derechos de los consumidores, posibilitando la universalidad del servicio, adecuada información y publicidad y el acceso al mismo a precios justos y razonables, con especial énfasis en el abastecimiento a sectores residenciales de escasos recursos que no cuenten con servicio de gas natural por redes;
- d) Propender a que el precio del GLP al consumidor final sea el resultante de los reales

costos económicos totales de la actividad en las distintas etapas, para que la prestación del servicio se realice con las debidas condiciones de calidad y seguridad, tendiendo a su evolución sostenible, desarrollo en el largo plazo y en niveles equivalentes a los que internacionalmente rigen en países con dotaciones similares de recursos y condiciones;

- e) Incentivar la eficiencia del sector y garantizar la seguridad en la totalidad de las etapas de la actividad;
- f) Propender a una mejor operación de la industria del GLP, garantizando la igualdad de oportunidades y el libre acceso de terceros al mercado;
- g) Propender a la diversificación del uso del GLP, en distintos ámbitos, como el transporte, la industria, entre otros.

Art. 8° – *Autoridad de aplicación y organismo de fiscalización*. Será autoridad de aplicación de la presente ley la Secretaría de Energía de la Nación, la que podrá delegar en el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas), las tareas de fiscalización y control técnico. Asimismo, la autoridad de aplicación podrá delegar en las provincias el ejercicio de sus facultades mediante acuerdos particulares con cada una de ellas.

Art. 9° – *Condiciones de prestación*. Los sujetos activos de esta ley estarán obligados a mantener los equipos, instalaciones, envases y demás activos involucrados, en forma tal que no constituyan peligro para la seguridad pública. Esta obligación se extiende aún cuando no los utilicen y hasta la destrucción total y/o baja otorgada por la autoridad de aplicación.

Las instalaciones afectadas a la industria estarán sujetas a la fiscalización mediante inspecciones, revisiones, verificaciones y pruebas que periódicamente decida realizar la autoridad de aplicación, quien estará facultada para ordenar medidas que no admitan dilación tendiente a resguardar la seguridad pública.

Art. 10. – *Política de mercado*. El Poder Ejecutivo promoverá el incremento del nivel de competencia y desafiabilidad de cada etapa de la industria, garantizando la igualdad de condiciones para todas las empresas que actúen legítimamente en el sector, en beneficio del interés general y de los usuarios en particular.

La autoridad de aplicación, dentro de los ciento veinte (120) días de sancionada esta ley y con el asesoramiento del Tribunal Nacional de Defensa de la Competencia deberá:

- a) Establecer en caso de ser necesario mecanismos de transferencia del producto entre las etapas de producción, fraccionamiento,

comercialización y distribución, que sean transparentes y eficientes a fin de garantizar que todos los agentes del mercado puedan acceder al producto en igualdad de condiciones y priorizando el abastecimiento del mercado interno;

b) Establecer, en caso de ser necesario, mecanismos de estabilización de precios internos para el valor del GLP adquirido por fraccionadores, a fin de evitar bruscas fluctuaciones en los precios internos del mismo;

c) Realizar un profundo análisis de la constitución del sector y su comportamiento, a los efectos de determinar la necesidad de establecer límites a la concentración de mercado para cada etapa, o a la integración vertical a lo largo de toda la cadena del negocio. La limitación debe comprender a las sociedades vinculadas, controlantes o controladas, según lo establecido en el artículo 33 de la ley 19.550. Esta tarea deberá ser realizada juntamente con la autoridad de aplicación de la ley 25.156 e informada, en reunión conjunta, a la Comisión de Energía y Combustibles de la Cámara de Diputados y a la Comisión de Minería, Energía y Combustibles de la Cámara de Senadores, ambas del Congreso de la Nación.

TÍTULO II

Disposiciones particulares

CAPÍTULO I

Producción

Art. 11. – *La actividad de producción.* La actividad de la producción de GLP bajo cualquiera de sus formas o alternativas técnicas será libre, sin perjuicio de lo cual estará sujeta al cumplimiento de las previsiones de la presente ley y su reglamentación.

Podrá disponerse la apertura de nuevas plantas o la ampliación de las existentes sin otro requisito que el cumplimiento de las reglamentaciones técnicas que se dicten para su aplicación.

CAPÍTULO II

Fraccionamiento

Art. 12. – *La actividad de fraccionamiento.* Se podrá autorizar la instalación de nuevas plantas, o la ampliación de las existentes sin otro requisito que el cumplimiento de la presente ley y su reglamentación.

Para ser fraccionador se deberá contar con la autorización correspondiente otorgada por la autoridad de aplicación, llevar un registro de envases y cumplimentar los otros requisitos que fije la reglamentación.

Los fraccionadores podrán envasar GLP de cualquier productor, comercializador o importador con el solo cumplimiento de la normativa aplicable a la actividad, pudiendo hacerlo para más de una marca o leyenda. El envasado de GLP en envases que no sean de su marca o leyenda, podrá ser acordado libremente entre fraccionadores y propietarios del envase mediante contratos bilaterales. Estos contratos deberán ser notificados a la autoridad de aplicación.

El fraccionador deberá acreditar, al momento de solicitar la autorización o su renovación ante la autoridad de aplicación, la titularidad de un número de envases acorde con la magnitud de sus ventas, conforme parámetros que reglamentariamente establecerá esa autoridad.

Art. 13. – *Responsabilidades.* El fraccionador será responsable del envasado de GLP, y del cumplimiento de las normas técnicas, de calidad, seguridad y otras que a los efectos dicte la autoridad de aplicación.

Asimismo, el fraccionador será responsable por el mantenimiento y reposición de los envases propios y de todos aquellos que sean utilizados por éste a los efectos de envasar GLP para su posterior distribución o comercialización, así como por los tanques móviles o fijos de su marca instalados en el domicilio de los usuarios.

El fraccionador podrá vender libremente al público y en caso de hacerlo, deberá exhibir en el ingreso de cada planta el precio mayorista y minorista vigente.

Art. 14. – *Envases: su propiedad e identificación.* Los envases podrán circular libremente en el mercado nacional de conformidad con las previsiones contenidas en la presente ley y la reglamentación que se dicte al efecto.

La propiedad de los envases de los fraccionadores, les será atribuida de conformidad con la identificación de su marca o leyenda y número de registro. Los envases con marca no podrán venderse, siendo entregados en comodato a los usuarios por los fraccionadores.

En el caso que un tenedor de envase acredite la propiedad del mismo, el fraccionador dueño de una marca o leyenda deberá devolverle dicho importe al valor de mercado y entregarle el mismo en comodato.

Art. 15. – *Registro.* Créase un registro de envases de GLP, el que será llevado por la autoridad de aplicación.

Art. 16. – *Obligación de registración.* Todos los fraccionadores deberán encontrarse registrados y, a su vez, registrar los envases de su propiedad de conformidad con las reglamentaciones que dicte la autoridad de aplicación.

Salvo prueba en contrario y hasta su definitiva registración, se considerarán de propiedad de cada

fraccionador los envases que estén identificados con su marca o leyenda.

Art. 17. – *Capitación de envases.* Los fraccionadores, distribuidores y demás integrantes de la cadena de comercialización, están obligados a recibir de los consumidores los envases de su marca o de terceros. La autoridad de aplicación podrá adoptar un mecanismo de recepción de envases distinto, en función de la evolución futura de las modalidades de comercialización del GLP envasado.

Art. 18. – *Identificación y responsabilidad.* El fraccionador deberá individualizar los envases por él llenados, antes de la salida de la planta fraccionadora, con precinto de llenado en el cual constarán los datos identificatorios, que por reglamentación fije la autoridad de aplicación.

Ante cada llenado de un envase, propio o de terceros, que el fraccionador realice, deberá registrar en una etiqueta adherida al mismo, fecha de llenado, planta envasadora, prohibición de venta de envases y los demás recaudos que al efecto fije la autoridad de aplicación.

Art. 19. – *Centros de canje.* Los participantes del mercado deberán organizar centros de canje de unidades de envase, debiendo cada uno de esos centros estar registrados ante la autoridad de aplicación, en los términos que la misma determine.

Los centros de canje deberán ser de propiedad de personas físicas o jurídicas sin vinculación societaria directa o indirecta con alguno de los sujetos activos comprendidos en la presente ley, y podrán ser operados por sí o por terceros con la misma limitación de vinculación.

La autoridad de aplicación reglamentará e instrumentará la operatividad y control de los centros de canje en un plazo máximo de seis (6) meses contados desde la fecha de entrada en vigencia de la presente ley, aprobando tarifas máximas y condiciones necesarias para el registro de los mismos.

Art. 20. – *Parque de envases.* Las firmas fraccionadoras de gas licuado de petróleo integrarán un parque de envases de uso común mediante el aporte de envases inscritos con sus marcas y/o leyendas, cuya cantidad podrá ser establecida por acuerdo voluntario de las firmas fraccionadoras actuantes en la industria o, en su defecto, por la autoridad de aplicación.

El parque de envases de uso común persigue los siguientes objetivos:

- a) Asegurar el acceso a envases por parte de aquellas firmas fraccionadoras que, cumpliendo con toda la normativa vigente, encuentren dificultades para recuperar, a través de los centros de canje, los envases identificados con su marca o leyenda;
- b) Promover el funcionamiento competitivo, transparente y no discriminatorio del sector gas licuado de petróleo;

- c) Crear incentivos para asegurar el cumplimiento de la normativa de seguridad vinculada al uso de los envases de gas licuado de petróleo.

Ante la ausencia de acuerdo de las firmas fraccionadoras, la autoridad de aplicación deberá determinar el número o porcentaje de envases a integrar por cada fraccionadora en particular, cuidando que en ningún caso el número o porcentaje asignado exceda el estrictamente necesario para asegurar el normal cumplimiento de los objetivos antes fijados y sin afectar la operatoria de cada fraccionadora.

Los aportes al parque de envases de uso común deberán realizarse por marca y/o leyenda completa.

Art. 21. – *Seguro obligatorio.* Cada fraccionador deberá contratar un seguro de responsabilidad civil con cobertura integral por los daños causados a terceros, en las instalaciones o por los envases llenados, en las condiciones y hasta el monto que fije la autoridad de aplicación.

A los fines de quedar cubierto por el seguro integral el usuario damnificado deberá exhibir la factura donde conste la marca y/o leyenda del envase.

CAPÍTULO III

Transporte

Art. 22. – *Transporte.* El transporte del GLP ya sea por ductos, redes, carreteras, ferrocarril o agua estará sometido a las normas generales que regulen cada uno de estos medios y las específicas de seguridad y preservación ambiental que se dicten por la autoridad de aplicación.

Los fraccionadores, transportadores y almacenadores de GLP podrán solicitar concesiones de transporte a la autoridad de aplicación. A estos efectos, los titulares de tales concesiones tendrán los derechos contemplados en los artículos 39 a 44 y 66 de la ley 17.319.

CAPÍTULO IV

Distribución

Art. 23. – *De la distribución.* La distribución de GLP deberá efectuarse de acuerdo con las previsiones contenidas en la presente ley, su reglamentación y la normativa vigente o que al efecto se dicte, con excepción de lo dispuesto en el último párrafo del artículo 12 de la ley 24.076.

Art. 24. – *Obligación.* Los distribuidores estarán obligados a inscribirse en el Registro de Distribuidores y a recibir los envases que cuenten con la identificación correspondiente. Los depósitos y medios de transporte propios o de terceros que utilicen los distribuidores para el desarrollo de su actividad deberán cumplir con las normas de seguridad y calidad establecidas.

Art. 25. – *Responsabilidad.* Los distribuidores serán responsables por los envases que obren en su poder que no se encuentren debidamente identificados o precintados y pasibles de las sanciones establecidas en la presente ley y sus normas reglamentarias por las violaciones o incumplimientos en que incurrieran.

El distribuidor estará obligado a especificar en las respectivas facturas de venta la marca y/o leyenda del envase.

CAPÍTULO V

Almacenaje

Art. 26. – *Del almacenaje.* Quienes se dediquen a almacenar GLP por cuenta propia o de terceros, deberán cumplir con la normativa de seguridad en la operatoria que al efecto dicte la autoridad de aplicación.

CAPÍTULO VI

Acceso abierto

Art. 27. – *Del acceso abierto.* Se establece un régimen de acceso abierto para la actividad de almacenaje de GLP, de conformidad con las previsiones obrantes en el presente capítulo.

Art. 28. – *Acceso de terceros.* La autoridad de aplicación establecerá mediante reglamentación, los diferentes tipos y las condiciones de utilización de la capacidad sujeta a acceso abierto a terceros y las normas que garanticen la igualdad de oportunidades para todos los interesados. También fijará periódicamente, en caso de falta de acuerdo entre las partes y ante el requerimiento de cualquiera de ellas, las tarifas que, como máximo, deberán abonarse por el servicio.

Cualquier persona física o jurídica que solicite el uso de capacidad sujeta a acceso abierto según lo establecido en el párrafo anterior, deberá estar inscrita, de conformidad con la presente ley, como fraccionador, distribuidor, comercializador o gran consumidor.

Art. 29. – *Procedimiento operativo del acceso abierto a terceros.* La autoridad de aplicación, en un plazo no mayor de sesenta (60) días, dictará las normas de procedimiento operativo del acceso abierto a terceros.

Art. 30. – *Parámetros para la fijación de la tarifa.* La autoridad de aplicación considerará los siguientes parámetros para la determinación del cuadro tarifario por los servicios que se corresponden al acceso abierto a terceros:

- a) Costos variables de operación y mantenimiento del activo;
- b) Remuneración del capital;
- c) Rentabilidad razonable para el operador o titular del activo.

En ningún caso, las tarifas podrán superar la media de los parámetros internacionales.

CAPÍTULO VII

Comercializadores

Art. 31. – *Comercializadores.* Los comercializadores deberán inscribirse en el registro correspondiente y podrán vender GLP a granel, con el solo cumplimiento de la normativa aplicable a la actividad. También podrán comercializar libremente en el mercado interno el GLP que se importe.

Ningún fraccionador podrá imponer a los comercializadores cláusulas o condiciones de exclusividad o de obligaciones de compra. Las disposiciones contractuales que de alguna manera violen esta prohibición, serán nulas de nulidad absoluta, no pudiendo ser opuestas contra el cocontratante ni terceros.

A los fines de la fiscalización de lo normado en el presente artículo, la autoridad de aplicación podrá solicitar en cualquier tiempo la exhibición de los contratos de vinculación entre fraccionadores y comercializadores.

CAPÍTULO VIII

Gran consumidor

Art. 32. – *Gran consumidor.* La autoridad de aplicación determinará el nivel de volumen a partir del cual se considerará al consumidor como gran consumidor y deberá inscribirse en el registro correspondiente. Los grandes consumidores no podrán fraccionar ni comercializar el GLP que almacenen y sólo podrán almacenar para consumo propio, en cantidades razonables que permitan el desarrollo normal de sus actividades.

Art. 33. – *Instalaciones de almacenaje.* Los grandes consumidores deberán contar con instalaciones de almacenaje que cumplan con las normas de seguridad y cuidado del ambiente que la autoridad de aplicación establecerá a tales efectos.

CAPÍTULO IX

Precios de referencia del GLP para uso domiciliario

Art. 34. – *Precio de referencia para GLP en envases.* La autoridad de aplicación fijará, para cada región y para cada semestre estacional de invierno y verano, un precio de referencia para el GLP de uso doméstico nacional en envases de hasta cuarenta y cinco (45) kg, el que deberá ser ampliamente difundido.

Dicho precio referencial será calculado, propendiendo a que los sujetos activos tengan retribución por sus costos eficientes y una razonable rentabilidad, con base en el precio mensual del GLP a granel a la salida de la planta productora calculado se-

gún los principios determinados en el inciso *b)* del artículo 7º, los valores que los respectivos fraccionadores envíen bajo declaración jurada de venta, la información del mercado de la distribución y las estimaciones que realice la autoridad de aplicación.

Si se verifican en el mercado apartamientos significativos a los precios de referencia, la autoridad de aplicación podrá aplicar las sanciones establecidas en el artículo 42, capítulo II –contravenciones y sanciones–, de la presente ley.

CAPÍTULO X

Operaciones de importación y exportación

Art. 35. – *De la importación y exportación.* queda autorizada la libre importación de GLP sin otro requisito que el cumplimiento de la normativa vigente y sin necesidad de autorización previa.

La exportación de GLP será libre una vez garantizado el volumen de abastecimiento interno, debiendo mediar en cada caso autorización del Poder Ejecutivo, dentro del plazo de treinta (30) días de recibida la solicitud. El silencio implicará conformidad.

Art. 36. – *Restricciones.* El Poder Ejecutivo, por sí o a solicitud de la autoridad de aplicación, podrá disponer medidas restrictivas a las operaciones de importación de GLP, salvaguardas y otras medidas compensatorias preventivas o punitivas cuando las mismas estén subsidiadas en su país de origen, en tanto no contravengan disposiciones contenidas en acuerdos multilaterales, regionales o bilaterales suscritos por la República Argentina de aplicación al sector.

TÍTULO III

CAPÍTULO I

De la autoridad de aplicación

Art. 37. – *Funciones y facultades.* La autoridad de aplicación de la presente ley tendrá las siguientes funciones y facultades:

- a) Hacer cumplir la presente ley, su reglamentación y disposiciones complementarias, en el ámbito de su competencia;
- b) Dictar las normas reglamentarias para cada una de las etapas de la actividad;
- c) Evitar conductas anticompetitivas, oligopólicas, discriminatorias o de abuso de posición dominante, que afecten el libre funcionamiento del mercado de GLP y el interés público;
- d) Dictar las resoluciones e instrucciones que sean necesarias tendientes a asegurar el suministro del servicio;
- e) Reglamentar la contratación del seguro obligatorio en cada etapa de la comercialización;

f) Dictar las normas básicas a las cuales deberán ajustarse los fraccionadores en materia de procedimientos de prueba, reparación, destrucción y reposición de envases. Además podrá fijar la vida útil de los envases de modo de garantizar el uso seguro del mismo para el usuario consumidor;

g) Establecer mecanismos fiables e inviolables de identificación de envases, ya sea para su llenado con GLP o para establecer inequívocamente la leyenda y/o marca del recipiente;

h) Dictar las normas a las que deberán someterse las distintas instalaciones de almacenaje, fraccionamiento, comercialización y medios de transporte;

i) Dictar las normas a las que deberán ajustarse los participantes de esta ley en materia de seguridad, normas y procedimientos técnicos;

j) Requerir a los actores del presente régimen la documentación respaldatoria e información que sea necesaria para verificar el cumplimiento de la presente ley y su reglamentación. Asimismo, realizará las fiscalizaciones e inspecciones que sean necesarias a los mismos efectos y habilitará los registros pertinentes;

k) Promover ante los tribunales competentes las acciones pertinentes que tiendan a asegurar el cumplimiento de sus funciones y los fines de esta ley y su reglamentación;

l) Realizar el registro de exportaciones y el cálculo de la paridad de exportación;

m) Aplicar las sanciones previstas en la presente ley y su reglamentación;

n) Realizar el control sistemático de la calidad del GLP;

o) Ordenar, procesar y publicar la información sobre la industria de GLP; de las decisiones que adopte y los antecedentes en que las mismas se basen, publicando, entre otras cosas, la paridad de exportación del GLP, los precios a la salida de las plantas fraccionadoras y toda otra información del mercado de distribución y comercialización que sea de interés para el usuario final;

p) Capacitar a los funcionarios y empleados técnico-administrativos que sean necesarios para el cumplimiento de sus fines;

q) En general, realizar todos los actos que sean necesarios para el mejor cumplimiento de sus funciones y de los objetivos de esta ley y su reglamentación.

Art. 38. – *De los recursos.* A los fines de la presente ley, asígnase a la autoridad de aplicación los siguientes recursos: la recaudación de la tasa de fiscalización y control creada por el artículo 39.

Art. 39. – *Tasa de fiscalización. Determinación. Obligados al pago.* Las personas físicas o jurídicas que realicen las actividades que se encuentran reguladas en la presente ley deberán abonar anualmente al organismo correspondiente una tasa de fiscalización y control que a los efectos fijará el Poder Ejecutivo nacional.

Art. 40. – *Control jurisdiccional.* A los efectos de la actuación administrativa de la autoridad de aplicación, será de aplicación la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos y sus normas reglamentarias.

Agotada la vía administrativa procederá el recurso en sede judicial directamente ante la cámara federal de apelaciones con competencia en materia contencioso-administrativa con jurisdicción en el lugar del hecho. Los recursos que se interpongan contra la aplicación de las sanciones previstas en la presente ley tendrán efecto devolutivo.

CAPÍTULO II

Contravenciones y sanciones

Art. 41. – *Régimen sancionatorio.* El concesionario o productor que incurra en maniobras comerciales lesivas contra fraccionadores, almacenadores, distribuidores, comercializadores o consumidores, y también cualquier actor alcanzado por la presente ley que incurra en maniobras como las mencionadas respecto de cualquier otro integrante de la cadena o de los consumidores será pasible de las sanciones establecidas en el artículo 42 de la presente ley, sin perjuicio de las sanciones establecidas en la legislación de fondo.

Art. 42. – *Contravenciones y sanciones.* Los incumplimientos de la presente ley y su reglamentación serán sancionados por la autoridad de aplicación con:

- a) Apercibimientos;
- b) Multas que oscilaran hasta mil (1.000) veces el costo de una tonelada de propano a nivel mayorista, conforme el valor que fije la autoridad de aplicación, la que será graduada teniendo en cuenta la gravedad de la infracción, reiteración de los hechos, la cuantía del perjuicio ocasionado, la conducta posterior a la infracción por parte del incumplidor, la capacidad económico-financiera del infractor y las demás circunstancias y particularidades del caso;
- c) Inhabilitaciones de uno (1) a cinco (5) años;
- d) Suspensiones de entre treinta (30) y noventa (90) días;
- e) Clausuras y decomisos.

Art. 43. – *De la fiscalización.* En las acciones de prevención, constatación de contravenciones, cumplimiento de las medidas de secuestro, decomiso u otras que pudieren corresponder, la autoridad de

aplicación podrá requerir al juez competente el auxilio de la fuerza pública.

A tal fin bastará presentar ante el juez las correspondientes actuaciones administrativas, y formal requerimiento de autoridad competente.

TÍTULO IV

Fondo fiduciario para atender las necesidades de GLP de sectores de bajos recursos y para la expansión de redes de gas natural

Art. 44. – Créase un fondo fiduciario para atender el consumo residencial de gas licuado de petróleo envasado para usuarios de bajos recursos y para la expansión de redes de gas a zonas no cubiertas por redes de gas natural.

Art. 45. – El Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos Residenciales de GLP tiene como objeto financiar:

- a) La adquisición de GLP en envases (garrafas y cilindros) por usuarios de bajos recursos;
- b) La expansión de ramales de transporte, de distribución y redes domiciliarias de gas natural en zonas no cubiertas al día de la fecha, en aquellos casos en que resulte técnicamente posible y económicamente factible. Priorizándose las expansiones de redes de gas natural en las provincias que actualmente no cuentan con el sistema.

Art. 46. – El fondo fiduciario creado en el presente título estará integrado por los siguientes recursos:

- a) La totalidad de los recursos provenientes del régimen de sanciones establecido en la presente ley;
- b) Los fondos que por ley de presupuesto se asignen;
- c) Los fondos que se obtengan en el marco de programas especiales de créditos que se acuerden con los organismos o instituciones pertinentes, nacionales e internacionales;
- d) Los aportes específicos que la autoridad de aplicación convenga con los operadores de la actividad.

El Poder Ejecutivo reglamentará la constitución y funcionamiento del fondo, debiendo arbitrar los medios para que la operatoria del mismo tenga la mayor transparencia y eficiencia en su funcionamiento.

TÍTULO V

Disposiciones transitorias y finales

Art. 47. – *Plazo de registro de envases.* Los participantes de la industria del GLP contarán con un plazo máximo de un (1) año a partir de la entrada en vigencia de la presente ley, a los fines de registrar los envases de propiedad de los distintos actores y participantes.

Art 48. – *Caracterización de la actividad de distribución o comercialización.* La distribución y comercialización mayorista y/o minorista de GLP serán consideradas como actividades de consignación o intermediación, al momento de calcular tributos que graven el ingreso total o ingreso bruto de la misma.

Art. 49. – *Normas técnicas de aplicación supletoria.* Hasta tanto se dicte la reglamentación pertinente, continuarán siendo de aplicación las normas técnicas y de seguridad dictadas por la ex empresa Gas del Estado S.E. con las modificaciones dispuestas por la Secretaría de Energía en todo cuanto sea compatible con las previsiones de la presente ley.

Art. 50. – *Orden público.* La presente ley es de orden público y de conformidad con ello, derógase toda otra disposición que se oponga a la misma.

Art. 51. – *De la reglamentación.* El Poder Ejecutivo nacional deberá reglamentar la presente ley en el término de noventa (90) días a contar desde su entrada en vigencia.

Art. 52. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Saludo a usted muy atentamente.

MARCELO A. H. GUINLE

Juan H. Estrada.

Sr. Presidente. – En consideración en general.

Tiene la palabra el señor presidente de la Comisión de Minería, Energía y Combustibles, señor senador Fernández.

Sr. Fernández. – Señor presidente: el hecho de llegar a esta etapa después de tantas postergaciones constituye no sólo un triunfo del Senado sino una puesta en valor de esta institución, de la cual hablábamos recién.

A los efectos de ser absolutamente claro, creo necesario realizar un repaso metodológico de los antecedentes relativos a la creación de este marco regulatorio.

Dicho marco es el imperativo de la realidad política, económica y social del país. No es otra cosa. Y no menos trascendente resulta detallar la cantidad importante de reuniones que tuvieron lugar en el seno de varias comisiones y en esta casa, motorizadas por vehementes usuarios que exigían poder tener, durante el período invernal, certeza de precios, de volumen y de condiciones de seguridad. El precio, la falta de garrafas en poder de algunos fraccionadores, el mal estado del parque de garrafas, las condiciones de inseguridad y la falta de abastecimiento

eran las demandas de todos los sectores que visitaban este Congreso.

Y en la discusión de este marco regulatorio no podemos perder de vista al fragmento de usuarios –que son ciudadanos de segunda porque no tienen calidad en la prestación del servicio ni precio de referencia, además de las condiciones de seguridad paupérrimas– al que estamos haciendo referencia ni a sus asientos domiciliarios.

Dicho marco está destinado a los usuarios. Hemos logrado un marco de consenso con los fraccionadores, a los efectos de lograr un cierre total, absoluto y definitivo. El norte que tuvo esta comisión y los señores senadores a la hora de tratar más de diez proyectos al respecto, era el de dar una respuesta a los usuarios. Esa fue nuestra única obligación.

En ese sentido, haré una especie de ayuda memoria porque no se trata de porcentajes menores. Iré de menor a mayor, y enumeraré sólo aquellas provincias que tienen más del 50 por ciento de hogares con GLP. Me refiero a Tierra del Fuego, Salta, Córdoba, Jujuy, Tucumán, Neuquén, Santa Fe, San Luis, Catamarca, Santiago del Estero –70,8 por ciento–, La Rioja –73,8 por ciento–, Entre Ríos –89,6 por ciento–, Chaco –89,9 por ciento–, Corrientes –90,2 por ciento–, Misiones –92 por ciento– y Formosa, en la que el 94 por ciento de su población usa GLP. Los habitantes de estas provincias son los destinatarios del marco regulatorio.

En ese entonces afirmábamos que la calidad de servicio público sólo se les garantizaba a aquellos que estaban cerca del lugar en donde pasaba la red, pues aquel que estaba domiciliado fuera de la red troncal de gas natural o del tendido eléctrico quedaba “a la buena de Dios”.

El GLP es un sustituto del gas natural. Y la gente no accede al GLP porque se le antoja sino porque no tiene otra alternativa. En consecuencia, la buena noticia de la creación de un marco regulatorio no sólo radicaba en la fijación de precios, sino también en la creación de un fondo fiduciario con dos finalidades: que el Estado pudiera subsidiar un porcentaje de dicho fondo para las familias de bajos recursos, y que las redes de gas natural empezasen a ser una realidad en la República Argentina, lo cual no es menor.

Si nosotros pensamos que las redes de gas natural serán alimentadas por el fondo fiduciario, habrá que tener en cuenta a quiénes estamos afectando con esta medida, es decir, a los que en un mediano o corto plazo ven que se les termina el negocio. Esto también lo tenemos que decir ya que forma parte de la realidad.

En aquella oportunidad –creo que fue por octubre– se nos presentaron dos dificultades: el control del precio –fue un debate importante– y la calificación del servicio como público o de interés público. Esos temas fueron el centro del debate. En ese sentido, en los siete proyectos que abordamos de la Cámara de Diputados ni en los ocho que se iniciaron en esta Cámara había una sola iniciativa que abordara esos ejes.

En cuanto al control del precio –teniendo en cuenta que se trataba de un producto de valor de exportación cuyo precio estaba enmarcado en el techo de su valor–, apuntábamos a una variable móvil que pueda reaccionar frente a cada momento histórico. Recuerdo que en ese momento desechamos la aplicación de fórmulas mágicas, e hicimos referencia a las retenciones sobre exportación.

Hacíamos eje en el artículo 7°, garantizando el abastecimiento interno, la universalidad del servicio y un precio justo y razonable.

A continuación voy a hacer un breve intermedio, porque en el artículo 7°, que concretamente habla del precio, la Cámara de Diputados incorporó una modificación, que la comisión no admite.

A través de ella, se incorporan los costos de flete y seguro en los cálculos a tener en cuenta para la paridad de exportación, con lo cual está introduciendo variables que les quedan muy a mano a quienes están cerca de los puertos de la provincia de Buenos Aires, con salida de exportación, pero le quita margen de desarrollo y competitividad a los emprendimientos que actualmente se están desarrollando en Neuquén, en Salta y, seguramente, también en otros lugares del país.

Por eso, y porque además es extremadamente centralista y miope es que nosotros nos oponemos concretamente a esta modificación.

Luego –reitero– se discutió el tema del servicio público. Al respecto, nosotros entendíamos que con 900 mil distribuidores y más de 200 fraccionadores, con un elemento cuya presta-

ción no tenía el Estado, era más inconveniente que beneficioso declarar al abastecimiento de GLP como servicio público, y por eso lo denominamos como de interés público.

Me acuerdo de que en ese momento también discutimos en este recinto una cuestión estrictamente de competencia, ya que originariamente era facultad de la Cámara de Diputados la creación de impuestos. Por lo tanto, con acuerdo entre ambas Cámaras, que además fue explicitado por quien les habla cuando tratamos en este cuerpo el marco regulatorio, dejamos que la Cámara de Diputados redactara el artículo 50, que es la norma que se refiere a la reducción al 50 por ciento del IVA en toda la cadena de comercialización de GLP.

En ese entonces, recuerdo que fueron los señores senadores Morales y Capitanich quienes de alguna manera pretendían y elaboraron un proyecto para que, sin violar la división de materias entre ambas Cámaras, nosotros pudiéramos abordar el tema impositivo.

No obstante, nos hicimos eco del pacto y, así, remitimos el proyecto sin la carga impositiva a la Cámara de Diputados. Y lamentablemente la Cámara de Diputados trabajó, pero mal, porque la redacción del artículo 50 es deficitaria, que tendrá que ser salvada por un veto parcial o vía una ley correctiva, porque deja sin cobertura a la última parte de la cadena de fraccionamiento.

–Ocupa la Presidencia el señor presidente provisional del H. Senado de la Nación, senador Marcelo Guinle.

Sr. Fernández. – Pero esta no fue la única novedad que apareció. Yo diría que fuera de libreto, fuera de todo tipo de debate, aparece una modificación en el régimen de propiedad, que atenta contra el corazón mismo de este marco regulatorio.

Nosotros proponíamos cambiar seguridad por propiedad y que el fraccionador –tal cual lo fue históricamente en la vida de Gas del Estado– fuera el responsable exclusivo y excluyente no sólo del mantenimiento de la garrafa y de las condiciones de seguridad sino también del contenido y de la calidad de lo que se coloca dentro de las garrafas.

¿Por qué? Porque nadie puede decir que algún usuario de GLP alguna vez pretendió y soñó, y su sueño se convirtió en realidad, comprara la

garrafa. El usuario siempre quiso tener el contenido de la garrafa y nunca jamás el continente, es decir, el tacho de metal. No obstante, lo tuvo que comprar, porque estas cuestiones a veces pasan. Entonces, para ser usuario del GLP tuvo que comprar la garrafa.

Y esto que es absolutamente indefendible, porque en realidad está trabajando aportando capital de giro a quien debiera hacer toda la inversión, sucedió. Pero como está el antecedente de que una vez estuvo Gas del Estado y luego desapareció, y que hay garrafas que quedaron en poder de los usuarios, esta cuestión se tornaba un tanto dificultosa. Entonces, eso nos llevó –este y no otro fue el motivo– a ir dando vueltas tratando de encontrar un grado de consenso con todos los fraccionadores. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que a las operadoras de GLP se las puede identificar con las multinacionales, los fraccionadores tienen una composición distinta. Hay multinacionales, empresas nacionales y también diecisiete cooperativas. De hecho, esas diecisiete cooperativas funcionan en el país y han amortiguado el golpe. En concreto, han estado haciendo esta operatoria –el fraccionamiento y la comercialización– llegando a lugares donde, obviamente, el mercado no cerraba para que las multinacionales estuvieran. Esta preocupación generó alarma en algunos gobernadores que, obviamente, motorizaron los medios para que este Senado tratara el tema.

Nosotros en diciembre aceptamos parcialmente algunas modificaciones de Diputados, emitimos dictamen y abrimos el debate de nuevo, a tal punto que con un dictamen firmado el 9 de diciembre, hoy estamos tratando el marco regulatorio del GLP, después de tres reuniones con todos los fraccionadores y de una audiencia pública celebrada en el Salón Belgrano.

Nuestra intención fue, primero, tratar de poner las cosas en blanco sobre negro porque acá se dijeron muchas mentiras. Los *lobbies* siempre aparecen enfrascados, enmascarados y siempre están. Se dijo que con el marco regulatorio del GLP del Senado se aumentarían los precios. ¡Mentira!

Ninguno de los marcos regulatorios hace otra cosa que apuntar, justamente, a poner los precios en el lugar donde tienen que estar, haciendo jugar las retenciones, garantizando el abas-

tecimiento interno y, a partir de ahí, seguramente, una nueva etapa en la República Argentina.

Se dijo que había una usurpación en la propiedad de los terceros. También es una fantasía, porque el artículo 14, tercer párrafo, de la sanción del Senado, a sugerencia de la funcionaria Patricia Vaca Narvaja –en sintonía con usuarios y consumidores– dejaba abierta la puerta para aquel que quisiera vender su garrafa. El fraccionador, en caso de comprársela, tendría que hacerlo a justo título; esto es, a precio de mercado.

Se dijo también que la figura del comodato generaba una suerte de mercado cautivo porque quien prestaba el envase se aseguraba que el usuario, indefectiblemente, volviese él por ser quien le había prestado el envase. ¡Otro disparate! Concretamente el artículo 7°; el artículo que se refiere a la capitación de envases, obliga a que todos –absolutamente todos– en la cadena de comercialización reciban envases del usuario, los haya recibido en comodato de quien los haya recibido. Entonces, no se puede afirmar que el fraccionador de una marca o leyenda iba a ser dueño de envases que no eran propios. No se podía afirmar que con la figura del comodato se iba a apropiarse de un mercado cautivo, pero sin embargo se afirmó.

En realidad, hay sólo una cosa que preocupa a la Secretaría y a quienes, en definitiva, se van a hacer cargo de una historia añeja en la República Argentina. Digo que es añeja porque el marco regulatorio –me va a dar más razón y fundamento, seguramente, el vicepresidente de la comisión, que tiene más años que yo como legislador y que también ha insistido más en esta norma– se está tratando de imponer en la República Argentina hace más de diez años. Durante este tiempo, siempre apareció esta pelea y el usuario nunca tuvo respuestas.

Cuando nosotros establecemos el tema de la responsabilidad y de la titularidad de la garrafa, estamos apuntando a una queja de un sector que no son las multinacionales. Hay un sector importante en la República Argentina que con usuarios y consumidores en el seno de la comisión decían: “O ustedes garantizan la inversión o nadie más va a invertir en el parque de garrafas porque hace rato que nadie invierte”. Como el sistema de propiedad es medio “flanudo”, los que no invierten utilizan la inversión de terce-

ros, se roban las garrafas. Entonces, con un porcentaje menor de garrafas, participan por un fraccionamiento mayor.

Para garantizar la inversión, para dar claridad de que quien invierte va a tener seguridad en la inversión, se puso en el texto que la titularidad de la garrafa del fraccionador se va a adecuar a la normativa del marco regulatorio.

Cierto es que se trata de un bien mueble. Cier to es también que no es un saco ni una corbata ni una alhaja. Es un bien mueble pero con características muy particulares porque tiene GLP. Es un elemento peligroso, porque si no lo mantienen, si no le dan condiciones de seguridad, si no destruyen las garrafas en circulación que están en mal estado y las reponen con nuevas, uno transfiere a terceros riesgos innecesarios. El único que pierde en la no inversión es el usuario.

¿Qué sucedió durante todo este tiempo? Dijeron que la falta de inversión generaba un proceso de desinversión que iba a terminar destruyendo el parque comunitario. Analizamos lo que sucedía en el parque de las garrafas; la cantidad de garrafas que se estaban destruyendo y comprando.

¿Saben por qué se destruye una garrafa? El fraccionador que se encuentra con una garrafa en estado deplorable, que no se puede usar, si actúa responsablemente la tiene que destruir, reemplazándola por una nueva. Entonces, la garrafa que no tiene condiciones de seguridad necesarias desaparece del mercado. Ahora bien, si el que invierte, si el que repone la garrafa, no tiene garantía de que esa inversión en algún momento el mercado se la devuelva y le dé rentabilidad, obviamente no va a invertir más. Entonces, quiere condiciones para que efectivamente exista la inversión. Este marco regulatorio las prevé.

¿Por qué llegamos a la audiencia pública? Es cierto que en una ley no se puede contemplar absolutamente todo. En los artículos 12, 14 y 16 hay cuestiones que las cooperativas entendían que nosotros debíamos clarificar y decir qué era lo que estábamos queriendo decir, pero no porque no fuimos claros en las audiencias públicas, en las exposiciones de motivos, en el momento de su tratamiento, sino porque además decían que confiaban en este Estado nacional, en estas autoridades que hoy les permitieron crecer en

estos últimos cinco años en el mercado; querían una norma que no tuviera ningún tipo de duda, para que los funcionarios que la apliquen sean respetuosos del espíritu que concretamente tuvo el legislador al sancionar esta norma.

Entonces, con ese afán y después de haber terminado una rueda de innumerables reuniones, de haber reabierto el tema, después de una audiencia pública en el Salón General Belgrano, a la que fueron invitados todos los senadores –integrantes de la comisión o no–, las cámaras, y a la que asistieron público y periodistas, acordamos un final de trabajo, que es el que ha logrado la secretaría con los distintos fraccionadores. Se trata de un acuerdo absoluto y total –voy a pedir su incorporación en la versión taquigráfica– que firmaron todos los fraccionadores, los distribuidores y la Secretaría de Energía, en el que se clarifica puntualmente los alcances de los artículos 12 y 13 y puntualmente del artículo 14, en dos párrafos. Nosotros insistimos en la redacción del Senado. Este párrafo dice: “Aceptar que el artículo 14 del proyecto de ley aprobado por la Honorable Cámara de Senadores de la Nación, la asignación de la propiedad de los envases de los fraccionadores tiene por objeto asegurar la propiedad de la marca y/o leyenda, y asignar la responsabilidad del mantenimiento, acondicionamiento integral, destrucción y reposición de los mismos, como así también, los derechos exclusivos de llenado.

“Aceptar que en el artículo 14 del proyecto de ley aprobado por la Honorable Cámara de Senadores de la Nación, el titular de la marca y/o leyenda podrá recuperar de terceros fraccionadores los envases individualizados con marcas y/o leyendas sobre relieve o placas inscriptas a su favor, entregando envases a cambio, de igual capacidad que los solicitados, y siempre que su identificación corresponda a ese tercero.”

¿Qué se termina? Con respecto a este acuerdo, suscripto por todos los fraccionadores, por la Cámara de Distribuidores y por la Secretaría, hay consenso absoluto y total en el sentido de que este marco regulatorio se encuentra con los usuarios, a quienes nunca perdió de vista.

Me acompañaba la senadora por Mendoza una observación de una funcionaria de su provincia, que alegremente hacía referencia a la

audiencia pública del Salón Belgrano, en donde habíamos acordado con los fraccionadores, con algunos distribuidores y no habíamos tenido en cuenta a los usuarios.

Indudablemente, en esta Argentina todo es posible. Porque, en el marco regulatorio de GLP, se tuvo en cuenta especialmente el interés de los usuarios, los aportes que hizo Patricia Vaca Narvaja a ese marco en defensa de usuarios y consumidores. A los que nunca habíamos tenido en cuenta como corresponde y de lo que me alegro, fueron los empresarios. Solamente tuvimos en cuenta a las cooperativas, que tenían temores de que este marco regulatorio los asfixiara, les permitiera a los grandes robarles o quitarles parte del mercado.

En realidad, se los dije yo –entonces, lo puedo decir acá–, tampoco entendieron bien qué significaba este marco regulatorio. Porque, si hay un marco regulatorio que marche contra la concentración oligopólica, que rompa la estructura vertical y horizontal que actualmente existe, es éste. No hay un antecedente igual en la República Argentina. Es el primero que va contra la estructura vertical, contra la concentración horizontal y, además, rompe con el abuso de posición dominante, obliga a quienes tienen más mercado a empezar a ceder. Si no, hay que leer el marco, porque es claro y preciso.

La única duda en cabeza –repito– de algunas cooperativas, era qué queríamos decir con el artículo 14. Y lo que decimos con ese artículo es que el único responsable de la garrafa, de las condiciones en que circula, es el que hace negocio con ella, el fraccionador. Desde Gas del Estado hasta acá, siempre fue igual. Lo que pasa es que no había marco regulatorio y ahora tiene estatus de ley. Y existe un acuerdo, en el que supuestamente hay consenso total y absoluto, que da valor al trabajo de este Senado.

Además, habíamos emitido dictamen. Teníamos posición tomada. No obstante ello, y en virtud de algunos temores de un sector minúsculo, pero importante por minúsculo que fuera –sólo representa el 3 por ciento del parque fraccionador y el 6 por ciento del parque que fraccionan–, se lo tuvo en cuenta. Estuvieron absolutamente todos; consensuaron, se sacaron las dudas. Y puedo decir que, en este marco regulatorio, se trabajó como en muy pocos se pudo haber trabajado. Hay consenso absoluto y

total. Creo que se rompe con años y años de total falta de equidad.

El 48 o el 50 por ciento de los usuarios de la República Argentina está esperando que nos pongamos los pantalones largos y ubiquemos este marco regulatorio en el lugar en el que lo tenemos que colocar.

Hay otra queja para con Diputados, que seguramente el senador Ríos va a reforzar. Teníamos pensado que habría sido un muy buen gesto que los usuarios de primera, los ciudadanos de primera –con algunas excepciones– que utilizamos gas natural, tuviéramos que hacer un aporte solidario a este fondo fiduciario destinado a quienes, a veces, tienen que andar kilómetros y kilómetros con una garrafa a cuestas, a un precio quizás “disparado” y en condiciones absolutamente ilógicas y de falta de equidad.

Pero cuando ellos incorporaron el aporte solidario del usuario eliminaron –no sé por qué– el aporte que el Estado nacional puede pactar con los diversos operadores que fueron los que, entre otras cosas, hicieron posible nada más y nada menos que la ampliación del gasoducto San Martín y la prolongación del gasoducto al Norte. Si hubieran tenido en cuenta esa película, no lo habrían excluido nunca jamás, porque es parte de una construcción distinta en la Argentina. Esto hace que en la composición del fondo fiduciario nosotros tengamos necesariamente que insistir en la redacción de la Cámara de Diputados, no sin antes decir que me habría encantado, por lo menos personalmente, que los patagónicos, en un gesto de solidaridad, de retribución, hubiéramos podido aportar al fondo fiduciario lo que otros han aportado a lo largo y a lo ancho del país, compensando generación de energía alejada que tenemos nosotros en la Patagonia. Di los ejemplos en la otra sesión y no los voy a repetir ahora. Habría sido una buena oportunidad para empezar a conjugar solidaridad, pero aportando lo de uno. Perdimos la oportunidad porque a veces legislativamente no trabajamos bien.

Pongo de resalto el trabajo del Senado, y no el de esta comisión, sino el de todo el Senado, el cual participó en todas las audiencias con composiciones de distintos senadores provinciales.

Tanto el secretario como el subsecretario del área vinieron tantas veces como fueron requeridos.

Dimos todas las explicaciones pertinentes y como si todo ello fuera poco, trabajaron ayer hasta última hora para llegar a un acuerdo final y definitivo sobre la interpretación que reuniera a todo el sector.

¡Ojalá que los cierres de marcos regulatorios o de leyes como ésta, que en su momento presentan dificultades, porque hay discusión de intereses, sean similares a este! Espero que este cierre definitivo con los usuarios, con los fraccionadores y con los consumidores sea también un cierre político que resalte el valor del Senado, logrando mayorías abrumadoras, porque este marco regulatorio se trabajó con mucha seriedad, con mucha transparencia y claridad, pero además con las cosas arriba de la mesa. El único *lobby* que admitimos y que vamos a admitir siempre es el de la defensa del usuario. Redactamos un apartado para que ninguna cooperativa, ninguna pyme y ninguna empresa nacional tuvieran siquiera el temor de que la interpretación más mezquina y difícil del marco regulatorio pudiera menguar su capacidad comercial, restándole posibilidades de crecimiento.

—Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente de la Nación, licenciado Daniel O. Scioli.

Sr. Fernández. — Por último, quiero decir una cosa más: este marco regulatorio implica que los grandes van a tener que ceder mercado, y eso lo van a hacer solamente en beneficio de las pymes, de las cooperativas y de las empresas nacionales. Ellos deben estar en este momento discutiendo cómo se prepararán para esta nueva tarea, para esta nueva pelea, que es la pelea que necesita la Argentina: con más redistribución de renta, con más generación de empleo y con una política seria y transparente de puesta en valor de las instituciones, lo cual constituye una buena noticia que quiero compartir con ustedes, porque me parece un muy buen cierre.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el senador por Jujuy, de la Unión Cívica Radical, senador Morales.

Sr. Morales. — Señor presidente: en verdad, reiteramos conceptos vertidos en las sesiones en que este marco regulatorio se tratara en general y algunos de sus aspectos, en particular. A doce años de la sanción de la ley 24.076 viene

bien que podamos dar al país una norma que regule la comercialización del gas en garrafa.

Me referiré a algunas observaciones que hoy reiteramos y que hemos dejado planteadas en la anterior ocasión, sobre algunos conceptos centrales. Especialmente, me voy a referir al tema de la tipificación de este servicio como servicio público, cuestión que en su momento propusimos y en la cual no fuimos acompañados. ¿Por qué es un tema que tiene que ver con lo que aquí se ha dicho?

Porque la calificación de servicio público de esta actividad, definida en el artículo 3°, importa una serie de cuestiones que tienen que ver con las garantías que debe otorgar el Estado para la provisión de este servicio y con la tutela que el mismo Estado debe garantizar sobre los consumidores, sobre los usuarios.

Este es un tema que, lamentablemente, no se ha introducido en la iniciativa. Pero, a pesar de todas las cuestiones y disidencias que nosotros planteamos oportunamente, nos parece, de todos modos, que establecer un marco regulatorio es desde ya un avance en la materia.

Sin perjuicio de ello y del tratamiento serio que le ha dado el Senado —como se ha dicho aquí—, hemos observado que la Cámara de Diputados tampoco le ha dado un tratamiento ligero, sino que por lo que sabemos se ha analizado el tema en profundidad y con la participación de los distintos sectores involucrados. Más aún, lo sancionado por la Cámara de Diputados, como Cámara revisora, fue aprobado, en algunos casos, por unanimidad, incluyendo la opinión de todos los bloques, particularmente el justicialista y el de la Unión Cívica Radical, en cuanto a las modificaciones que se sugieren con relación a los artículos 12, 14 y 16, que ahora sostenemos desde el bloque radical del Senado de la Nación.

Por ello, nos ha sorprendido que en el día de hoy se haya convocado a una conferencia de prensa y que por todos los medios se diga que existe unanimidad en este Senado, sin antes consultar a la Unión Cívica Radical; por lo menos...

Sr. Fernández. — ¿Me permite una interrupción?

Sr. Presidente. — El señor senador Fernández le solicita una interrupción, ¿se la concede?

Sr. Morales. — Sí, cómo no.

Sr. Presidente. – Para una interrupción, tiene la palabra el señor senador Fernández.

Sr. Fernández. – Yo he dicho en la conferencia de prensa, y ahora lo ratifico acá, que cuando hablé de unanimidad me referí a un acuerdo de esas características con los fraccionadores y con los distribuidores. Además, sostuve que anhelaba que esto fuera aprobado por unanimidad en este recinto, razón por la cual me manifesté en tal sentido como una mera aspiración de deseos. Si bien espero que se concrete, dije que no era más que una expresión de deseos.

Sr. Presidente. – Continúa en el uso de la palabra el señor senador Morales.

Sr. Morales. – La aclaración es válida, aunque ello no es lo que surge de algunos cables –por lo menos– que me han llegado después de esa conferencia de prensa.

En tal sentido, quiero dejar en claro que el bloque de la Unión Cívica Radical no ha sido consultado al respecto. Incluso, no hemos sido parte de las reuniones que se llevaron a cabo con algunas de las cámaras mencionadas aquí; incluso, a nosotros nos sorprende que hayan sostenido la posición de la Cámara de Diputados en cuanto a la redacción de los artículos 12, 14 y 16, y que después terminen firmando un convenio o un acta acuerdo interpretativo, cuyo alcance no entendemos.

Antes de pasar a analizar puntualmente el tema de fondo de este marco regulatorio...

Sra. Avelín. – ¿Me permite una interrupción?

Sr. Presidente. – La señora senadora Avelín le solicita una interrupción, ¿se la concede?

Sr. Morales. – Cómo no.

Sr. Presidente. – Para una interrupción, tiene la palabra la señora senadora Avelín.

Sra. Avelín. – Creo que sería importante una aclaración para el resto de los senadores, ya que el miembro informante ha hablado de un acuerdo interpretativo que nosotros desconecemos; no sabemos si ese acuerdo es sobre este proyecto de ley que estamos tratando –por consiguiente, todavía no es ley. Si así fuera, eso me llamaría poderosamente la atención porque la interpretación auténtica de las leyes es una facultad privativa del Congreso. O sea, en el tratamiento de las leyes nosotros debemos interpretar lo que queremos decir en cada uno de sus artículos.

Por ello, estoy sorprendida de que se introduzca en el debate de este tema la idea de que ya se habría cerrado por unanimidad un acuerdo interpretativo de una ley que todavía no ha sido sancionada, y quisiera que el miembro informante nos explicara cuál es la denominación de ese acuerdo para que sepamos de qué estamos hablando. Porque lo que hoy está tratando el Senado es el texto de un proyecto de ley, las modificaciones que ha introducido la Cámara de Diputados y un orden del día, y ningún acuerdo o convenio que, por lo menos quien habla, desconoce totalmente.

Sr. Presidente. – Continúa en el uso de la palabra el señor senador Morales.

Sr. Morales. – Más adelante, cuando se analice puntualmente el artículo 14 y el tema de la propiedad de los envases, voy a volver sobre la cuestión del acuerdo.

A continuación, haré una breve descripción de algunas cuestiones que introdujo la Cámara de Diputados, algunas de las cuales nosotros compartimos y otras no. Concretamente, compartimos lo que ha dicho el presidente de la comisión con relación al tratamiento que se le ha dado en el Senado al artículo 7º y que la introducción de algunos conceptos por parte de la Cámara de Diputados va a deteriorar el criterio de fijación de los precios y, en algún sentido, puede encarecer el producto.

Por eso, señor presidente, si los senadores prestan atención se darán cuenta de que todo gira en torno a que si se aprueba una norma imprecisa, que no defina que se trata de un servicio público, ello implicará tener serias complicaciones. Si hubiéramos definido conceptualmente que se trata de un servicio público podríamos hablar de una última garantía para el usuario en el sentido de que el Estado intervendrá para tutelar sus derechos.

No existiendo este concepto, que nos parece central y cuya no aprobación lamentamos, hay que tener mucho cuidado con la redacción de cada uno de los artículos en cada una de las etapas de la comercialización.

Algunos temas planteados por la Cámara de Diputados no los compartimos. Por ejemplo, lo relativo al artículo 7º y el tratamiento que se le da a la cuestión impositiva. Lo cierto es que bien podríamos haber hecho nosotros una redacción y provocado una disminución del 50 por

ciento de la alícuota vigente. Quizá, como puede haber alguna tendencia a reducir el IVA del 21 al 18 por ciento –desconozco los lineamientos de política para el futuro, aunque podría ocurrir–, nuestro planteo era que la reducción fuera en los términos del 50 por ciento de la alícuota vigente, según corresponda. Sin embargo, insistimos en que el tratamiento impositivo dado por la Cámara de Diputados no es bueno.

En el seno de la comisión habíamos hablado con su presidente para ver si podía modificarse dicho tratamiento y, en ese sentido, una salida podría ser el veto por parte del Poder Ejecutivo, en caso de aprobarse en esta Cámara, y otorgar un nuevo tratamiento por una ley especial, complementaria al marco regulatorio, que podría ser lo más viable.

Estos son algunos de los aspectos generales que planteamos respecto de los aportes efectuados por la Cámara de Diputados. De eso se trata. Nadie dice que el tratamiento no haya sido serio en ambas Cámaras del Parlamento. Concretamente, en el Senado somos conscientes del empeño que puso la comisión –en especial, su presidente–, y de las convocatorias realizadas por el Parlamento, pero también agregamos que los aportes de la Cámara baja deben ser tenidos en cuenta.

Puntualmente, esos aportes están vinculados con los artículos 12, 14 y 16, ya que tienen que ver con el tema central de la propiedad de las garrafas.

Justamente, sobre este punto queríamos exponernos, porque tampoco vamos a decir que somos los dueños de la verdad absoluta. Es evidente que tenemos un claro disenso con el presidente de la comisión y con la opinión mayoritaria del cuerpo.

Señor presidente: quiero hacer algunas consideraciones para definir conceptualmente a qué aludimos cuando hablamos de la garrafa.

En verdad, toda esta cuestión comienza con la sanción de la ley 24.076, de privatización de la empresa Gas del Estado, que era la que poseía el monopolio del mercado del gas, el licuado de petróleo entre otros, que es usado por cuatro millones y medio de familias en el país y que, además, son los que tienen menos posibilidades de acceso a una red de tendido de gas natural y, por ende, pagan por él más de 7 veces que los consumidores de gas natural.

Como aquí se dijo, además, hay provincias que ni siquiera tienen esa posibilidad, por lo que no hay un problema de sectores con capacidad para conectarse al gas natural. Es el caso de las provincias del NEA que, en un 90 por ciento, tienen una población cautiva del consumo de gas en garrafa.

Nos parece que en esta guerra de garrafas que se generó a partir de la desregulación producida por la ley 24.076 y su falta de marco regulatorio, es bueno que el Congreso ponga de una vez el cascabel al gato e indique cuál será el marco para el futuro a fin de evitar la citada guerra y tutelar a quien corresponda frente a la cadena de comercialización, aunque fundamentalmente sabemos que es el usuario y el consumidor, de quien no nos tenemos que apartar. No nos interesan los acuerdos que se hagan entre los distintos sectores, aun con el secretario de que se trate o con los miembros de la Comisión de Energía, en la medida en que estos acuerdos, desde nuestro punto de vista, vulneren los derechos de los consumidores.

Nosotros creemos que si nos apartamos de la redacción de los artículos 12, 14 y 16 propuesta por la Cámara de Diputados, estaremos vulnerando los derechos de los consumidores.

Entiendo, entonces, que la Cámara de Diputados ha sido muy clara en el artículo 14 al introducir una modificación que resuelve cuestiones muy discutidas en la jurisprudencia. En ese sentido, el último párrafo del artículo 14 determina que la propiedad de los envases se rige por las normas del Código Civil. Creemos que debemos hacer un breve análisis de lo que dice el Código Civil y, por ello, la ratificación expresa del artículo 14 en el sentido de sujetar la propiedad de los envases a las normas del Código Civil, en particular a lo dispuesto por el artículo 2.412, que determina que la posesión de buena fe de una cosa mueble crea a favor del poseedor la presunción de tener la propiedad de ella y el poder de repeler cualquier acción de reivindicación si la cosa no hubiese sido robada o perdida. Este es el criterio que debemos ratificar expresamente, dado que no estamos de acuerdo con que se les transfiera a las fraccionadoras la propiedad de las garrafas.

En efecto, el artículo 2.311 del Código Civil determina el concepto de “cosa”, diferenciándolo de los objetos inmateriales susceptibles de tener valor, a los que denomina bienes.

Y tanto las cosas como los bienes integran el patrimonio de la persona física o jurídica.

Por su parte, el Código Civil avanza distinguiendo las cosas muebles de las inmuebles y comienza a introducir los conceptos de bienes registrables y no registrables, que es una cuestión sobre la cual debemos tener claridad. Digo esto porque el presidente de la Comisión acaba de decir que estamos hablando de las garrafas, que son cosas muebles, pero que son cosas muebles “especiales”. Y sobre este punto debemos tener mucho cuidado porque ya ha habido casos de dictado de resoluciones por parte de la Secretaría de Energía, como es el caso de la resolución 414/99. Digo esto porque no está expresamente establecido en la ley 24.076; no existe marco regulatorio y en ningún lado está escrito que el usuario es el propietario de la garrafa, aunque sí ha sido reconocido por la jurisprudencia. En efecto, el juez federal de Mendoza Alfredo Manuel Rodríguez dispuso sobreseer a un imputado por el delito descrito en el artículo 31, inciso b) de la ley 22.362, sosteniendo que en orden a la resolución de la situación legal del indagado, a su entender y tal como lo adelantara, el accionar desplegado por la firma Oeste Gas S.A. no constituye el uso de una marca registrada perteneciente a un tercero —en ese caso, YPF Gas—, sin su autorización, ya que la actividad que desarrolla la empresa citada consiste en la comercialización a nivel mayorista y minorista del gas licuado, el que indefectiblemente debe ser envasado en garrafas y en cilindros, de acuerdo con la cantidad que se necesite.

En tal sentido, lo que Oeste Gas S.A. y todas las distribuidoras del citado fluido comercializan es el contenido de los envases y no los envases mismos. Por último, resulta claro que cada adquirente de gas licuado por medio de envases es el titular de la garrafa, que compra por primera vez y que, tal vez debido a la cercanía con el comercio en donde la adquiere o al precio que abona por el gas o fluido, decide efectuar la transacción en tal o cual lugar, sin interesarle la leyenda que figura en la parte exterior del envase, dado que siempre debe existir sobre la válvula de apertura —y conforme a las muestras fotográficas— un precinto de seguridad adherido a la misma.

Es decir que en este fallo dictado por el juez federal de Mendoza Alfredo Rodríguez, se re-

conoce jurisprudencialmente que, por usos y costumbres, la garrafa es propiedad del usuario.

Este es un tema altamente debatido en la sociedad y debe tener una definición clara en este marco regulatorio, porque no lo dice la ley 24.076 y se lo debe establecer expresamente.

Y esto no tiene que ver solamente con la defensa de las cooperativas y de los comerciantes chicos respecto de los que quieren monopolizar el mercado de la comercialización del gas en garrafa.

Esta protección debe ser un objetivo de este Congreso y constituye un objetivo de nuestro bloque. Por eso, aquí se trata de defender los derechos de los usuarios y consumidores, quienes no tienen que estar sujetos al monopolio del mercado.

Y el Estado debe garantizar la transparencia del mercado, porque de lo contrario quienes terminarán siendo rehenes de un mercado monopólico serán, directa y precisamente, los usuarios y los consumidores.

Por esa razón, hay instituciones de defensa de los usuarios y consumidores que han hecho llegar sus preocupaciones sobre esta cuestión. Por ejemplo, recién comentaba el presidente de la comisión que existen expresiones de diversas instituciones de defensa de los usuarios y consumidores, como por ejemplo de Mendoza, quienes no están para nada de acuerdo con el convenio firmado.

Puedo citar a Mónica Lucero, coordinadora del Consejo Federal de Defensa del Consumidor y Directora de Fiscalización, Control y Defensa del Consumidor de la Provincia de Mendoza, quien no comparte para nada el convenio que han firmado los miembros de la Secretaría de Energía, los funcionarios del gobierno nacional y las cámaras que representan a las cooperativas, por cuanto entiende que atenta contra los derechos de los usuarios y los consumidores.

Es que en la medida en que éstos no sean propietarios de las garrafas, van a quedar cautivos del más poderoso, de quien tenga la posición dominante y, en verdad, de quien concentre la mayor cantidad de garrafas e imponga las condiciones del mercado. Estas son las cuestiones que se están planteando en este fallo.

Y el hecho de que se otorgue a esa cosa el carácter de mueble especial, la categoría de cosa registrable, tiene que ver con algo que ya ha hecho la Secretaría de Energía y es un error, como decía la resolución 414/99, que habla de que se impide al usuario propietario del envase la libre elección del proveedor al que puede acudir para llenarlo, que vulnera las normas de jerarquía superior tanto de rango legal como constitucional al conferir de manera indirecta a la garrafa o cilindro una suerte de carácter registrable que parece sustraerle la propiedad a quien adquirió esa cosa mueble, para conferirle con carácter de perpetua a su fabricante o a quien le colocó una marca.

Es decir que esta resolución, que fue sancionada en 1999, tenía el problema de dar a la cosa mueble garrafa la categoría de registrable. Y al imponerle esa categoría especial –de registrable–, vulneraba los derechos del usuario, pues éste estaba sometido a las normas rigurosas de un sistema de *clearing* o canje de garrafas que le impedía elegir con libertad.

Por ejemplo, el que tiene un vehículo y carga GNC es propietario de la garrafa de GNC que lleva en su coche y puede cargar ese tanque en la estación de servicios que desee, en virtud del principio según el cual es propietario de ese cilindro y tiene la libre elección de cargar donde quiere.

Este es un concepto central.

Entonces, si no se ha establecido el principio del servicio o del interés público, para mí estamos ante un concepto nuevo con relación a un servicio que es naturalmente público. Pero si esto no está planteado, nosotros con claridad decimos que debe establecerse que la propiedad de la garrafa tiene que ser del usuario, quien debe tener la libre posibilidad de llenarla donde quiera.

Por otra parte, con relación a un tema que aquí se ha planteado relativo a la seguridad, quiero decir lo siguiente. Hubo una campaña de algunas instituciones que señalaban cual sería el nuevo modelo de garrafa y que, si no se aprobaba el proyecto promulgado por la Cámara de Senadores, cada garrafa sería como una bomba. Esto no es así, porque incluso el propio marco regulatorio que aprobamos en el Senado deja expresamente establecido cual es la responsabilidad de los fraccionadores. Y que el usuario

sea el propietario de la garrafa no quiere decir que los fraccionadores, que son los que proveen y venden el contenido, se eximan de la responsabilidad de dar las garantías de seguridad de lo que venden.

Esto lo establecen el Código Civil, la jurisprudencia y la doctrina. El fraccionador que vende la cosa mueble consumible es responsable de todas las medidas de seguridad. Por lo tanto, cuando toma un envase, si no está en condiciones no lo tiene que llenar.

En consecuencia, no se tiene que mezclar la cuestión de que si la propiedad es de los usuarios se pone en riesgo la familia porque se genera un mercado inseguro. No es así bajo ningún punto de vista, en virtud de las responsabilidades que surgen del Código Civil y de este marco regulatorio.

El artículo 21 de la redacción propuesta por Diputados habla del seguro obligatorio –la que también es coincidente en su primer párrafo con el texto del Senado– en estos términos: cada fraccionador deberá contratar un seguro de responsabilidad civil con cobertura integral por los daños causados a terceros, en las instalaciones o por los envases llenados. Allí están las condiciones y el monto que fija la autoridad de aplicación.

Y prosigue: el distribuidor estará obligado a especificar en las respectivas facturas de venta la marca y/o leyenda del envase.

Es decir que en el mismo marco regulatorio que pretendemos aprobar se define claramente la responsabilidad de quienes son los proveedores de la cosa mueble consumible, que es lo que en definitiva va a comprar el usuario. Por lo tanto, no es que si nosotros aprobamos el artículo 14 propuesto por la Cámara de Diputados, en lugar de una garrafa se les daría una bomba a las familias.

Eso no es verdad. Esa apreciación no surge del Código Civil. Por eso es que disentimos en sostener el dictamen de esta Cámara con relación a los artículos 12, 14 y 16. Y tampoco surge de la letra del proyecto.

Es más, nosotros pensamos que hay que tomar otros artículos impulsados por Diputados, por ejemplo, la modificación del artículo 37 acerca de los deberes, obligaciones, funciones y facultades de la autoridad de aplicación. En la Cámara de Diputados se han agregado algunas

funciones específicas vinculadas con la tarea de tutelar al consumidor, porque el eje central de este marco regulatorio radica en cumplir con el artículo 42 de la Constitución, que justamente otorga rango constitucional a la defensa de los derechos de los usuarios y consumidores.

En consecuencia, no vaya a ser cosa que con la sanción de una ley que les da a los fraccionadores la propiedad de las garrafas, pero que deja indefensos y cautivos o rehenes a los usuarios y consumidores de un mercado monopólico –ya que tiene que ir a donde se le dice y no tiene el derecho de la libre elección como consumidor–, tal vez transgredamos una norma constitucional. Si sale la norma como se plantea aquí –es decir, con la redacción del artículo 14 propuesta por el Senado–, puede ser que los consumidores imputen alguna cuestión de inconstitucionalidad por el incumplimiento del artículo 42 de nuestra Carta Magna.

Además, con relación al marco regulatorio –aparte de lo establecido por la Constitución y el Código Civil–, el artículo 37 propuesto por la Cámara de Diputados también les da cobertura a los usuarios y consumidores, y hace referencia a la cuestión de la seguridad y de la responsabilidad cuando expresa que la autoridad de aplicación debe dar a publicidad en el marco del Sistema de Información Federal de Combustibles las paridades de exportación correspondientes –esto está relacionado con la cuestión del precio–, controlar la cantidad de producto envasado y el estado de conservación y mantenimiento de los envases en circulación. Es decir que existe una responsabilidad tutelar por parte del Estado en cuanto a la seguridad.

Y en otro apartado agregado por la Cámara de Diputados al artículo 37, se hace referencia a garantizar el funcionamiento de los centros de atención de reclamo de los usuarios, con la debida participación de los organismos de defensa del consumidor.

Por lo tanto, es verdad que no se definió a esta actividad como servicio público, cuestión que pone en riesgo todas estas situaciones que planteamos. Pero seamos claros en la redacción. Hay que tomar los agregados de la Cámara de Diputados porque son aportes y mejoran la ley y el trabajo realizado por el Senado.

Estamos de acuerdo con las observaciones al artículo 7° y al vinculado con el tratamiento.

Coincidimos en esos puntos con el presidente de la comisión.

Pero todos los otros artículos modificados por la Cámara de Diputados son aportes que mejoran el marco regulatorio, tutelan a los usuarios y consumidores dándoles la propiedad de la garrafa, evitan la guerra de garrafas y el mercado monopólico y le dan transparencia al mercado.

Es por eso que nos sorprende el acuerdo firmado. La verdad que no entiendo qué es lo que firmaron los señores de las cámaras. Porque acá, en el acuerdo, que firman Cadegas, Cegla, Cafragas –el del panfleto de la bomba–, por los fraccionadores independientes... Gente que respetamos, que han venido y que, inclusive, un día nos dijeron una cosa y otro, otra; no sabemos qué pasó en el medio. Acá que se habló tanto del *lobby*, yo digo que debe haber *lobby* para un lado y para el otro, porque justamente en la reunión con el subsecretario de Combustibles, Cristian Folgar, y los miembros de la Comisión de Energía, revierten su criterio, se dan vuelta totalmente y dicen que ellos están de acuerdo en un punto que interpreta el artículo 14.

El artículo 14 es lo que dice el artículo 14. En un convenio no se puede interpretar un artículo. No podemos juntarnos un grupo de argentinos y decir: “Yo soy del barrio tal, represento a la ONG XX e interpretamos la ley de esta manera”. Esto no es así. El sistema así no funciona.

Quienes dictamos las leyes somos nosotros y lo que dicen las leyes es lo que dicen las leyes. Y la justicia es la que se tiene que ocupar de dirimir cuestiones de diferencias de interpretación.

Entonces, cuando antes estaban en desacuerdo con el artículo 14 sancionado por el Senado, especialmente las cámaras de las cooperativas vinieron a pedir y a velar por los usuarios, para que nosotros sostengamos en su cabeza la propiedad de las garrafas, cumpliendo así con el artículo 2412 del Código Civil.

Pero después ellos dicen que aceptan que en el artículo 14 del proyecto aprobado por la Cámara de Senadores la asignación de la propiedad de los envases de los fraccionadores tiene por objeto asegurar la propiedad de las marcas, etcétera. No sé qué es lo que dicen. Lo que dice el artículo 14 es lo que dice el artículo 14 que hemos sancionado acá, o sea que la propie-

dad es de los fraccionadores. Y este es un tema central.

Reiteramos que el meollo de la cuestión es la definición de servicio público y la propiedad de las garrafas. Después todo está bien; cubre un vacío que por doce años no hemos llenado desde el Congreso de la Nación. Podemos tener diferencias puntuales, alguna disparidad de criterios sobre alguna cuestión, pero estos que señalé son los dos temas centrales, si realmente queremos proteger a los usuarios y si realmente queremos defender a los chicos.

Yo escuché muchos discursos en contra de los monopolios, los grupos, los *lobbies*, la hegemonía económica, pero resulta que vamos a sancionar una iniciativa en donde los que más peso tienen se apropian de todas las garrafas y perjudican a los usuarios y consumidores. Entonces, seamos coherentes entre lo que decimos y lo que hacemos.

Esta es nuestra diferencia. Y no nos creemos, como algunos, propietarios de la verdad.

Nosotros tenemos una profunda disidencia con ratificar los artículos 12, 14 y 16 sancionados por el Senado. Creemos que no está bien. Creemos que no estuvo bien el no establecer la categoría de servicio público, porque de eso se trata. La ley 24.076 califica como de servicio público a todo el tema del gas, ya sea natural o en garrafa. Entonces, no sé cómo es esto de que nosotros hemos dado la categoría de interés público a la actividad.

Por lo tanto, nosotros decimos que ese fue un tema central. Está bien; no se aceptó y este marco es un avance, pero no queremos que se retroceda en lo que establecen los artículos 12, 14 y 16. Por eso, nosotros vamos a ratificar el aporte y la corrección hecha por la Cámara de Diputados.

Porque así funciona esto; para eso hay dos Cámaras, para que hagamos las cosas bien; para que las cosas no vistas en una Cámara sean vistas en la otra; para que si nosotros no estamos de acuerdo con el tratamiento impositivo, digamos que no y busquemos la solución para que la alícuota del IVA baje al 50 por ciento; hay que conseguir ese objetivo.

En consecuencia, después de todas las sorpresas que hemos tenido, por el cambio de actitud de las cámaras –no sé qué pasó en el medio– y porque se nos incluía en un acuerdo

unánime, como que estaba todo cerrado e íbamos por un determinado andarivel, el bloque de la Unión Cívica Radical quiere fijar claramente su posición: los propietarios de las garrafas son los usuarios. Y el que les vende el gas, que es quien vende una cosa mueble que es consumible, es responsable por las medidas de seguridad de lo que vende; no está eximido de responsabilidad.

No estamos generando una bomba con la redacción de los artículos 12, 14 y 16 de Diputados. Lo que estamos haciendo es proteger al usuario, que tiene que optar: la garrafa es de él, va y carga donde quiere, y el cargador es quien debe tener la responsabilidad. Por eso hemos establecido todo lo que dice el marco regulatorio a partir del Código Civil.

Por todos estos motivos, señor presidente, –después, durante la consideración en particular seguramente haremos las observaciones del caso– nos vamos a oponer a los artículos 7° y 50; este último referido al tratamiento impositivo, aprobados por la Cámara de Diputados. Nos parece mejor que, en todo caso, con respecto al artículo 50 no figure nada y elaboremos una ley complementaria.

Reitero: no compartimos los artículos 7° y 50 de la sanción de la Cámara de Diputados. Después, aceptamos todas las modificaciones que se han remitido, señor presidente.

Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador Giustiniani, por la provincia de Santa Fe. Luego, también están anotados el senador Ríos y el senador Jaque.

¿Alguien más se quiere anotar?

Sr. Capitanich. – Yo, señor presidente.

Sr. Presidente. – Y el senador Capitanich. Adelante, senador Giustiniani.

Sr. Giustiniani. – Voy a insistir con mi voto en contra. Creo que fue el único en oportunidad del primer tratamiento que se hizo del proyecto de ley en revisión, que tuvo como Cámara iniciadora el Senado de la Nación.

Este proyecto no fue aprobado por unanimidad. Debo destacar que el “casi por unanimidad” no existe. Por lo menos, creo que reglamentariamente no existe, ¿no? Creo que es mayoría o unanimidad. Entonces, lo primero que quiero despejar es que nunca existió unanimidad aquí, en el Senado.

Tampoco me parece lógico ese juego que a veces se hace, que no es nuevo –tiene alguna entidad para hacerse–, de una suerte de cuestión corporativa entre el Senado y Diputados.

Considero que si en alguna etapa fue así, por lo menos en la que yo estoy viviendo no lo es. O sea: no hay una Cámara buena, una Cámara mala, una Cámara joven, una Cámara vieja. Hay una Cámara que representa a las provincias, que es el Senado de la Nación y una Cámara que representa al pueblo, que es la de Diputados, tal cual lo dice la Constitución Nacional.

Dicho esto, voy a reiterar mi oposición al proyecto en tratamiento por cuatro motivos fundamentales.

El primero –a partir del cual se enhebran todos los demás– es que se está estableciendo un marco regulatorio donde no se declara aquello de lo que se está hablando como “servicio público” sino como “de interés público”; y desde acá se desgranar todos las demás cuestiones. Este es el tema esencial; éste es el tema central. Creo que el Senado innovó en una categoría. He consultado a distintos tratadistas en lo que hace a servicio público y no existe marco regulatorio para algo que se califique como de interés público. Tiene que declararse “servicio público”. Podemos recurrir a citas de Gordillo, de uno y otro lado; podemos recurrir a Bidart Campos; pero lo cierto es que se trata de una verdadera innovación.

El segundo aspecto es la conformación del precio de la garrafa.

Por una cuestión de tiempo me voy a remitir a estos dos aspectos: es decir, a la falta de declaración como servicio público y al precio de la garrafa.

El tercer punto es el tema de la propiedad de los envases.

Finalmente, el cuarto punto es la falta de control del fondo fiduciario, porque este proyecto crea otro fondo fiduciario. De hecho, me parece que la cuestión de los fondos fiduciarios deberían ser materia de un análisis profundo en el Parlamento. Van creciendo en cantidad y monto por afuera del presupuesto nacional y creo que esto es absolutamente inconducente de un funcionamiento institucional que se precie de transparente.

Los puntos 3 y 4, fundamentalmente el tema de la propiedad de los envases, son los que mo-

tivaron las distintas reuniones posteriores a la sanción de la Cámara de Diputados. Comparto el criterio de la Cámara de Diputados en cuanto a considerar al Código Civil como punto de partida para la propiedad de la garrafa.

Este acuerdo que incorporan a la ley es otra innovación. Realmente la creatividad no tiene límites porque no tiene precedentes la incorporación de un acta acuerdo el día en que se sanciona una ley. Me parece buena la búsqueda de consensos. Por eso es bueno que se haya discutido tanto este proyecto. Sí quiero decir que están fuera de este consenso, por las características del marco regulatorio que se está aprobando, los 13.000.000 de argentinos que usan el gas de garrafa, sobre todo los 10.000.000 de pobres que pagan un precio totalmente por fuera del costo de producción de lo que se les está dando.

Por otro lado, no he visto preocupación por lo que se va a votar hoy de las cinco multinacionales que controlan el mercado de GLP en la República Argentina. He visto preocupación de las empresas de servicios públicos por el marco que está en la Cámara de Diputados enviado por el Poder Ejecutivo nacional, que sí comparto, y que espero que el oficialismo lo trate. Ahí sí aparecen los *lobbies* no solamente nacionales sino también internacionales. La verdad es que para este marco regulatorio no he visto ninguna preocupación de ninguna multinacional, porque este marco regulatorio, distinto a lo que aquí se expresó, no rompe ningún monopolio. Además, ningún marco regulatorio está llamado o destinado a romper un monopolio. Es lo contrario. El marco regulatorio encuentra su justificación ante la insistencia de oligopolios o monopolios.

Creo que compartimos del debate de aquella primera vez, del debate de hoy, del debate que se dio en Diputados que estamos en un mercado concentrado, porque a pesar de las más de 200 empresas que se dice que son las que están en el mercado, está claro que hay cinco empresas que tienen posición dominante. Se trata de cifras dichas por el miembro informante en la primera discusión de este marco regulatorio.

Entonces, si existe monopolio y oligopolio en un área de GLP como la que estamos nombrando, claramente se necesita su regulación a través de la declaración de servicio público, lo cual no se hace. Por eso nadie está preocupado, nin-

guna empresa. Creo que hay que ir a los datos y ver las ganancias extraordinarias que han tenido las empresas. Si uno declara servicio público se aplica la ley 23.696. En ese caso sí empezamos a hablar de rentabilidades razonables. ¿Qué significa la rentabilidad razonable? ¿Es una rentabilidad razonable en el GLP que las 200 empresas líderes del país tengan una renta neta promedio anual del 8 por ciento y estas cinco empresas alcancen al 24 por ciento? ¿Es verdaderamente razonable? No tiene ninguna razonabilidad. ¿Es razonable para las 13.000.000 de personas, 10.000.000 de las cuales está por debajo de la línea de pobreza, que en dos años vieron que la garrafa de 10 kilos que necesitan para cocinar se haya disparado de 8 pesos a 24, 25 o 30 pesos, de acuerdo con la provincia que se trate? No es razonable.

¿Por qué existe esta pulseada hoy –ya lleva más de un año– entre el gobierno y las privatizadas? Por la tarifa, por las inversiones y la rentabilidad. ¿Dónde está el debate, si no allí?

¿Qué va a significar, después que lo aprobemos hoy, este marco regulatorio? Absolutamente nada, porque con respecto al precio de la garrafa, se le “ata” la paridad de exportación.

No exagera algún comentarista especializado de los diarios cuando dice que la garrafa se puede disparar todavía más del precio que hoy tiene. Hasta se habla de 40 pesos para la garrafa de 10 kilos. No es exagerado. Porque acá, no se toma ningún recaudo en lo que hoy se va a sancionar, para que eso no ocurra y se lo considera según la paridad de exportación.

¿Qué tiene que ver la paridad de exportación con el usuario? Si se lo declara servicio público, absolutamente nada. Si queda con este marco regulatorio, tiene que ver.

En realidad, estamos tratando un marco regulatorio que es más de las empresas que de los usuarios. Entonces, en un marco regulatorio en el que debieran existir derechos y deberes de las empresas, verdaderamente no se está considerando el punto fundamental. Este hace referencia a la tarifa y a la ganancia de las empresas y a por qué debiera declarárselo servicio público. Está expresado –como decía antes– por Agustín Gordillo, que dice que es el monopolio o ausencia de libre competencia lo que determina el régimen jurídico especial y, en consecuencia, centramos la noción de servicio público en esta

idea. Partíamos de que es un oligopolio. Estamos en un mercado concentrado. ¿Por qué no lo declaramos servicio público?

No habría necesidad de discutir hoy este proyecto de ley, sino solamente de aprobar la iniciativa que envió el Poder Ejecutivo nacional y, en el listado de temáticas a regular, tendría que estar el GLP. Con eso sería suficiente. Tendríamos un verdadero marco regulatorio y estaríamos protegiendo a los usuarios del principal tema que les preocupa. A los usuarios les preocupa la garrafa; claro, estoy de acuerdo, pero les preocupa fundamentalmente el precio. Me refiero al pobre que tiene que pagar esa garrafa para cocinar.

Y tenemos que coincidir –este debate se dio y fue una respuesta que anunciamos que iba a ser ineficaz– en que la garrafa social ha resultado un fracaso. No sirvió; lo dijimos cuando la anunciaron. La garrafa social fue una respuesta más bien mediática ante una situación que surgió del escándalo, desde que el INDEC hiciera la constatación de que el GLP había subido en dos años el triple que el promedio de los productos de la canasta familiar. ¿Con qué justificación? Ninguna.

Porque no estaba controlado. No hay justificación de costos alguna. Así surgió la garrafa social.

En mi provincia –tenemos los datos de todas las provincias– hay 29 pueblos con garrafa social, sobre 360 pueblos. ¿Me explican cómo la familia tiene que pagar un remise o ir en bicicleta a buscar la garrafa social a otro pueblo o, en una misma ciudad, al conurbano? La garrafa social no funciona. Dijimos que no iba a funcionar. Porque cuando la gente tiene que ir a cargarse al hombro una garrafa de 15 kilos –que es la que usa, mucho más que la de 10 kilos–, tiene ir en taxi o en remise a buscarla, porque no tiene automóvil. La mayoría de esta gente no tiene automóvil. Entonces, al tener que ir a comprar esa garrafa lejos, la garrafa social terminó –como lo anunciamos desde el principio– en un fracaso. Ya nadie habla de la garrafa social, pero porque no funciona. Entonces, este es el tema central que estamos discutiendo.

Yo no niego la buena predisposición de los proyectos presentados para regular este servicio, que están todos motivados por la misma lógica: proteger al usuario frente a un servicio monopólico.

Sinceramente, les digo que con lo que se está sancionando no se protege al usuario.

Mucho se habla de los años noventa y está bien que se lo haga. Pero si pretendemos poner un punto de inflexión, debemos ir esencialmente a estos temas, es decir, a la concentración y a la distribución de la renta. Si la torta se sigue distribuyendo igual, el modelo sigue vivo y coaleando. Si actuamos así, estamos perdiendo una magnífica oportunidad para cambiar la dinámica de los noventa. Con esto no cambia absolutamente nada.

El inciso 19 del artículo 75 de nuestra Ley Fundamental incorporó el concepto “progreso económico”. Este mandato obliga claramente al Estado nacional a proteger a los sectores más desposeídos de la sociedad, brindándoles esa protección efectiva. Ahora yo pregunto lo siguiente:

¿Por qué los consumidores de gas por redes están siendo defendidos correctamente en el marco de la negociaciones de los servicios públicos hoy concesionados y los que consumen gas en garrafa, no?

Si la aprobación de esta ley implicara decir a los 13 millones de personas que consumen gas en garrafa que de 25 o 30 pesos que están pagando la garrafa de diez kilos, el precio se reduciría a 16, a 14 o a 10 pesos, como debería valer de acuerdo con los precios internos reales, estaríamos dando una respuesta fundamental a la sociedad. Pero no les podemos decir esto. Si les decimos que atamos el precio a la paridad de exportación es lo mismo que decirles nada, dado que con esto les estamos diciendo: “El precio va a seguir igual que ahora, pero no se sabe en qué momento aumentará”.

El ministro de Economía instaló una frase muy importante en oportunidad del canje de la deuda, cuando dijo: “Ahora, que hablen los mercados”. Anoche hablaron los mercados. Anoche habló Shell. Entonces, no podemos pretender poner en la ley una expresión de deseos en el sentido de que los precios no aumenten, porque en la mayoría de los países del mundo los precios de los combustibles están regulados, sobre todo, en América latina. Somos el único país junto con Perú que tenemos el mercado totalmente desregulado, libre y con libertad de precio. Fíjense lo que pasa en México, en Uruguay y en otros países donde se regula el precio del combustible.

Si queremos superar los 90, tenemos que revertir justamente estas cosas, porque en los 90 fueron hasta el hueso. Fue el período en donde más apertura, más desregulación y más privatización hubo. En México, por ejemplo, además de existir la Secretaría de Industria, está PEMEX, una empresa estatal que regula el combustible —el gasoil, la nafta y el GLP—. Es decir, ellos tienen una empresa nacional testigo. En cambio, nosotros no tenemos ni empresa nacional testigo, porque rifamos YPF y tenemos totalmente desregulado el principal mercado, que es el del petróleo y del gas.

Este es el tema central.

La semana anterior se discutió y se aprobó aquí, con mi único voto en contra, el tema del GLP. Se aprobó un subsidio anual de 600 millones de pesos anuales para seis empresas, a fin de mantener el precio —con lo que estoy de acuerdo— a los usuarios. ¡Pero miren si podríamos hacer redes de gas natural con 600 millones de pesos anuales! Para eso, hay que decir basta a los fondos fiduciarios. Hay que hacer un proyecto de obras públicas en el país a través del cual se puedan construir redes de gas natural. Sabemos que todo fondo fiduciario pasa a formar parte del feudo de un secretario del área y, después, ¡que eso lo controle Dios! Desde ya que eso escapa absolutamente a cualquier tipo de control del Parlamento. La misma transparencia del gobierno, del presidente para abajo, necesita de este tipo de controles. Por supuesto que no dudo de la buena intención del presidente en esta materia. Pero sabemos que los fondos fiduciarios no tienen ninguna posibilidad de control. Nosotros discutimos acá una ley, pero después, las empresas exigen distintas cosas todos los días.

Por estas consideraciones, voy a votar en contra de este proyecto que, en algunos aspectos, ha sido mejorado por la Cámara de Diputados. Por supuesto que no mejoró el aspecto esencial, que es la no declaración de esta actividad como un servicio público, que es el punto central.

Voy a aportar algunos otros datos: un informe de la Defensoría del Pueblo de la Nación señala que desde 1995 hasta 2001 las petroleras obtuvieron solamente por el gas licuado de petróleo una utilidad neta de 4.700 millones de pesos o dólares —por cuanto en ese momento

un peso equivalía a un dólar—. Ese mismo informe determinó que durante 2001, en la Argentina se pagó el kilo de GLP a 1,10 dólares; mientras que en Chile, Brasil y Paraguay, el precio del gas licuado de petróleo comprado en nuestro país osciló entre 0,59 y 0,72 dólares. Es decir que en este tema seguimos en el peor de los mundos.

En materia de empresas de servicios públicos, todos los aspectos que mencionamos demuestran una concentración fenomenal, por lo que en lugar de desandar un camino para lograr que el mercado funcione más transparente y competitivamente, se está consolidando una situación de inequidad que, lamentablemente, paga la inmensa mayoría de los argentinos.

Por estas razones, reitero que voy a votar en contra del proyecto en consideración.

Sr. Presidente (Guinle). – Tiene la palabra el señor senador Ríos.

Sr. Ríos. – Señor presidente: creo que estamos discutiendo uno de los dos elementos –por lo menos, que son de mi conocimiento– que mueven la economía argentina y que han permanecido a precio dólar. Ellos son los peajes en la hidrovía Paraná y el GLP –gas en garrafa–. En este último caso, su precio ha tenido la evolución que señaló el señor senador Giustiniani: en la época de la convertibilidad, costaba alrededor de 9 dólares y hoy sigue costando, más o menos, 9 dólares.

Si atendemos a cómo evolucionaron los costos, insumos y precios en la República Argentina, es evidente que alguien ganó mucha rentabilidad si mantuvo sus precios a valor dólar. Entonces, tocamos un problema central, aunque lo es mucho más en las zonas marginales del país, razón por la que no es algo que estará en la tapa de los diarios. Quizás, aparezca como algún comentario político al margen, aunque reitero que es una cuestión central.

Trato de ubicarme en el marco regulatorio y en la discusión de la doctrina de los servicios públicos, pero también, sin que nadie se ofenda, intento hacerlo desde el punto de vista de aquel que tiene que comprar la garrafa. Pareciera que hay algunos que son usuarios de gas natural y se imaginan qué es lo que pasa en los lugares donde tienen que comprar la garrafa; es decir, cómo funciona la secuencia.

Cuando se habla de servicio público, si bien no tiene que ver con la jurisprudencia, técnicamente sí tiene que ver que si uno aplica sanciones en una categoría de producto denominado como servicio público es porque hay otro que deberá hacerse cargo. En última instancia, debiera serlo el Estado.

Cuando uno ve en una provincia de nuestro país una camioneta que se cae a pedazos llena de garrafas ir por un camino de tierra hacia el pueblo, se da cuenta de que el Estado no está en condiciones de tomar esa responsabilidad en última instancia. De ahí que, si bien es muy bueno discutir sobre doctrina y jurisprudencia, hay que reconocer que si uno le quiere decir a un habitante sin posibilidad de acceder al gas natural –porque directamente no existe– que podrá adquirir la garrafa a 17 pesos, le está mintiendo, porque no le va a llegar en modo alguno. Este es el problema y es la respuesta que deberemos imaginar desde la posición del que usa la garrafa y no desde una ingeniería o doctrina jurídica.

¿Qué cambios se proponen? Porque esta norma comenzará a regir cuando sea promulgada, no es retroactiva. ¿Cuál es la secuencia lógica hoy? Que aquel que ponía la garrafa en la bicicleta, se iba a la distribuidora para cambiarla y luego, volvía a la distribuidora, si estaba en mal estado, y compraba otra; ahora significará que podrá ir a la distribuidora para venderse la y si no, quedársela, aunque el distribuidor tendrá la obligación de entregar otra en comodato con el producto adentro, que en definitiva, es lo que le interesa. ¿Acaso a alguien en la Argentina le interesa ser dueño de una garrafa? ¿A quién le importa ser dueño de una garrafa? Lo que le importa es el gas que está en su interior. La propiedad de la garrafa no es la discusión.

Decía bien el señor senador Fernández que la discusión de la disputa del parque de garrafas es una cosa de los empresarios. Yo planteé la discusión desde el punto de vista de los usuarios. Tal vez, no hice diferencias entre cooperativas menos protegidas, nacionales y multinacionales. Pero quise discutir la necesidad y los problemas de los usuarios, aunque poco a poco nos enredamos en una discusión propia de los empresarios.

Con el mayor de los respetos, debo decir que hubo peleas sobre cómo se administra el par-

que de garrafas, que nada tienen que ver con el marco regulatorio, aunque nadie discutió cuando hubo que ponerle un precio de 25 pesos. En eso hubo un acuerdo total.

Lo que planteamos hoy es cómo es la secuencia del hombre que pone la garrafa en la bicicleta y va a comprar una nueva. Les pido que analicen el marco regulatorio desde esa óptica y con sentido común, porque si empezamos con los grandes análisis jurídicos, no servirá para los usuarios, que utilizan sentido común y no les importa el gran debate, sino que el sistema funcione adecuadamente.

Acá, garantizamos que podrá vender la garrafa de su propiedad –que nadie sacará de su vivienda y dirá que pertenece a otro– y si no quiere hacerlo, podrá guardarla, aunque no creo que haya muchos interesados en la Argentina. Creanme: nadie quiere tener un depósito de garrafas en el patio de la casa. De lo contrario, la opción que tiene es la de ir a un distribuidor, decirle que le entregue una garrafa cargada y firmarle un comodato. Esta es la secuencia lógica para alguien a quien debemos facilitarle la situación para que pueda conseguir su garrafa a un precio justo y razonable.

En el marco regulatorio, muchos artículos se refieren a cómo se va a fijar el precio de referencia y cuáles van a ser los mecanismos sancionatorios para que ese precio de referencia se cumpla. Esto es lo que está funcionando en todos los lugares y para todos los productos que no pueden ser reemplazados por el Estado en su prestación o en su cumplimiento.

Es bastante lógico lo que tratamos de trasladar en la secuencia de cómo se compra una garrafa. Entonces, les pido que analicemos esta cuestión con la óptica de quien compra la garrafa.

Los senadores de las provincias en donde no se puede hacer otra cosa que comprar una garrafa o un tubo de gas, podrán ayudarme en este análisis...

Sr. Morales. – ¿Me permite una interrupción?

Sr. Presidente (Guinle). – Le solicita una interrupción el señor senador por Jujuy.

Sr. Ríos. – No la concedo, señor presidente.

En las provincias de Corrientes, Misiones y el Chaco, la situación es la misma; la cifra que

mencionó el senador Fernández oscila en un 90 por ciento de los habitantes que utilizan gas licuado de petróleo; el 10 o 9 por ciento restante utiliza leña. Es decir, no están en otro estadio social, sino que están por debajo. Entonces, la lógica a aplicar tiene que funcionar en esa región del país. Les pido así que analicemos el tema con la lógica de esa zona, en la que existe obligación y la garrafa debe llegar. No sé si es un servicio público o si es de interés público; lo que sé es que tiene que llegar. Y si fijamos todos estos mecanismos y aducimos la protección al usuario para que la garrafa no llegue, vamos a estar mintiéndole a la gente. Vamos a fijar un gran sistema protector por el que no podrá ni siquiera cruzar la garrafa.

Esta cuestión se abordó cuando esta Cámara discutió el marco regulatorio, donde todavía no había inserción empresarial para discutir la propiedad de los envases. Cuando apareció la inserción empresarial comenzó el problema de los envases, dado que en aquel momento, discutimos sólo sobre la visión que cada uno tenía acerca de la forma de defender a los usuarios. Por lo tanto, el debate sobre la propiedad de los envases y el parque de garrafas me parece que a los usuarios no les importa mucho, ni les compete ni los perjudica. Su problema es tener acceso a una garrafa llena y que no les cobren el envase cada tanto, dado que es propiedad del usuario y no del que lo llena.

Me quiero referir ahora al artículo 46. Ha dicho bien el miembro informante cuando habló de la conformación del fondo fiduciario, que defiende y voy a seguir defendiendo a rajatabla porque no es sólo un discurso sino una forma concreta de cerrar iniquidades.

La Cámara de Diputados no cumplió con lo que habíamos conversado en el ámbito de una reunión de las comisiones de Energía y Combustibles de esa Cámara y de Minería, Energía y Combustibles del Senado. Digo que no cumplió porque habíamos acordado otra cosa. Habíamos acordado que ellos incorporaban un nuevo ítem, que era el aporte solidario de los usuarios.

De todas maneras, voy a seguir confiando en los usuarios, en la gente y no en una posible negociación que pueda hacer el Estado con los prestadores de servicios. Creo que poco le puede aportar a un fondo fiduciario una negocia-

ción con ellos. Y en el peor de los casos, si me estoy equivocando totalmente y están dispuestos a hacer el aporte, lo pueden hacer sin que se lo diga taxativamente en la norma; el aporte no está prohibido, así que lo pueden hacer.

Lo que sí quiero desarrollar es un criterio de estricta solidaridad con la gente que no puede acceder al precio del gasoil y con la gente que, de alguna manera, necesita buscar todos los fondos de financiamiento posibles para las redes de gas. Por eso, insisto al presidente de la comisión para que acepte la modificación realizada por la Cámara de Diputados, porque entiendo que en ella taxativamente establece el aporte de los usuarios. Y en cuanto al aporte de los empresarios, no va estar prohibido; también lo podrán realizar también, todo lo cual considero que garantiza un aporte al fondo fiduciario que queremos generar para evitar inequidades.

Sr. Presidente (Guinle). – Tiene la palabra el señor senador Jaque.

Sr. Jaque. – Señor presidente: de acuerdo con lo que se viene manifestando en esta discusión, existen cosas que han quedado claro que justifican la razón de ser de este marco regulatorio que tenemos que dar al mercado del GLP.

En primer lugar, porque hay que cumplir específicamente con la ley de regulación del transporte y la distribución del gas natural, que específicamente deja para un marco regulatorio por separado el mercado del GLP.

En segundo término, por cuanto existe pleno consenso de que en cuanto a la producción existen antecedentes de abusos de posición dominante que hay que tratar de resolver, dado que tenemos problemas de fraccionamiento y distribución...

Sr. Presidente (Guinle). – Señor senador Jaque: el señor senador Morales le solicita una interrupción. ¿Se la concede?

Sr. Jaque. – Sí, señor presidente.

Sr. Presidente (Guinle). – Para una interrupción tiene la palabra el señor senador Morales.

Sr. Morales. – Señor presidente: quiero efectuar una breve aclaración con relación a lo manifestado por el señor senador Ríos, quien se refería a cuando el usuario va en bicicleta a llevar la garrafa al distribuidor para comprar una

nueva y el distribuidor se la devuelve, debido al mal estado en que se encuentra. Esto no es posible, debido justamente a lo establecido por el artículo 13 del dictamen, más allá de que nosotros apoyamos el de la Cámara de Diputados.

Voy a leer lo que establecen ambos dictámenes –el de la Cámara de Diputados sólo modifica una palabra– en el artículo 13: “Responsabilidades. El fraccionador será responsable del envasado del GLP, y del cumplimiento de las normas técnicas, de calidad, de seguridad y otras que a los efectos dicte la autoridad de aplicación”.

“Asimismo, el fraccionador será responsable por el mantenimiento y reposición de los envases propios y de todos aquellos que sean utilizados por éste a los efectos de envasar GLP para su posterior distribución o comercialización, así como por los tanques móviles o fijos de su marca instalados en el domicilio de los usuarios.”

“El fraccionador podrá [así dice el texto del Senado, mientras que el de la Cámara de Diputados expresa ‘deberá’, concepto que nosotros compartimos] vender libremente al público y en caso de hacerlo, deberá exhibir en el ingreso de cada planta el precio mayorista y minorista vigente.”

Entonces, justamente estamos ante un marco regulatorio, donde fijamos las obligaciones que tiene cada uno de los actores de la cadena de comercialización. Por eso, no puede ocurrir que al vecino que va en bicicleta a llevar una garrafa el fraccionador le diga, tranquilamente, que se vuelva con esa garrafa, porque precisamente estamos sancionando un marco regulatorio con obligaciones y responsabilidades.

Formulo esta aclaración para que no quede el concepto mencionado. Esto no es algo menor, porque tiene que ver con otra cuestión, que es la discusión de la propiedad, relacionada a su vez con la cuestión del mercado tendiente a evitar una posición dominante, pues un mercado monopólico o no transparente perjudicará siempre a los usuarios.

Sr. Presidente (Guinle). – Señor senador Jaque: tiene otros dos pedidos de interrupción. Uno del señor senador Fernández y otro del señor senador Ríos. ¿Los concede?

Sr. Jaque. – Sí, señor presidente.

Sr. Presidente (Guinle). – Para una interrupción tiene la palabra el señor senador Fernández.

Sr. Fernández. – Señor presidente: simplemente quiero formular una aclaración, porque pareciera que estamos discutiendo el tratado de la propiedad de los envases de GLP, cuando en realidad estamos hablando de un marco regulatorio.

Por eso, voy a ser taxativamente claro con relación a lo que expresa el artículo 14: “La propiedad de los envases de los fraccionadores les será atribuida de conformidad con la identificación de su marca o leyenda...”.

No estamos hablando de la propiedad de los envases, sino de los fraccionadores.

En base a esta redacción y a la que termina de leer el señor senador Morales, se invierte y se pone en cabeza de los fraccionadores la responsabilidad del mantenimiento y preservación de las condiciones de seguridad, vigentes en este marco regulatorio y en sintonía con lo que aprobamos originariamente. Es decir, la responsabilidad del fraccionador surge a partir del marco regulatorio.

Actualmente, un fraccionador que llena garrafas de un tercero y las larga al mercado, incurre en una responsabilidad lineal y solidaria en todos los integrantes de la cadena: el productor, el fraccionador, el comercializador y el usuario.

Pero esto no es así a partir del marco regulatorio, porque el fraccionador será el único responsable –como debe ser– de la preservación de las condiciones de seguridad en que ese envase funcione.

Por lo tanto, es cierto que el artículo 14 original hace alusión a la propiedad de los envases de los fraccionadores; no se refiere a la propiedad de los envases en líneas universales y generales.

Lo que sucede es que nos meten en la discusión de un tratado de propiedad, pero ésta no es una discusión civilista –con doctrinarios a favor y en contra– acerca del régimen de propiedad de una cosa mueble que –reitero– tiene características distintivas, no se trata de un saco. Por eso se hace referencia a la propiedad de los envases de los fraccionadores.

Además, en el último párrafo del artículo 14 –para que desaparezca de la escena la posibilidad de pensar en una usurpación–, se habilita a

que en el caso de que un tenedor quiera vender su garrafa, el fraccionador pueda comprársela. Pero no estamos hablando del régimen de propiedad. El fraccionador, para acreditar su propiedad, tendrá que cumplir con los requisitos. Y después de acreditarla, se tendrá que hacer responsable de las inversiones que deberá efectuar en el parque de garrafas para seguir comercializándolas.

Hago esta aclaración porque, si no, seguiremos enredándonos en una cuestión distinta. No estamos discutiendo el régimen de propiedad de los envases sino el marco regulatorio del gas licuado de petróleo, dándole responsabilidades al fraccionador en cuanto a la preservación, condiciones de seguridad, calidad de lo que pone adentro del envase y cantidad, porque todo el mundo sabe que no todos los envases tienen la misma calidad y cantidad de GLP, y que los envases, a pesar de que acusen 45, 15 y 30 kilos, no necesariamente responden a esa cantidad. Esta última fue otra de las quejas que se escucharon en las diversas audiencias públicas que se realizaron en este Senado.

No estamos discutiendo el régimen de propiedad sino el marco regulatorio. Sin un marco regulatorio, en el mercado se presentan cuestiones complicadas de resolver, como las que concretamente planteó alguien que viene del interior, que tiene el problema de poseer un 98 por ciento de usuarios de GLP.

Hay sectores que dicen que quieren un sistema donde el fraccionador pueda adueñarse de la garrafa pero con claridad, porque si no, pierden la inversión. Cuando se cierre el debate les mostraré unos gráficos que demuestran que no es cierto que el parque de envases esté bien. Contrariamente, está mal porque se invierte muchos menos de lo que se debiera en materia de compra y reposición de envases. Este es el quid de la cuestión.

Tenemos que resolver el problema del usuario. Y lo hacemos a través de un marco regulatorio.

Reitero, el corazón del marco no es discutir el régimen de propiedad de los envases, sino un marco regulatorio para usuarios de GLP.

Y los empresarios tendrán que adecuarse a ese marco regulatorio.

Sr. Presidente (Guinle). – Tiene la palabra el señor senador Ríos.

Sr. Ríos. – Señor presidente: creo que el senador Fernández ya lo explicitó, pero el artículo 13 –de acuerdo con lo manifestado por el senador Morales– en la versión de Diputados dice que el fraccionador será responsable por el mantenimiento y reposición de los envases propios y de todos aquellos que sean utilizados por él.

Por lo tanto, si no asume la responsabilidad del uso, no es responsable, con lo cual le puede decir al que va con la garrafa: “No, tu garrafa está en mal estado; te voy a vender otra”.

Entonces, lo que estamos diciendo es que no se la puede vender; le tiene que entregar la nueva a título gratuito. Con lo cual tampoco transfiere inversión, porque hasta hoy ha funcionado de esta manera. El empresario hacía figurar como inversión la fabricación de los envases, pero no es así, porque se los cobra al usuario. Por lo tanto, con la nueva norma esto va a tener que correr por cuenta de la inversión, y ella está incluida en el costo. Es decir que este artículo 13 le deja la opción al distribuidor a que le venda un nuevo envase al usuario.

Sr. Presidente (Guinle). – Tiene la palabra el señor senador Jaque.

Sr. Jaque. – Señor presidente: decía que dentro de las cosas que también hemos puesto de manifiesto que son problemas a resolver, están los inconvenientes que se ven en el fraccionamiento y la distribución, fundamentalmente en lo que hace al control, a la seguridad de envases, a la identificación y a lo que ha sucedido en el país con el precio de las garrafas, sabiendo que existen una escasa transparencia y un valor que ha sido muy abusivo.

Para poder comprender mejor, a veces es bueno recurrir a ejemplos. Si se tiene en cuenta que hablamos de un mercado que engloba a aproximadamente 16 millones de argentinos, porque son 4,5 millones de usuarios que con sus familias pueden llegar a los 16 millones, muchos de los cuales son de los más pobres de nuestro país, y comparamos el consumo promedio que tiene la Argentina en cuanto a gas natural, de aproximadamente mil metros cúbicos al año, que medido en términos de dinero es un gasto de 300 pesos al año, con el consumo promedio anual de aquellos que usan el gas licuado propano, que es de 200 kilos, lo cual equivaldría a unas 20 garrafas de 10 kilos, si consideramos

los valores actuales de 25 pesos estamos hablando de 500 pesos al año, vemos que si se buscara realmente defender al usuario y llevarlo al mismo consumo promedio anual que tiene el de gas natural, para decir que estamos generando igualdad de oportunidades, esa persona necesitaría gastar 2.000 pesos al año. Esto es lo que nosotros estamos tratando de resolver con un marco regulatorio como el que estamos proponiendo hoy.

¿Qué significa esto? Que la pregunta que nos tenemos que hacer no pasa sólo por el tema de la propiedad de la garrafa sino también por las cosas que debemos tratar de asegurarle a este usuario al que, entre otras cosas, queremos garantizarle igualdad de oportunidades.

En primer lugar, debemos garantizarle que no quede atado en forma efectiva a un único proveedor. En esto la iniciativa es muy clara. Acá en ningún momento se puso que solamente pueden circular garrafas o comprarse a un determinado distribuidor. Se aclara específicamente que todos los envases tienen libre circulación. Por lo tanto, afirmar que se queda atado a un distribuidor es una interpretación incorrecta.

Por otro lado, no sólo es la circulación, es la libre elección. Aquí en ningún momento se deja al usuario sin la posibilidad de elegir el lugar donde comprar ni cuál es la supuesta marca de lo que quiere adquirir.

A su vez, al usuario hay que garantizarle la seguridad. Y la seguridad engloba, entre otras cosas, el mantenimiento, la reparación, la destrucción y la reposición del envase.

–Ocupa la Presidencia el señor presidente del Honorable Senado de la Nación, licenciado Daniel O. Scioli.

Sr. Jaque. – En algún momento acá se quiso hacer una comparación con quien es propietario de un auto a GNC. Y en ese caso es cierto que la propiedad del envase pertenece al dueño del automotor. Pero nos olvidamos de algo importante. Al regular las condiciones bajo las que se otorga el GNC, se pusieron en cabeza del propio usuario las revisiones técnicas anual y periódica, que él debe afrontar para poder decir que ese envase está en condiciones de ser utilizado.

Y hay otra cuestión. La elección es cierta, él se moviliza con el auto adonde quiere y se acer-

ca hasta la bomba que le permite cargar el gas. Ahora bien, yo no me imagino a un usuario andando con una garrafa, máxime si no vive en un centro poblado, para ver dónde está el fraccionador para poder cargar. Yo trato de pensar en las cosas que más conozco. Provengo de un departamento de 42 mil kilómetros cuadrados. Cerca de la ciudad, vive gente a 350 kilómetros, pero si quisiera ir donde se fracciona tendría que ir con la garrafa más de 500 kilómetros. Yo no me lo imagino. Entonces, esto está muy relacionado también con lo otro que se pone en discusión respecto de si esto es servicio público o de interés público. Porque acá lo que también hay que tratar de analizar es que la cuestión no pasa sólo por un problema de principios o de ideologías, sino también de cuestiones que tienen que ser prácticas.

La misma doctrina indica cuáles son los conceptos bajo los cuales se debe establecer un servicio público. Mencionaré sólo algunos: la continuidad y la regularidad. Sin querer analizar demasiado, pensemos en la regularidad en cuanto a la provisión, especialmente no para quienes están en un lugar concentrado. También debemos pensar que en este país hay gente que no vive en forma concentrada; que hay dispersión en la población.

Por otro lado, tenemos que ver que, a la hora de pensar y resolver el precio razonable o abusivo de la garrafa, la solución no pasa sólo por expresar que esto es un servicio público. De hecho, para ser servicio público en primer lugar tiene que ser considerado de interés público; y acá estamos diciendo que es de interés público.

Lo cierto es que queremos tener una normativa que sea de aplicación práctica; que en realidad, lo que pongamos, llegue como beneficio al usuario. Si solamente declamamos, entonces lo que vamos a estar haciendo es decir al usuario que en realidad sólo nos interesa para poder hablar un poco de él, pero no iremos a la cuestión práctica: asegurarle accesibilidad y a precio razonable.

Creo que hay muchas cosas que uno puede discutir sobre este marco regulatorio.

Seguramente podríamos darnos muchas horas para la discusión de esas cosas, que pueden ser importantes pero que para el usuario se transforman en pequeñeces.

Considero que lo importante es que estamos tratando de sancionar una ley en el momento

oportuno. El invierno comienza dentro de muy poco y no hay que pensar solamente que esto va a venir a resolver un problema a la hora de tener que cocinar. También hay lugares del país donde se necesita para poder evitar los fríos bajo cero. Esos fríos comienzan dentro de muy poco y nosotros no podemos seguir relegando el tratamiento del tema.

En esta discusión han surgido aparentes contradicciones. Por un lado, hablamos de la defensa del usuario; de que quienes nos interesan son los usuarios. Pero luego decimos que, por ejemplo, no estamos dispuestos a subsidiar a los usuarios de GLP.

Debemos entender, primero, que los problemas que estamos resolviendo vienen de hace mucho tiempo y requieren la acción del Estado hoy. Obviamente, esa acción no se limita a tratar de resolver el tema sino a la búsqueda de un horizonte para que los problemas de hoy tengan solución en el futuro.

Yo creo que hay que tener presente que nunca se ha hablado de un subsidio a la oferta sino a la demanda. Por lo tanto, creo que es incorrecto decir que estamos sancionando leyes que benefician a las empresas. Lo que nosotros hacemos aquí es beneficiar a los usuarios. Si esto fuera un subsidio a la oferta, yo tampoco estaría aquí tratando de defender esta ley que considero razonable; y esto que parece una minucia no quiero que quede flotando en el aire. Ni lo que sancionamos con el GLP ni lo que estamos sancionando aquí constituye un subsidio a las empresas: se trata de un subsidio a los usuarios. Creo que hemos dejado esto bien claro.

Nosotros queremos asegurar un precio razonable de la garrafa a nuestros usuarios. Queremos que llegue a todos; y por esa razón es que, a la hora de fijar la metodología para determinar el precio, se ha tratado de establecer una fórmula que no sea única. ¿Por qué? Porque el país no es igual en todos los lugares. Por otro lado, las condiciones son cambiantes. Entonces, si llevamos casi doce años sin sacar esta ley, ¡imagínense si después hay que modificar sólo algún artículo!

Señor presidente: creo que hay sobradas razones por las cuales hoy estamos en condiciones de apoyar la sanción de este marco regulatorio sin temor a afirmar que con ello beneficiamos a los usuarios y que también segui-

remos bregando, en aquellas cosas en las que sea necesario que el Estado actúe, para evitar justamente el crecimiento de los oligopolios o brindar mayores posibilidades a las pequeñas empresas, e incluso a las propias cooperativas, para que puedan acceder a mecanismos que les aseguren que puedan realizar inversiones. No tengo dudas de que el gobierno que hoy tiene la responsabilidad de conducir nuestro país va a estar al lado de ellas, como lo ha hecho con tantas otras empresas con los mecanismos que el Estado tiene. Si hay algo que ha quedado claro es que el gobierno nacional no ha tenido dudas en intervenir en la economía cuando ha sido necesario y cuando el verdadero beneficiario es el poblador argentino.

Por todas estas razones, anticipo mi voto favorable al marco regulativo del GLP en las condiciones en que lo hemos acordado en la Comisión de Energía y Combustibles.

Una última aclaración. Aquí en algún momento se hizo referencia a la extrañeza por los consensos acordados. Siempre entendí a la política como el arte de generar consensos; siempre creo que lo mejor que se puede hacer desde la política es decir que se fue capaz de generar consenso.

Resulta ser que aquí me da la sensación que cuando se alcanza el consenso el arte de la política cambia de objetivo, que pasaría a ser cómo se generan dudas. Yo me quedo con la primera definición. Sigo creyendo en la política como el arte de generar consensos, y celebro el consenso alcanzado por todos los fraccionadores con el gobierno nacional. Ojalá podamos desterrar esto que nos hace tanto mal a quienes tenemos la obligación de representar a nuestros ciudadanos, que es tomar a la política como el arte de generar las dudas.

Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador Capitanich, por el Chaco.

Sr. Capitanich. – Señor presidente: voy a ser extremadamente breve en mi intervención.

Considero que deberíamos situar el debate de este marco regulatorio en ver de qué lado del mostrador nos ponemos, si del lado de la oferta o del lado de la demanda. Si nos ponemos del lado de la oferta, discutimos servicio público y propiedad; si nos ponemos del lado de la demanda, discutimos precios de referencia y abastecimiento.

Sr. Presidente. – Señor senador: el senador Fernández le solicita una interrupción. ¿Se la concede?

Sr. Capitanich. – Cómo no.

Sr. Presidente. – Para una interrupción, tiene la palabra el señor senador Fernández.

Sr. Fernández. – La idea es cerrar la lista de oradores para tener una hora estimativa para la votación.

Sr. Presidente. – Se ha anotado la senadora Avelín. ¿Los presidentes de los bloques van a cerrar el debate? En este momento no están presentes.

Sr. Fernández. – De todas maneras, los presidentes de bloque no se incluyen en la lista. Lo que pretendo es que se cierre la lista de oradores con la inclusión de la senadora Avelín. De esa forma, podremos tener una hora estimativa de votación.

Sr. Presidente. – Están anotados los senadores Capitanich, Guinle y Avelín, y cierran el debate los presidentes de bloque.

Se va a votar el cierre de la lista de oradores.

–La votación resulta afirmativa.

Sr. Presidente. – Aprobado.

Continúa en el uso de la palabra el senador Capitanich.

Sr. Capitanich. – Como decía, tenemos que ver si nos ponemos del lado de la oferta o de la demanda, porque este marco regulatorio tiende a fijar básicamente el tema del precio de referencia.

Por lo tanto, nosotros protegemos el interés del usuario cuando facultamos al Poder Ejecutivo a establecer mecanismos de regulación de carácter estacional en la fijación del precio, y, en segundo lugar, a garantizar al abastecimiento.

Por eso parece que es absolutamente necesario que por estrategia de aplicación de este marco jurídico estemos promoviendo la sanción de este proyecto de ley con el objeto de que el Poder Ejecutivo disponga los instrumentos necesarios para fijar precios de referencia para garantizar estrategias de abastecimiento.

Se ha dado la discusión con anterioridad respecto a la diferencia cualitativa de servicios públicos de interés general. Obviamente, el tema servicio público requiere diferenciar claramente lo que significa monopolio, oligopolio de lo

que significa competencia monopolística y de lo que significa competencia perfecta. Son conceptos de carácter microeconómico que establecen diferencias cualitativas respecto al precio y, naturalmente, al número de oferentes y demandantes.

Me parece clave reconocer que este mercado no es monopolístico, tampoco oligopólico. Es un mercado de competencia monopolística, donde existe participación, existen el precio de carácter diferencial en virtud de la calidad del producto, la cadena de abastecimiento y la logística. En este sentido, me parece importante destacar la diferencia cualitativa entre pasado, presente y futuro.

El pasado determinó que no haya un marco regulatorio. El presente determina la factibilidad de que exista el marco regulatorio. Pero, en el futuro, tenemos que pensar claramente que la distribución de gas por garrafa puede ser sustituida, vía inversiones, por gasoducto, que implica la conexión de la distribución del gas a cada uno de los domicilios o usuarios domiciliarios. Por lo tanto, el marco regulatorio en el futuro va a determinar un mecanismo diferente de distribución y de calidad de distribución.

En cuanto al tema de la propiedad, constituye una discusión de carácter relativo. ¿Qué pasa si, por el avance tecnológico, se descubre un envase perfectamente descartable? Esta circunstancia anularía el problema relativo de la propiedad y lo mismo garantiza efectivamente otro mecanismo de mercado. Si no hubiera marco regulatorio, no se podrían regular el precio de referencia, la distribución, el abastecimiento ni la logística correspondiente.

Además, este marco jurídico también otorga un mecanismo de supervisión para el tema de abuso de posición dominante –ley 25.156–, y también las comisiones de diputados y de senadores tienen intervención para identificar la existencia de mecanismos de concentración. Para no extender el debate quiero clarificar que el objetivo de la sanción de este proyecto de ley nos coloca en defensa del usuario, de un precio de referencia determinado y de la garantía del abastecimiento de un líquido que es imprescindible para muchas poblaciones como las nuestras, del interior, el 90 por ciento de las cuales requiere del abastecimiento de gas licuado de petróleo.

Me parece, además, que es muy importante el acuerdo logrado con todos los actores del sistema, porque se había hecho una campaña –difamatoria en muchos casos–, en cada una de las jurisdicciones provinciales, diciendo que el precio de la garrafa iba a aumentar de 25 a 40 pesos, lo cual es un verdadero disparate. Por eso, creo que la discusión debe estar claramente centrada en que este marco jurídico posibilite una regulación adecuada del precio y garantice el abastecimiento.

Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor presidente provisional, senador Guinle.

Sr. Guinle. – Señor presidente: seré breve.

En realidad, la discusión de servicio público la saldamos cuando hicimos el debate inicial.

Y creo que se vuelve sobre ese concepto de manera recurrente. Me parece que la simple declaración de servicio público –fue muy claro el senador Ríos–, como figura en algún proyecto de dos artículos que vi, sin regular el mercado, no significa absolutamente nada más que la imposibilidad del Estado de atender un servicio que hoy no presta y que, inclusive, debería concesionar, otorgar, controlar.

Este es un segmento de la industria que ha manejado hasta hoy la industria, luego de la salida de Gas del Estado.

Entonces, la declaración de servicio público como si ésta fuera la solución de todos los males, sin decir cómo se acata y se regula la actividad, no tiene caso. Leo en un proyecto de ley que he rescatado, de dos artículos, que lo declara servicio público y que el Estado se hará cargo. Pregunto: ¿de qué?

Lo que estamos haciendo es un marco regulatorio. Y ya no quiero expedirme sobre las bondades del marco regulatorio. Trabajamos largamente en esto. Cada uno tendrá su propia opinión.

No iba a hablar del tema, hoy. Porque veo que la discusión ha ido por otros andariveles: si hubo acuerdo o no lo hubo. En realidad, cuando alguno de los sectores de la actividad privada empieza a hacer *lobby* sobre determinada cuestión que acá no se discutió inicialmente, como es la propiedad de los envases, pero luego sí se actualiza cuando viene de Diputados, aparece otro sector –y lo hace de manera oligopólica–, que es el que maneja la mayoría del sector...

Cuando yo presenté un proyecto de marco regulatorio de GLP, con absoluta transparencia,

y me dediqué a trabajar en eso, lo hice convencido de que había que cumplir con una disposición incumplida desde hace más de diez años, marcada por la propia ley 24.076. Y justamente, lo mejor que podemos tener es un marco regulatorio; pero aquí se han traído discusiones que estaban fuera del primer marco de discusión, cuestiones que no se solucionan con una mera declaración de servicio público; para ello habrá que regular este segmento de la actividad y atender a cuestiones que son básicas, tales como el abastecimiento interno, la accesibilidad, el precio.

Es cierto lo que dijo el senador Ríos en cuanto a las dificultades del Estado para atender este segmento, y lo que ha dicho el senador Jaque: este gobierno ha dado muestras de atender e intervenir en sectores de la economía cuando fue necesario hacerlo. Ahora, cuando aparecen fondos fiduciarios para generar redes dicen: “Estamos en contra; no es un mecanismo transparente; tiene que existir un plan de obra pública”, pero no hay crédito, el superávit es propio de los esfuerzos del gobierno, y los aportes de los sectores privados en fondos fiduciarios deben ser transparentes y aplicarse a obras que signifiquen respuestas a pueblos que largamente las están esperando hace muchísimo tiempo.

Creo que este marco regulatorio es absolutamente razonable porque constituye un avance importantísimo en un sector no regulado que debíamos regular desde hace más de diez años. Por su parte, declararlo servicio público, si no lo regulamos, no sirve absolutamente para nada; además nos meteríamos en discusiones que, a mi juicio, vienen a dar argumentos a la oposición, que no cuestiono, pero que en realidad habían sido salvadas en la primera discusión, cuando discutimos servicio público-interés público y cuando nadie planteaba la cuestión de la propiedad de la garrafa, que en realidad está absolutamente engarzada con el principio de responsabilidad.

El usuario no sólo necesita provisión interna del insumo, accesibilidad y precio, sino también seguridad, y este marco regulatorio, de manera razonable, está atacando cada una de estas cuestiones.

Por lo expuesto, adelanto el voto positivo a lo que expresará el miembro informante, aceptando algunas modificaciones de Diputados e in-

sistiendo en lo que fuera la base del dictamen originario de este cuerpo.

Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora senadora Avelín.

Sra. Avelín. – Señor presidente: creo que todos vamos a compartir que queremos un marco regulatorio para el GLP, o sea, el gas licuado de petróleo...

Sr. Presidente. – Senadora Avelín: el senador Giustiniani le solicita una interrupción. ¿Se la concede?

Sra. Avelín. – Sí, cómo no.

Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador Giustiniani.

Sr. Giustiniani. – Deseo hacer una simple aclaración.

Respeto la solvencia y la trayectoria de senadores preopinantes en el tema específico que estamos considerando. De todos modos, afirmar que la declaración de servicio público no significa nada es verdaderamente incorrecto, para ser bondadoso en la definición. Declarar el GLP como servicio público significa enmarcarse dentro de la ley de reforma del Estado 23.696. Declarar una actividad como servicio público significa ni más ni menos que la pelea de fondo que se estuvo dando durante estos meses, desde el envío del actual marco regulatorio al Congreso por parte del Poder Ejecutivo nacional. El hecho de que en el actual marco regulatorio estuviera el petróleo o no, fue la pelea fundamental de lo que estamos hablando.

Tal vez por delicadeza el senador por el Chubut no mencionó que yo soy autor de un proyecto en el cual se declara el GLP como servicio público. Con esa sola definición entramos en un marco regulatorio delineado desde 1991 a través de la ley 23.696. No obstante, me parece que ése es un debate que podemos obviar. De cualquier manera, agradezco la interrupción concedida.

Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador Guinle.

Sr. Guinle. – Si uno elabora un proyecto de ley por el que se declara servicio público a una actividad que, en realidad, el Estado no puede atender porque ha sido atendida por la industria, esa declaración pasa a ser una mera expresión de deseos, porque el Estado debe tomar el remedio para atender ese servicio público que, en el caso del GLP, no puede atender.

En realidad, tampoco me parece muy claro cuando se vota el mantenimiento del subsidio al GLP en redes y en diluido para extender redes de gas natural y votamos en contra porque, en definitiva, favorecemos a la industria, cuando ello no es así, sino que estamos favoreciendo a sectores de usuarios de nuestro pueblo que van a poder acceder al gas natural. Yo creo que hay una abierta contradicción en los conceptos que se manejan.

Con todo respeto, digo que creo que es muy fácil hacer discursos; gobernar es otra historia.

Y gobernar a este país, en esta época y en medio de la emergencia, es otra historia. Es fácil realizar discursos diciendo que el Estado se debe hacer cargo de estos problemas que vienen de mucho tiempo atrás, de una emergencia inacabable, sosteniendo que el Estado debe aparecer como que puede hacerse cargo de todo, sin buscar elementos que, en definitiva, le permitan dar respuesta; como, por ejemplo, estos fondos fiduciarios –que hay que mirar con absoluta buena fe– que, en definitiva, aparecen extendiendo infraestructura de gas natural para que esta actividad sí entre dentro de la calificación de servicio público, porque –obviamente– tiene características de tal.

Pues bien, cuando se declara a esta actividad de interés público no se está diciendo que ésta no es una actividad en la que el Estado está interviniendo; por el contrario, se está diciendo que la regulamos, que es de interés público –o sea, que es de interés colectivo y está por encima del interés individual– y que la vamos a atender. Este gobierno ha dado pruebas inacabables de que cada vez que debe intervenir en la economía, en atención de su pueblo, lo ha hecho.

Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora senadora Avelín.

Sra. Avelín. – Señor presidente: después de lo que acabo de escuchar, voy a cambiar el hilo conductor de lo que pensaba decir. Porque si gobernar es plantear lo que hoy se está planteando a través de este proyecto de ley, desde ya que no estoy de acuerdo en absoluto. Hablar de servicio público, como nosotros reclamamos en este caso, no significa una declaración abstracta ni un discurso ni una declamación; en todo caso, la declamación es decir que es de interés público, cuando de lo que estamos hablando es

de la provisión de un elemento esencial para entre 13 y 15 millones de argentinos.

En la Argentina de hoy no se quiere hablar de la concentración del capital, tal como escuchábamos horas atrás en el tratamiento de otro tema. En la Argentina de hoy no se quiere hablar de la hegemonía del poder económico ni de la concentración de los grupos económicos. Y hoy, justamente, de lo que tenemos que hablar en el tratamiento de este proyecto es de eso. Si hay algún proyecto que justamente significa la directriz política de gobernar y de hablar de la concentración de capital que vive la Argentina, es éste. Porque, tal vez, haya millones de argentinos que no entiendan este debate, pero que sí van a sufrir las consecuencias en el deterioro de su calidad de vida.

Eso lo van a sufrir cuando suban los precios y cuando sean desahuciados de lo que es de ellos: ya sea del tubo de gas de 45 kilos o de la garrafa de 10 o 15 kilos, de los cuales son propietarios de buena fe y que hoy el bloque Justicialista –no sé si la mayoría opina así porque observo que hay algunas disidencias al respecto– pretende decir que van a pasar a ser propiedad de las fraccionadoras, porque eso es lo que dice el proyecto de ley.

Lo que hoy es de buena fe del usuario pasará a las fraccionadoras. Sin embargo, se dice con un eslogan muy lindo que se defiende a los usuarios, que el destinatario del marco regulatorio del GLP, que todos compartimos, será el usuario.

¿Es defender a los usuarios decir que no tendrán la propiedad cuando, de acuerdo con el Código Civil, la posesión de buena fe vale por título, y sostener que la propiedad de los envases a los fraccionadores les será atribuida de conformidad con la identificación de su marco, leyenda y número de registro, y los envases con marca no podrán venderse sino entregarse en comodato a los usuarios por los fraccionadores?

Me permito cambiar la redacción a los fines didácticos, ya que en lugar de decir que la propiedad de los envases de los fraccionadores les será atribuida, decimos que por ley les estamos atribuyendo la propiedad de los envases a las fraccionadoras. O sea, ya no serían del poseedor de buena fe, de esos 13 a 15 millones de argentinos que son los usuarios que utilizan el gas licuado de petróleo y que, en su mayoría,

son los sectores más humildes de la Argentina. Como bien se dijo, la mayoría de las provincias tienen a más de la mitad de su población como usuarios de la garrafa o del tubo.

¿Sabe cuánto ha subido el precio de esos insumos? Porque convengamos que aquí está la concentración del poder económico. Aquí se produce la fijación del precio de referencia según el valor de exportación.

¿Por qué un usuario debe pagar el insumo al precio de referencia si el gas es nuestro? Lo que sucede es que el precio de referencia es fijado por cinco grandes grupos multinacionales.

Acá nos han hablado de fantasmas del precio, de campañas difamatorias, pero vayamos a los diarios nacionales y veamos el fantasma del precio del gasoil. Aumentaría el gasoil si se aprobaba una norma que va y viene y nunca se termina de sancionar porque provocaría un aumento de ese combustible. Pues bien, ya no es un fantasma, ya tiene un porcentaje de aumento y una empresa ha incrementado el gasoil en nuestro país pese a que la norma no fue sancionada.

Entonces, señor presidente, no se trata de campañas difamatorias. No se trata de decir que se está en contra de quien gobierna. Con estos fundamentos decimos que estamos en defensa de esos sectores humildes de la Argentina que necesitan el GLP y a un Estado que lo considere como un servicio público y no de interés público. Aludir a esto último es declamar, es no querer intervenir en la determinación del precio —la tarifa—, garantizando el abastecimiento y el precio, máxime de un recurso que es de los argentinos y que nunca debió dejar de serlo, al igual que en el caso de la empresa YPF.

Con estos argumentos es que votaré negativamente el proyecto en consideración, convencida de que lo hecho por la Cámara de Diputados es lo correcto. Tanto así es —y acá no se dijo— que la inclusión efectuada en aquella Cámara no es un tratado de la propiedad cuando fijó quién era el propietario del envase. Había una consecuencia legal y su verdadera interpretación es lo que dice la norma, y no los acuerdos por afuera que interpreten lo que aún no sabemos que dirá la futura ley.

—Ocupa la Presidencia el señor presidente provisional del Honorable Senado, senador Marcelo Guinle.

Sra. Avelín. — Hay que decir que en la Cámara de Diputados la inclusión fue votada en forma unánime. El bloque mayoritario la aceptó y hasta consta en la versión taquigráfica la aceptación de ese artículo 14 que, en lugar de dar la propiedad a las fraccionadoras de los envases, con un solo párrafo dice lo siguiente: La propiedad de los envases se rige por las normas del Código Civil; esto es, la posesión de buena fe hace al título. Fue aprobado por unanimidad y figura en la versión taquigráfica, siendo ratificado con aplausos.

Entonces, señor presidente, no se trataba de un compendio de derecho de la propiedad; se trataba, justamente, de una decisión política y legislativa para dar claridad y seguridad jurídica absoluta. Aquí no va a haber posibilidad de dobles interpretaciones cuando algún juez tenga que aplicar esta legislación vigente. Esta es la interpretación auténtica que debemos dar.

Desconozco —y lo digo con mucha fuerza— ese acuerdo que se ha firmado, del que nos están notificando acá, en el recinto, y del que no sabemos siquiera qué dice. El título que nos han mencionado es el de un acuerdo interpretativo unánime. No sabemos qué interpreta ni quiénes lo firman. Seguramente quienes lo firman tendrán que responder en sus provincias si han representado realmente los intereses que decían representar, o si no lo han hecho. Será responsabilidad de ellos.

Se ha dicho que este acuerdo interpretativo es el arte del consenso. La verdad es que después de tantas idas y vueltas, debemos reconocer que han sido unos verdaderos artistas.

De modo tal que, por todo lo expuesto, dejo constancia expresa de mi voto negativo a esta insistencia que pretende el bloque de la mayoría, y de mi posición de aceptar la propuesta que hizo en su momento la Cámara de Diputados, en particular en el tema de la propiedad de los envases de GLP.

Sr. Presidente (Guinle). — Para cerrar la lista de oradores, tiene la palabra el señor senador Fernández, miembro informante.

Sr. Morales. — ¿Me permite una interrupción?

Sr. Fernández. — Sí, señor senador.

Sr. Presidente (Guinle). — Para una interrupción, tiene la palabra el señor senador Morales.

Sr. Morales. – Señor presidente: voy a indicar el sentido del voto de nuestro bloque, pero antes quiero formular una breve precisión acerca del concepto de servicio público.

En la ley 24.076, el artículo 1º dispone que dicha norma regula el transporte y distribución de gas natural, que constituyen un servicio público nacional, siendo regidos por la ley 17.319, que es la ley de hidrocarburos, en cuanto a la producción, captación y tratamiento. Es decir, no se habla aquí del GLP. En esta materia, en las disposiciones transitorias, concretamente en el artículo 87, se plantea que el marco regulatorio del gas licuado será motivo de una ley especial. Es decir que la ley 24.076 no dice nada con relación a si el GLP constituye un servicio público o no. Pero sí lo dice la única norma anterior que existe, que es el Estatuto de Gas del Estado, creado por el decreto 1.444/78, que ha transformado la empresa del Estado en sociedad del Estado, el cual en su artículo 5º dice que la sociedad tendrá por objeto la prestación del servicio público de abastecimiento de hidrocarburos gaseosos en todo el ámbito y en cualquier lugar del país.

Es decir que cuando Gas del Estado era tal, el GLP era considerado un servicio público, con lo cual estamos modificando el criterio y la calificación que tenía la provisión de GLP.

Quería hacer esta aclaración con relación a la normativa vigente.

Por otra parte, quiero dejar constancia de que el sentido de nuestro voto será el siguiente: en el tratamiento en general votaremos afirmativamente, y en el tratamiento en particular vamos a sostener la sanción de la Cámara de Diputados respecto de los artículos 2º, 5º, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 21, 24, 37, 38, 47 y 50. Y vamos a sostener el dictamen de la Cámara de Senadores respecto de los artículos 7º, 15, 18, 34 y 46.

Sr. Presidente. – Señor senador: le aclaro que se va a realizar una votación por artículos, para que cada uno de los señores senadores se vaya expresando en el sentido de aprobar el dictamen en mayoría o desecharlo, lo cual significa aceptar la sanción de Diputados.

Sr. Losada. – ¿Me permite una interrupción?

Sr. Fernández. – Sí, señor senador.

Sr. Presidente (Guinle). – Para una interrupción, tiene la palabra el señor senador Losada.

Sr. Losada. – Señor presidente: quiero apoyar lo que usted acaba de manifestar. En cada artículo los miembros informantes deberán expresar cómo se va a votar, para que quede más claro incluso para los taquígrafos

Sr. Presidente (Guinle). – Efectivamente, señor senador, así se hará.

Tiene la palabra el señor senador Fernández.

Sr. Fernández. – Señor presidente: el hecho de que el bloque de la Unión Cívica Radical haya adelantado cómo va a votar facilita bastante la tarea, porque conforme el grado de consensos que se ha logrado, esta comisión originariamente iba a aceptar modificaciones solamente con respecto a los artículos 2º, 5º, 10, 12, 13, 17 y 24, pero ahora, además, vamos a aceptar las modificaciones de los artículos 16 y 21. Es decir que solamente tenemos diferencias con el bloque de la Unión Cívica Radical con relación al artículo 14, vinculado con el régimen de propiedad, que mucho se ha discutido.

Pero a la hora de establecer algunas reflexiones finales, se me ocurre que es muy importante destacar dos cosas. Aquí se habló de políticas de mercado y de que ésta era una mera declaración o aspiración de deseos. El artículo 10, concretamente en política de mercado, establece que el Poder Ejecutivo nacional promoverá el incremento del nivel de competencia y desafiabilidad de cada etapa de la industria, garantizando la igualdad de condiciones para todas las empresas.

Pero este marco regulatorio no termina en sí mismo, sino que constituye una norma viva, porque el inciso c) de dicho artículo señala que el Poder Ejecutivo deberá realizar un profundo análisis de la constitución del sector y su comportamiento, a los efectos de establecer límites a la concentración de mercado para cada etapa, o a la integración vertical a lo largo de toda la cadena del negocio. La limitación debe comprender a las sociedades vinculadas, controlantes o controladas. Y esta tarea debe efectuarse juntamente con la autoridad de aplicación de la ley 25.156 en reunión conjunta con las comisiones de Energía y Combustibles de la Cámara de Diputados y de Minería, Energía y Combustibles del Senado.

Es decir que no solamente estamos diciendo que ésta es una norma que marca límites a la concentración y a la integración vertical, sino

que además este Congreso tiene activa participación en ese control.

Se dijo también algo sobre el precio y, en realidad, entre lo que está escrito y lo que se dice, a veces me cuesta establecer una especie de ilación lógica. El artículo 7°, refiriéndose al precio, concretamente fija como objetivos para la regulación de la industria y la comercialización de GLP los siguientes: promover la competitividad de la oferta y la demanda; garantizar el abastecimiento en el mercado interno de gas licuado, así como también el acceso al producto a granel; proteger adecuadamente los derechos de los consumidores, posibilitando la universalidad del servicio, adecuada información, publicidad y acceso al mismo a precios justos y razonables; propender a que el precio del GLP al consumidor final sea el resultante de los reales costos económicos totales de la actividad en las distintas etapas; incentivar la eficiencia del sector y garantizar la seguridad en la totalidad de las etapas de la actividad; propender a una mejor operación de la industria.

Y en el artículo 34, concretamente de modo muy claro se señala lo siguiente con respecto al precio de referencia para GLP en envases: la autoridad de aplicación fijará, para cada región y para cada semestre estacional de invierno y verano, un precio de referencia de GLP, propendiendo a que los sujetos activos tengan retribución por sus costos eficientes y una razonable rentabilidad, con base en el precio mensual de GLP a granel a la salida de la planta productora, calculado según los principios determinados en el inciso b) del artículo 7°, los valores que los respectivos fraccionadores envíen bajo declaración jurada de venta, la información del mercado de la distribución y las estimaciones que realice la autoridad de aplicación.

Asimismo, luego dicho artículo expresa que si se verifican en el mercado apartamientos significativos de los precios de referencia, la autoridad de aplicación podrá aplicar las sanciones

Por un lado, no regulamos precios. Efectivamente, en algunos combustibles no está regulado el precio, pero en el GLP regulamos su precio; estamos poniendo límites a la concentración vertical.

En consecuencia, considero que este marco regulatorio no sólo limita la concentración y dispone precios, sino que además da certeza.

Y en cuanto a los acuerdos de los que tanto se habló, están relacionados con la manera transparente en que trabajaron este Senado, la comisión y la secretaría respectiva. Los acuerdos son entre la secretaría y los fraccionadores, que en algún momento pusieron en duda el objetivo de este marco regulatorio.

Este marco regulatorio demuestra la absoluta transparencia y claridad –y con todas las verdades sobre la mesa– con que se opera en este Senado de la Nación.

En cuanto a los aplausos que a veces cierran algunos debates, debo decir que en la Argentina se aplauden muchas cosas. Yo prefiero que no nos aplaudan. Se ha aplaudido la salida de la convertibilidad –y también el *default*– y así nos fue. Por lo tanto, no creo en los aplausos sino en el trabajo a conciencia, objetivo, en la búsqueda de consensos y en las verdades relativas. Y como creo en todo eso y en que los senadores trabajamos en esta materia en forma absolutamente seria y en sintonía con la demanda de cada uno de los sectores, no creo en que la verdad de un sector –el de los fraccionadores– sea la única que debemos atender.

La única verdad –como dijo el senador Ríos y repitieron muchos– es la de los usuarios.

Y en virtud de ello es que tratamos de buscar el consenso necesario, porque ellos son la herramienta que lleva adelante la política de comercialización del GLP.

Concretamente, creo que el Senado de la Nación ha cumplido con creces con las expectativas que se generaron en materia del marco regulatorio del GLP con relación a los usuarios.

Lo demás es puro cuento, ya que los fraccionadores tendrán que seguir funcionando en un mercado en donde tendrán que competir, invertir y hacerse cargo de la suerte que corran sus inversiones, tal como ocurre en toda industria o actividad comercial.

Nosotros estamos en este Senado para proteger a los usuarios, y creo que hoy hemos dado un salto cualitativo en materia de su protección y en la elaboración de reglas de juego claras acerca de cómo se maneja de aquí en adelante un servicio que será declarado de interés público y destinado al 48 por ciento de los habitantes de la República Argentina que hasta ahora estaban a la buena de Dios.

Sr. Presidente (Guinle). – Si no se hace uso de la palabra, se van a votar las inserciones solicitadas.

–La votación resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Guinle). – Quedan incorporadas las inserciones.

Si no hay observaciones, pasaríamos a votar el título I, respecto del cual se aceptarán las modificaciones introducidas por la Cámara de Diputados a los artículos 2º, 5º y 10.

Tiene la palabra el señor senador Fernández.

Sr. Fernández. – Señor presidente: concretamente, aceptamos las modificaciones de la Cámara de Diputados a los artículos 2º, 5º y 10...

Sr. Presidente (Guinle). – En el artículo 10 culminaría el título I.

Sr. Fernández. – Señor presidente: en el título I tenemos absoluta coincidencia con el bloque radical, y aceptaremos las modificaciones introducidas por la Cámara de Diputados a los artículos 2º, 5º y 10.

Sr. Presidente (Guinle). – Si hay asentimiento, pondríamos en consideración el título I –artículos 1º a 10–, con la aceptación de las modificaciones propuestas por la Cámara de Diputados en los artículos 2º, 5º y 10.

Sra. Avelín. – Pido la palabra.

Sr. Presidente (Guinle). – Tiene la palabra la señora senadora Avelín.

Sra. Avelín. – Señor presidente: solicito una aclaración en cuanto a la forma de votar. No tengo en claro cómo se efectuará la votación.

Sr. Presidente (Guinle). – Repito: la comisión está aceptando las modificaciones a los artículos 2º, 5º y 10, que vienen de la Cámara de Diputados. Entonces, la votación sería en el sentido que propicia la comisión, aceptando la modificación introducida por la Cámara de Diputados a esos tres artículos e insistiendo obviamente en la redacción de los otros artículos que no fueron modificados.

Sra. Avelín. – Creo que es confusa esta manera de votar. De última, se tendrá que votar artículo por artículo, para que haya más claridad.

Sr. Presidente (Guinle). – Señora senadora: con un solo senador que no esté de acuerdo, se hará la votación artículo por artículo. Yo creo

que la manera de votar no es confusa, pero si usted no está de acuerdo, se practicará la votación artículo por artículo.

Tiene la palabra el señor senador Fernández.

Sr. Fernández. – El artículo 1º sin modificaciones. No aceptamos ninguna modificación.

Sr. Presidente (Guinle). – El artículo 1º ya está votado y viene así.

Sr. Fernández. – Insistimos.

Sr. Presidente (Guinle). – Entonces, diría de pasar al artículo 2º y aceptar la modificación introducida por la Cámara de Diputados.

Sr. Fernández. – Se acepta la modificación de la Cámara de Diputados al artículo 2º.

Sr. Presidente (Guinle). – En consideración el artículo 2º.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

–Luego de unos instantes:

Sr. Fernández. – Señor presidente: para una moción de orden.

Dado que por algún motivo la señora senadora que planteó la diferencia no se encuentra presente en la votación, solicito se vote por título, teniendo en cuenta que las únicas modificaciones que este Senado acepta son las introducidas a los artículos 2º, 5º y 10 y se insiste en el resto de los artículos.

Sr. Presidente (Guinle). – Si ahora hay consentimiento, que creo que existe, vamos a votar el título I...

Sr. Losada. – Señor presidente: creo que lo más saludable es votar artículo por artículo, porque todos debemos cuidar que esto salga con la mayor claridad. Me parece que será lo mejor, ya que puede haber confusiones, y las interpretaciones de éstas terminan en cualquier lado.

Por lo tanto, reitero mi pedido de votar artículo por artículo.

Sr. Fernández. – Está bien.

En el artículo 1º nosotros insistimos en la redacción del Senado de la Nación.

Sr. Pichetto. – Clarifiquemos el sentido del voto en cada artículo.

Sr. Presidente (Guinle). – Se vota por el dictamen de comisión.

Artículo 1º.

Sr. Fernández. – No tiene modificaciones.

Sr. Presidente (Guinle). – En consideración el artículo 1°.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 57 votos afirmativos, unanimidad.

–El resultado de la votación surge del Acta N° 1.

Sr. Presidente (Guinle). – Entonces, queda aprobado sin modificaciones el artículo 1°.

–Se enuncia el artículo 2°.

Sr. Fernández. – Pido la palabra.

Sr. Presidente (Guinle). – Tiene la palabra el señor senador Fernández.

Sr. Fernández. – Señor presidente: en el artículo 2° se aceptan las modificaciones introducidas por la Cámara de Diputados.

Sr. Presidente (Guinle). – Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 2° con las modificaciones introducidas por la Cámara de Diputados.

–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 57 votos por la afirmativa: unanimidad.

–El resultado de la votación surge del Acta N° 2.

Sr. Presidente (Guinle). – Queda aprobado el artículo 2°.

–Se enuncia el artículo 3°.

Sr. Fernández. – Pido la palabra.

Sr. Presidente (Guinle). – Tiene la palabra el señor senador Fernández.

Sr. Fernández. – El artículo 3° no tiene modificaciones.

Sr. Presidente (Guinle). – Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 3°.

Sr. Mayans. – ¡No tiene modificaciones, señor presidente!

Sr. Presidente (Guinle). – Igual lo estamos votando todo, senador.

–Murmullos en el recinto.

Sra. Fernández de Kirchner. – Disculpe, señor presidente.

Pido la palabra.

Sr. Presidente (Guinle). – Terminamos de votar y le doy la palabra, senadora.

–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 57 votos por la afirmativa, unanimidad.

–El resultado de la votación surge del Acta N° 3.

Sr. Presidente (Guinle). – Queda aprobado el artículo 3°, sin modificaciones.

Tiene la palabra la señora senadora Fernández de Kirchner.

Sra. Fernández de Kirchner. – Señor presidente: por la propia práctica, y respecto de cómo estamos votando, podemos advertir que tendremos más dificultades haciéndolo de esta manera que de la forma en que se debe hacer en este tipo de situaciones.

¿Qué pasa? Esta no es una norma que se vota por primera vez. Es un proyecto de ley que viene del procedimiento de revisión en Diputados. Entonces, cuando vuelve aquí, las posibilidades de modificación son determinadas y están establecidas taxativamente por la Constitución y el reglamento, de modo tal que la forma de votar en este tipo de oportunidades es la que propuso el senador Fernández.

Se dijo que no era transparente. De hecho, es al contrario: es lo más cómodo y lo más transparente que hay, porque nosotros tenemos que pronunciarnos acerca de qué aceptamos y qué no, según las modificaciones. Después, en base a la mayoría en cada votación, se determina qué queda vigente y qué no.

La forma en que estamos votando es incorrecta. Va a generar más confusión, además de la demora en el trámite. De hecho, la demora sería lo de menos. Va a generar más confusión en el propio articulado del proyecto de ley.

Lo que debe indicar la Cámara, de origen en este caso, cuando ya se ha cumplido el proceso de revisión, es qué modificaciones acepta y cuáles rechaza; nada más que eso, señor presidente. Esto no es una manera poco transparente de votar: es la manera que la Constitución y el reglamento prevén en la sanción de las leyes.

Ahora, en fin: hay gente que ya tiene una experiencia de años en este tema. Por lo tanto,

me parece que estar discutiendo y explicando estas obviedades no corresponde.

Entonces, señor presidente, como legislador le pido que usted haga votar de la forma en que lo marcan el reglamento y la Constitución, no como se le ocurre al senador Fernández o a cualquier otra señora senadora; es decir, solicito que se vote de la forma en que lo dicen la Constitución y el reglamento, por favor.

Sr. Presidente (Guinle). – Señora senadora: en realidad, para ordenar la votación...

Sra. Fernández de Kirchner. – Sí, justamente.

Sr. Presidente. – Lo que estábamos intentando es votar conforme el dictamen; poner en consideración el dictamen en mayoría, que es lo que corresponde.

Sra. Fernández de Kirchner. – Pero, ¡por favor!

Sr. Presidente (Guinle). – Entonces, el dictamen en mayoría indica qué va aceptando y que no.

Obviamente, si hay alguna diferencia, se puede pasar a votar por título o por capítulo.

Sra. Avelín. – Pido la palabra.

Sr. Presidente (Guinle). – Sí, señora senadora: la escucho.

Sra. Avelín. – Mire, señor presidente: cuando yo pedí la aclaración fue precisamente porque no estaba nada claro. Y cuando salí un minuto del recinto fue justamente para tratar de consultar nuestro Reglamento.

Acá hay solamente un dictamen, que es en mayoría. No hay ningún dictamen en minoría.

Esto es lo que se tiene que poner a votación. La confusión ha surgido, precisamente, porque se está planteando modificar este dictamen: aceptar algo o no. Esto es lo que está generando esta confusión.

Este ha sido el espíritu de solicitar la aclaración respecto de cuál es el sentido del voto.

En mi caso particular, señor presidente, yo estoy de acuerdo con las modificaciones introducidas por la Cámara de Diputados; en particular, con la modificación del artículo 14, en el tema de la propiedad.

–Murmulllos en el recinto.

Sr. Presidente (Guinle). – Un minuto, por favor.

Si está de acuerdo, señora senadora, entonces vamos a pasar a votar por título y como lo expresó el miembro informante de la comisión.

–Asentimiento.

Sr. Presidente (Guinle). – Si no se hace uso de la palabra, se va a votar del artículo 4° –ya habíamos votado hasta el 3°– al 11, aceptando las modificaciones que propuso la Cámara de Diputados a los artículos 5° y 10.

Se va a votar.

–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registraron 54 votos por la afirmativa. Hay unanimidad.

Es necesario que la señora senadora Pinchetti de Sierra Morales indique su voto a viva voz.

Sra. Pinchetti de Sierra Morales. – Afirmativo.

Sr. Secretario (Estrada). – Entonces son 55 votos afirmativos. Hay unanimidad.

–El resultado de la votación surge del Acta N° 4.

Sr. Presidente (Guinle). – Tiene la palabra el señor senador Fernández.

Sr. Fernández. – Como este capítulo tiene alguna salvedad en el artículo 14, propongo al señor presidente que a continuación ponga a votación los artículos 12 y 13, en los que efectivamente aceptamos las modificaciones introducidas por la Cámara de Diputados. Luego votamos en forma separada el artículo 14. En el resto hay consenso.

Sr. Presidente (Guinle). – Se va a votar el dictamen de comisión que acepta la modificación propuesta por la Cámara de Diputados en los artículos 12 y 13.

–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registraron 55 votos por la afirmativa. Hay unanimidad.

–El resultado de la votación surge del Acta N° 5.

Sr. Presidente (Guinle). – Tiene la palabra el señor senador Fernández.

Sr. Fernández. – Entendimos que el artículo 14 debíamos votarlo por separado porque la

Unión Cívica Radical tiene una posición distinta a la de la Presidencia de esta comisión. Después podemos votar el resto en conjunto porque hay consenso.

Sr. Presidente (Guinle). – Con relación al artículo 14, se va a votar el dictamen de comisión en mayoría del Senado que propone mantener el texto originario aprobado por la Cámara de Senadores.

Sr. Pichetto. – O sea, se vota por la insistencia.

–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registraron 35 votos por la afirmativa y 22 por la negativa. Se hace constar que no se han alcanzado los dos tercios.

–El resultado de la votación surge del Acta N° 6.

Sr. Presidente (Guinle). – Tiene la palabra el señor senador Fernández.

Sr. Fernández. – Corresponde poner a votación el resto del articulado, sobre lo que hay consenso.

Concretamente aceptamos la modificación introducida por la Cámara de Diputados al artículo 16, artículos 17, 21, 24, 37, 38, 47 y 50. La única diferencia con el dictamen de comisión es que nosotros modificamos ese dictamen y aceptamos las modificaciones propuestas por la Cámara de Diputados respecto de los artículos 16 y 21.

Sr. Presidente (Guinle). – Tiene la palabra el señor senador Menem.

Sr. Menem. – Señor presidente: quisiera que el senador Fernández me aclare lo que acaba de decir sobre el artículo 16.

Sr. Fernández. – Con respecto al artículo 16, originariamente no habíamos aceptado la modificación introducida por la Cámara de Diputados. A lo largo del debate y luego de los consensos que se pretendieron lograr, entendimos que aceptábamos la modificación introducida por Diputados y modificamos el dictamen de comisión en ese sentido. Aceptamos las modificaciones de los artículos 16, 17, 21 y 24. Es decir que incorporamos el 16 y el 21, que originariamente no habían sido aceptados en el dictamen de la comisión.

Sr. Presidente (Guinle). – Tiene la palabra el señor senador Ríos.

Sr. Ríos. – Señor presidente: no tengo problemas en votar todo en conjunto, siempre y cuando quede constancia de mi voto negativo en el artículo 46.

Sr. Presidente (Guinle). – Se deja constancia de su voto negativo al artículo 46.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el resto del articulado.

–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registraron 54 votos por la afirmativa, ninguna abstención; unanimidad, con excepción del voto negativo en el artículo 46 por parte del senador Ríos.

–El resultado de la votación surge del Acta N° 7.

Sr. Presidente (Guinle). – Queda definitivamente sancionado el proyecto de ley. Se harán las comunicaciones correspondientes.

12

ADHESION A FESTIVIDADES EN CORDOBA

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar los tratamientos sobre tablas a solicitar que por Secretaría se enunciarán.

En primer lugar, corresponde considerar si se trata sobre tablas el proyecto declaración del señor senador Rossi por el que se adhiere a la realización de la XXXVI Fiesta Provincial de la Vendimia, XV Fiesta Nacional de la Frutihorticultura y XXVI Sagra Nacional de la Uva a llevarse a cabo en Córdoba. (Expte. S.-116/05.)

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

–La votación resulta afirmativa.

–El texto es el siguiente:

Proyecto de declaración

El Senado de la Nación

DECLARA:

Su adhesión a la realización de la XXXVI Fiesta Provincial de la Vendimia, XV Fiesta Nacional de la Frutihorticultura y XXVI Sagra Nacional de la Uva, a llevarse a cabo los días 12 y 13 de marzo de 2005, en la localidad de Colonia Caroya, provincia de Córdoba.

Carlos A. Rossi.

16

APENDICE

I

Votaciones

Votación Nominal

123º Período Legislativo - Ordinario - 2º Sesión

DICTAMEN EN EL PROYECTO DE LEY SOBRE REGIMEN REGULATORIO DE LA PRODUCCION Y
COMERCIALIZACION DE GAS LICUADO DE PETROLEOORDEN DEL DIA 1872(S-110/03,1494/03,291/04,1091/04,1137/04,1330/04 Y 1391/04)

VOTACION EN PARTICULAR

Artículo 1º

Observaciones: Art.81 Constitución Nacional

Acta N°: 1

Fecha: 03-05-2005

Hora: 18:02:47

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Mayoría Requerida:

mas de la mitad de los
presentes

Miembros del Cuerpo: 72

Presidente:

GUINLE Marcelo A.

Desempate: NO

Presentes Identificados:

57

Votos afirmativos:

57

Presentes No Identificados:

-

Votos Negativos:

-

Total Presentes:

57

Abstenciones:

-

Ausentes:

15

Votos Afirmativos Necesarios:

29

**RESULTADO de la
VOTACIÓN****AFIRMATIVA**

Votación Nominal

123° Periodo Legislativo - Ordinario - 2° Sesión

DICTAMEN EN EL PROYECTO DE LEY SOBRE REGIMEN REGULATORIO DE LA PRODUCCION Y
COMERCIALIZACION DE GAS LIQUADO DE PETROLEOORDEN DEL DIA 1872(S-110/03.1494/03.291/04.1091/04.1137/04.1330/04 Y 1391/04)

VOTACION EN PARTICULAR

Artículo 1°

Observaciones: Art.81 Constitución Nacional

Acta N°: 1

Fecha: 9-03-2005

Hora: 18:02:47

Tipo de Quórum: mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Mayoría Requerida:

mas de la mitad de los
presentes

Miembros del Cuerpo: 72

Presidente: GUINLE Marcelo A.

Desempate: NO

Apellido y Nombre	VOTO	Apellido y Nombre	VOTO
AGUNDEZ, Jorge Alfredo	AFIRMATIVO	MARIN, Rubén Hugo	AFIRMATIVO
ARANCIO DE BELLER, Mónica	AFIRMATIVO	MARINO, Juan Carlos	AFIRMATIVO
AVELIN, Nancy	AFIRMATIVO	MARTIN, Melida	AUSENTE
BAR, Graciela	AFIRMATIVO	MARTINAZZO, Luis Eduardo	AFIRMATIVO
BUSSI, Ricardo Argentino	AFIRMATIVO	MASSONI, Norberto	AFIRMATIVO
CAFIERO, Antonio Francisco	AFIRMATIVO	MASTANDREA, Alicia Ester	AFIRMATIVO
CAPARROS, Mabel Luisa	AFIRMATIVO	MAYANS, José Miguel Angel	AFIRMATIVO
CAPITANICH, Jorge Milton	AFIRMATIVO	MAZA, Ada	AUSENTE
CAPOS, Liliana Delia	AFIRMATIVO	MENEM, Eduardo	AFIRMATIVO
CASTILLO, Oscar Anibal	AUSENTE	MERA, Mario Ruben	AFIRMATIVO
CASTRO, María Elisa	AFIRMATIVO	MIRANDA, Julio Antonio	AFIRMATIVO
COLOMBO DE ACEVEDO, María T.	AUSENTE	MORALES, Gerardo Ruben	AFIRMATIVO
CONTI, Diana Beatriz	AFIRMATIVO	MULLER, Mabel Hilda	AFIRMATIVO
CURLETTI, Miriam Belén	AFIRMATIVO	NEGRE DE ALONSO, Liliana T.	AUSENTE
DANIELE, Mario Domingo	AFIRMATIVO	OCHOA, Raúl Ernesto	AUSENTE
ESCUADERO, Sonia Margarita	AFIRMATIVO	OVIEDO, Mercedes Margarita	AFIRMATIVO
FALCO, Luis Alberto	AFIRMATIVO	PAZ, Elva Azucena	AFIRMATIVO
FERNANDEZ DE KIRCHNER, Cristina	AFIRMATIVO	PERCEVAL, María Cristina	AFIRMATIVO
FERNANDEZ, Nicolas Alejandro	AFIRMATIVO	PICHETTO, Miguel Angel	AFIRMATIVO
GALLEGO, Silvia Ester	AFIRMATIVO	PINCHETTI de SIERRA M. Delia	AFIRMATIVO
GALLIA, Sergio Adrián	AUSENTE	PRADES, Carlos Alfonso	AUSENTE
GIRI, Haide Delia	AFIRMATIVO	PUERTA, Federico Ramón	AUSENTE
GIUSTI, Silvia Ester	AFIRMATIVO	REUTEMANN, Carlos Alberto	AFIRMATIVO
GIUSTINIANI, Rubén Héctor	AUSENTE	RÍOS, Roberto Fabián	AFIRMATIVO
GOMEZ DIEZ, Ricardo	AFIRMATIVO	ROSSI, Carlos Alberto	AFIRMATIVO
GUINLE, Marcelo Alejandro	AFIRMATIVO	SAADI, Ramón Eduardo	AUSENTE
IBARRA, Vilma Lidia	AFIRMATIVO	SALVATORI, Pedro	AFIRMATIVO
ISIDORI, Amanda Mercedes	AFIRMATIVO	SANCHEZ, María Dora	AFIRMATIVO
JAQUE, Celso Alejandro	AFIRMATIVO	SANZ, Ernesto Ricardo	AFIRMATIVO
JENEFES, Guillermo Raúl	AFIRMATIVO	SAPAG, Luz María	AFIRMATIVO
LATORRE, Roxana Itatí	AFIRMATIVO	TAFFAREL, Ricardo Cesar	AFIRMATIVO
LEGUIZAMON, María Laura	AFIRMATIVO	TERRAGNO, Rodolfo	AFIRMATIVO
LESCANO, Marcela Fabiana	AFIRMATIVO	URQUIA, Roberto Daniel	AUSENTE
LOPEZ ARIAS, Marcelo Eduardo	AUSENTE	YOMA, Jorge Raúl	AFIRMATIVO
LOSADA, Mario Anibal	AFIRMATIVO	ZAVALIA, José Luis	AUSENTE
M. PASS de CRESTO, Laura	AFIRMATIVO		AUSENTE

Votación Nominal

123º Período Legislativo - Ordinario - 2º Sesión

DICTAMEN EN EL PROYECTO DE LEY SOBRE REGIMEN REGULATORIO DE LA PRODUCCION Y
COMERCIALIZACION DE GAS LICUADO DE PETROLEO

ORDEN DEL DIA 1872

(S-110/03,1494/03,291/04,1091/04,1137/04,1330/04 Y 1391/04)

VOTACION EN PARTICULAR

Artículo 2º

Observaciones: Aceptacion de las modificaciones introducidas por la Camara de Diputados
Art. 81 Constitución Nacional

Acta Nº: 2

Fecha: 9-03-2005

Hora: 18:03:32

Tipo de Quórum: mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Mayoría Requerida:

mas de la mitad de los
presentes

Miembros del Cuerpo: 72

Presidente: GUINLE Marcelo A.

Desempeña:

Presentes Identificados: 57

Presentes No Identificados:

Total Presentes: 57

Ausentes: 15

Votos Afirmativos Necesarios: 29

Votos afirmativos: 57

Votos Negativos: -

Abstenciones: -

**RESULTADO de la
VOTACIÓN AFIRMATIVA**

Votación Nominal

123° Período Legislativo - Ordinario - 2° Sesión

DICTAMEN EN EL PROYECTO DE LEY SOBRE REGIMEN REGULATORIO DE LA PRODUCCION Y
COMERCIALIZACION DE GAS LICUADO DE PETROLEO

ORDEN DEL DIA 1872

(S-110/03,1494/03,291/04,1091/04,1137/04,1330/04 Y 1391/04)

VOTACION EN PARTICULAR
Artículo 2°Observaciones: Aceptacion de las modificaciones introducidas por la Camara de Diputados
Art. 81 Constitución Nacional

Acta N°: 2

Fecha: 9-03-2005

Hora: 18:03:32

Tipo de Quórum: mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Mayoría Requerida:

mas de la mitad de los
presentes

Miembros del Cuerpo: 72

Presidente: GUINLE Marcelo A.

Desempeño: NO

Apellido y Nombre	VOTO	Apellido y Nombre	VOTO
AGUNDEZ, Jorge Alfredo	AFIRMATIVO	MARIN, Rubén Hugo	AFIRMATIVO
ARANCIO DE BELLER, Mónica	AFIRMATIVO	MARINO, Juan Carlos	AFIRMATIVO
AVELIN, Nancy	AFIRMATIVO	MARTIN, Nelida	AUSENTE
BAR, Graciela	AFIRMATIVO	MARTINAZZO, Luis Eduardo	AFIRMATIVO
BUSSI, Ricardo Argentino	AFIRMATIVO	MASONI, Norberto	AFIRMATIVO
CAFIERO, Antonio Francisco	AFIRMATIVO	MASTANDREA, Alicia Ester	AFIRMATIVO
CAPARROS, Mabel Luisa	AFIRMATIVO	MAYANS, José Miguel Angel	AFIRMATIVO
CAPITANICH, Jorge Milton	AFIRMATIVO	MAZA, Ada	AUSENTE
CAPOS, Liliana Delia	AFIRMATIVO	MENEM, Eduardo	AFIRMATIVO
CASTILLO, Oscar Anibal	AUSENTE	MERA, Mario Ruben	AFIRMATIVO
CASTRO, María Elisa	AFIRMATIVO	MIRANDA, Julio Antonio	AFIRMATIVO
COLOMBO DE ACEVEDO, María T.	AUSENTE	MORALES, Gerardo Ruben	AFIRMATIVO
CONTI, Diana Beatriz	AFIRMATIVO	MULLER, Mabel Hilda	AFIRMATIVO
CURLETTI, Miriam Belén	AFIRMATIVO	NEGRE DE ALONSO, Liliana T.	AUSENTE
DANIELE, Mario Domingo	AFIRMATIVO	OCHOA, Raúl Ernesto	AUSENTE
ESCUDERO, Sonia Margarita	AFIRMATIVO	OVIEDO, Mercedes Margarita	AFIRMATIVO
FALCO, Luis Alberto	AFIRMATIVO	PAZ, Elva Azucena	AFIRMATIVO
FERNANDEZ DE KIRCHNER, Cristina	AFIRMATIVO	PERCEVAL, María Cristina	AFIRMATIVO
FERNANDEZ, Nicolas Alejandro	AFIRMATIVO	PICHETTO, Miguel Angel	AFIRMATIVO
GALLEGO, Silvia Ester	AFIRMATIVO	PINCHETTI de SIERRA M. Delia	AFIRMATIVO
GALLIA, Sergio Adrián	AUSENTE	PRADES, Carlos Alfonso	AUSENTE
GIRI, Haide Delia	AFIRMATIVO	PUERTA, Federico Ramón	AUSENTE
GIUSTI, Silvia Ester	AFIRMATIVO	REUTEMANN, Carlos Alberto	AFIRMATIVO
GIUSTINIANI, Rubén Héctor	AUSENTE	RÍOS, Roberto Fabián	AFIRMATIVO
GOMEZ DIEZ, Ricardo	AFIRMATIVO	ROSSI, Carlos Alberto	AFIRMATIVO
GUINLE, Marcelo Alejandro	AFIRMATIVO	SAADI, Ramón Eduardo	AUSENTE
IBARRA, Vilma Lidia	AFIRMATIVO	SALVATORI, Pedro	AFIRMATIVO
ISIDORI, Amanda Mercedes	AFIRMATIVO	SANCHEZ, María Dora	AFIRMATIVO
JAUQUE, Celso Alejandro	AFIRMATIVO	SANZ, Ernesto Ricardo	AFIRMATIVO
JENEFES, Guillermo Raúl	AFIRMATIVO	SAPAG, Luz María	AFIRMATIVO
LATORRE, Roxana Itatí	AFIRMATIVO	TAFFAREL, Ricardo Cesar	AFIRMATIVO
LEGUIZAMON, María Laura	AFIRMATIVO	TERRAGNO, Rodolfo	AFIRMATIVO
LESCANO, Marcela Fabiana	AFIRMATIVO	URQUÍA, Roberto Daniel	AUSENTE
LOPEZ ARIAS, Marcelo Eduardo	AUSENTE	YOMA, Jorge Raúl	AFIRMATIVO
LOSADA, Mario Anibal	AFIRMATIVO	ZAVALLIA, José Luis	AUSENTE
M. PASS de CRESTO, Laura	AFIRMATIVO		AUSENTE

Votación Nominal

123° Período Legislativo - Ordinario - 2° Sesión

DICTAMEN EN EL PROYECTO DE LEY SOBRE REGIMEN REGULATORIO DE LA PRODUCCION Y
COMERCIALIZACION DE GAS LICUADO DE PETROLEO

ORDEN DEL DIA 1872

(S-110/03,1494/03,291/04,1091/04,1137/04,1330/04 Y 1391/04)

VOTACION EN PARTICULAR

Artículo 3°

Observaciones: Art.81 Constitución Nacional

Acta N°: 3

Fecha: 9-03-2005

Hora: 18:04:25

Tipo de Quórum: mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Mayoría Requerida:

mas de la mitad de los
presentes

Miembros del Cuerpo: 72

Presidente: GUINLE Marcelo A.

Desistente: NO

Presentes Identificados: 57

Votos afirmativos: 57

Presentes No Identificados: -

Votos Negativos: -

Total Presentes: 57

Abstenciones: -

Ausentes: 15

Votos Afirmativos Necesarios: 29

**RESULTADO de la
VOTACIÓN****AFIRMATIVA**

Votación Nominal

123º Período Legislativo - Ordinario - 2º Sesión

DICTAMEN EN EL PROYECTO DE LEY SOBRE REGIMEN REGULATORIO DE LA PRODUCCION Y
COMERCIALIZACION DE GAS LICUADO DE PETROLEO

ORDEN DEL DIA 1872

(S-110/03,1494/03,291/04,1091/04,1137/04,1330/04 Y 1391/04)

VOTACION EN PARTICULAR
Artículo 3º

Observaciones: Art.81 Constitución Nacional

Acta N°: 3

Fecha: 9-03-2005

Hora: 18:04:25

Tipo de Quórum: mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Mayoría Requerida:

mas de la mitad de los
presentes

Miembros del Cuerpo: 72

Presidente: GUINLE Marcelo A.

Desempeño: NO

Apellido y Nombre	VOTO	Apellido y Nombre	VOTO
AGUNDEZ, Jorge Alfredo	AFIRMATIVO	MARIN, Rubén Hugo	AFIRMATIVO
ARANCIO DE BELLER, Mónica	AFIRMATIVO	MARINO, Juan Carlos	AFIRMATIVO
AVELIN, Nancy	AFIRMATIVO	MARTIN, Nélida	AUSENTE
BAR, Graciela	AFIRMATIVO	MARTINAZZO, Luis Eduardo	AFIRMATIVO
BUSI, Ricardo Argentino	AFIRMATIVO	MASSONI, Norberto	AFIRMATIVO
CAFIERO, Antonio Francisco	AFIRMATIVO	MASTANDREA, Alicia Ester	AFIRMATIVO
CAPARROS, Mabel Luisa	AFIRMATIVO	MAYANS, José Miguel Angel	AFIRMATIVO
CAPITANICH, Jorge Milton	AFIRMATIVO	MOZA, Ada	AUSENTE
CAPOS, Liliana Delia	AFIRMATIVO	MENEM, Eduardo	AFIRMATIVO
CASTILLO, Oscar Anibal	AUSENTE	MERA, Mario Ruben	AFIRMATIVO
CASTRO, María Elisa	AFIRMATIVO	MIRANDA, Julio Antonio	AFIRMATIVO
COLOMBO DE ACEVEDO, María T.	AUSENTE	MORALES, Gerardo Ruben	AFIRMATIVO
CONTI, Diana Beatriz	AFIRMATIVO	MULLER, Mabel Hilda	AFIRMATIVO
CURLETTI, Miriam Belén	AFIRMATIVO	NEGRE DE ALONSO, Liliana T.	AUSENTE
DANIELE, Mario Domingo	AFIRMATIVO	OCHOA, Raúl Ernesto	AUSENTE
ESCUDERO, Sonia Margarita	AFIRMATIVO	OVIEDO, Mercedes Margarita	AFIRMATIVO
FALCO, Luis Alberto	AFIRMATIVO	PAZ, Elva Azucena	AFIRMATIVO
FERNANDEZ DE KIRCHNER, Cristina	AFIRMATIVO	PERCEVAL, María Cristina	AFIRMATIVO
FERNANDEZ, Nicolas Alejandro	AFIRMATIVO	PICHETTO, Miguel Angel	AFIRMATIVO
GALLEGO, Silvia Ester	AFIRMATIVO	PINCHETTI de SIERRA M. Delia	AFIRMATIVO
GALLIA, Sergio Adrián	AUSENTE	PRADES, Carlos Alfonso	AUSENTE
GIRI, Halde Delia	AFIRMATIVO	PUERTA, Federico Ramón	AUSENTE
GIUSTI, Silvia Ester	AFIRMATIVO	REUTEMANN, Carlos Alberto	AFIRMATIVO
GIUSTINIANI, Rubén Héctor	AUSENTE	RÍOS, Roberto Fabián	AFIRMATIVO
GOMEZ DIEZ, Ricardo	AFIRMATIVO	ROSSI, Carlos Alberto	AFIRMATIVO
GUINLE, Marcelo Alejandro	AFIRMATIVO	SAADI, Ramón Eduardo	AUSENTE
IBARRA, Vilma Lidia	AFIRMATIVO	SALVATORI, Pedro	AFIRMATIVO
ISIDORI, Amanda Mercedes	AFIRMATIVO	SANCHEZ, María Dora	AFIRMATIVO
JAUQUE, Celso Alejandro	AFIRMATIVO	SANZ, Ernesto Ricardo	AFIRMATIVO
JENEFES, Guillermo Raúl	AFIRMATIVO	SAPAG, Luz María	AFIRMATIVO
LATORRE, Roxana Itati	AFIRMATIVO	TAFFAREL, Ricardo Cesar	AFIRMATIVO
LEGUIZAMON, María Laura	AFIRMATIVO	TERRAGNO, Rodolfo	AFIRMATIVO
LESCANO, Marcela Fabiana	AFIRMATIVO	URQUIA, Roberto Daniel	AUSENTE
LOPEZ ARIAS, Marcelo Eduardo	AUSENTE	YOMA, Jorge Raúl	AFIRMATIVO
LOSADA, Mario Anibal	AFIRMATIVO	ZAVALLIA, José Luis	AUSENTE
M. PASS de CRESTO, Laura	AFIRMATIVO		AUSENTE

Votación Nominal

123º Periodo Legislativo - Ordinario - 2º Sesión

DICTAMEN EN EL PROYECTO DE LEY SOBRE REGIMEN REGULATORIO DE LA PRODUCCION Y
COMERCIALIZACION DE GAS LICUADO DE PETROLEO

ORDEN DEL DIA 1872

(S-110/03,1494/03,291/04,1091/04,1137/04,1330/04 Y 1391/04)

VOTACION EN PARTICULAR

Artículos 4º a 11º

Observaciones: Se aceptan las modificaciones introducidas por la H. Cámara de Diputados en los artículos 5º y 10º.

Art.81 Constitución Nacional

Acta N°: 4	Fecha: 9-03-2005	Hora: 18:08:35
Tipo de Quórum: mas de la mitad de los miembros del cuerpo	Mayoría Requerida: mas de la mitad de los presentes	Miembros del Cuerpo: 72
Presidente: GUINLE Marcelo A.	Desempeño: NO	

Presentes Identificados:	54	Votos afirmativos:	54
Presentes No Identificados:	-	Votos Negativos:	-
Total Presentes:	54	Abstenciones:	--
Ausentes:	18		
Votos Afirmativos Necesarios:	28	RESULTADO de la VOTACIÓN	AFIRMATIVA

Informe de auditoría de modificaciones

	Versión Original	Actual
PINCHETTI, Della	AUSENTE	AFIRMATIVO

Observaciones:

La Senadora Pinchetti se levantó durante la votación y manifiesta a viva voz su voto afirmativo.

Modificaciones realizadas el 9/03/05

Presentes Identificados:	54	Votos afirmativos:	55
Presentes No Identificados:	1	Votos Negativos:	-
Total Presentes:	55	Abstenciones:	-
Ausentes:	17		
Votos Afirmativos Necesarios:	28	RESULTADO de la VOTACIÓN	AFIRMATIVA

Votación Nominal

123° Período Legislativo - Ordinario - 2° Sesión

DICTAMEN EN EL PROYECTO DE LEY SOBRE REGIMEN REGULATORIO DE LA PRODUCCION Y
COMERCIALIZACION DE GAS LIQUADO DE PETROLEOORDEN DEL DIA 1872(S-110/03,1494/03,291/04,1091/04,1137/04,1330/04 Y 1391/04)

VOTACION EN PARTICULAR

Artículos 4º a 11º

Observaciones: Se aceptan las modificaciones introducidas por la H. Cámara de Diputados en los artículos 5º y 10º.

Art.81 Constitución Nacional

Acta N°: 4

Fecha: 9-03-2005

Hora: 18:08:35

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Mayoría Requerida:

mas de la mitad de los
presentes

Miembros del Cuerpo: 72

Presidente:

GUINLE Marcelo A.

Desempeño: NO

Apellido y Nombre	VOTO	Apellido y Nombre	VOTO
AGUNDEZ, Jorge Alfredo	AFIRMATIVO	MARIN, Rubén Hugo	AFIRMATIVO
ARANCIO DE BELLER, Mónica	AFIRMATIVO	MARINO, Juan Carlos	AFIRMATIVO
AVELIN, Nancy	AUSENTE	MARTIN, Nelida	AUSENTE
BAR, Graciela	AFIRMATIVO	MARTINAZZO, Luis Eduardo	AFIRMATIVO
BUSSI, Ricardo Argentino	AFIRMATIVO	MASSONI, Norberto	AFIRMATIVO
CAFIERO, Antonio Francisco	AFIRMATIVO	MASTANDREA, Alicia Ester	AFIRMATIVO
CAPARROS, Mabel Luisa	AFIRMATIVO	MAYANS, José Miguel Angel	AFIRMATIVO
CAPITANICH, Jorge Milton	AFIRMATIVO	MAZA, Ada	AUSENTE
CAPOS, Liliانا Delia	AFIRMATIVO	MENEM, Eduardo	AFIRMATIVO
CASTILLO, Oscar Anibal	AUSENTE	MERA, Mario Ruben	AFIRMATIVO
CASTRO, María Elisa	AFIRMATIVO	MIRANDA, Julio Antonio	AFIRMATIVO
COLOMBO DE ACEVEDO, María T.	AUSENTE	MORALES, Gerardo Ruben	AFIRMATIVO
CONTI, Diana Beatriz	AFIRMATIVO	MULLER, Mabel Hilda	AFIRMATIVO
CURLETTI, Miriam Belén	AFIRMATIVO	NEGRE DE ALONSO, Liliانا T.	AUSENTE
DANIELE, Mario Domingo	AFIRMATIVO	ÓCHOA, Raúl Ernesto	AUSENTE
ESCUDERO, Sonia Margarita	AFIRMATIVO	OVIEDO, Mercedes Margarita	AFIRMATIVO
FALCO, Luis Alberto	AFIRMATIVO	PAZ, Elva Azucena	AFIRMATIVO
FERNANDEZ DE KIRCHNER, Cristina	AFIRMATIVO	PERCEVAL, María Cristina	AFIRMATIVO
FERNANDEZ, Nicolas Alejandro	AFIRMATIVO	PICHETTO, Miguel Angel	AFIRMATIVO
GALLEGO, Silvia Ester	AFIRMATIVO	PINCHETTI de SIERRA M. Delia	LEV VOT
GALLIA, Sergio Adrián	AUSENTE	PRADES, Carlos Alfonso	AUSENTE
GIRI, Haide Delia	AFIRMATIVO	PUERTA, Federico Ramón	AUSENTE
GIUSTI, Silvia Ester	AFIRMATIVO	REUTEMANN, Carlos Alberto	AUSENTE
GIUSTINIANI, Rubén Héctor	AUSENTE	RÍOS, Roberto Fabián	AFIRMATIVO
GOMEZ DIEZ, Ricardo	AFIRMATIVO	ROSSI, Carlos Alberto	AFIRMATIVO
GUINLE, Marcelo Alejandro	AFIRMATIVO	SAADI, Ramón Eduardo	AUSENTE
IBARRA, Vilma Lidia	AFIRMATIVO	SALVATORI, Pedro	AFIRMATIVO
ISIDORI, Amanda Mercedes	AFIRMATIVO	SANCHEZ, María Dora	AFIRMATIVO
JAUQUE, Celso Alejandro	AFIRMATIVO	SANZ, Ernesto Ricardo	AFIRMATIVO
JENEFES, Guillermo Raúl	AFIRMATIVO	SAPAG, Luz María	AFIRMATIVO
LATORRE, Roxana Itatí	AFIRMATIVO	TAFFAREL, Ricardo Cesar	AFIRMATIVO
LEGUIZAMON, María Laura	AFIRMATIVO	TERRAGNO, Rodolfo	AFIRMATIVO
LESCANO, Marcela Fabiana	AFIRMATIVO	URQUIJA, Roberto Daniel	AUSENTE
LOPEZ ARIAS, Marcelo Eduardo	AUSENTE	YOMA, Jorge Raúl	AFIRMATIVO
LOSADA, Mario Anibal	AFIRMATIVO	ZAVALIA, José Luis	AUSENTE
M. PASS de CRESTO, Laura	AFIRMATIVO		AUSENTE

Votación Nominal

123º Período Legislativo - Ordinario - 2º Sesión

DICTAMEN EN EL PROYECTO DE LEY SOBRE REGIMEN REGULATORIO DE LA PRODUCCION Y
COMERCIALIZACION DE GAS LICUADO DE PETROLEO

ORDEN DEL DIA 1872(S-110/03,1494/03,291/04,1091/04,1137/04,1330/04 Y 1391/04)

VOTACION EN PARTICULAR

Artículos 12º y 13º

Observaciones: Se aceptan las modificaciones introducidas por la H. Cámara de Diputados.
Art.81 Constitución Nacional

Acta N°: 5

Fecha: 9-03-2005

Hora: 18:10:00

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Mayoría Requerida:

mas de la mitad de los
presentes

Miembros del Cuerpo: 72

Presidente:

GUINLE Marcelo A.

Desempate: NO

Presentes Identificados: 55

Votos afirmativos: 55

Presentes No Identificados: -

Votos Negativos: -

Total Presentes: 55

Abstenciones: -

Ausentes:

Votos Afirmativos Necesarios: 28

**RESULTADO de la
VOTACIÓN****AFIRMATIVA**

Votación Nominal

123° Período Legislativo - Ordinario - 2° Sesión

DICTAMEN EN EL PROYECTO DE LEY SOBRE REGIMEN REGULATORIO DE LA PRODUCCION Y
COMERCIALIZACION DE GAS LICUADO DE PETROLEO

ORDEN DEL DIA 1872

(S-110/03.1494/03.291/04.1091/04.1137/04.1330/04 Y 1391/04)

VOTACION EN PARTICULAR

Artículos 12° y 13°

Observaciones: Se aceptan las modificaciones introducidas por la H. Cámara de Diputados.
Art.81 Constitución Nacional

Acta N°: 5

Fecha: 9-03-2005

Hora: 18:10:00

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Mayoría Requerida:

mas de la mitad de los
presentes

Miembros del Cuerpo: 72

Presidente:

GUINLE Marcelo A.

Desempate: NO

Apellido y Nombre	VOTO	Apellido y Nombre	VOTO
AGUNDEZ, Jorge Alfredo	AFIRMATIVO	MARIN, Hilda Hugo	AFIRMATIVO
ARANCIO DE BELLER, Mónica	AFIRMATIVO	MARINO, Juan Carlos	AFIRMATIVO
AVELIN, Nancy	AUSENTE	MARTIN, Nelida	AUSENTE
BAR, Graciela	AFIRMATIVO	MARTINAZZO, Luis Eduardo	AFIRMATIVO
BUSSI, Ricardo Argentino	AFIRMATIVO	MASSONI, Norberto	AFIRMATIVO
CAFIERO, Antonio Francisco	AFIRMATIVO	MASTANDREA, Alicia Ester	AFIRMATIVO
CAPARROS, Mabel Luisa	AFIRMATIVO	MAYANS, José Miguel Angel	AFIRMATIVO
CAPITANICH, Jorge Milton	AFIRMATIVO	MAZA, Ada	AUSENTE
CAPOS, Liliana Delia	AFIRMATIVO	MENEM, Eduardo	AFIRMATIVO
CASTILLO, Oscar Anibal	AUSENTE	MERA Mario Ruben	AFIRMATIVO
CASTRO, María Elisa	AFIRMATIVO	MIRANDA, Julio Antonio	AFIRMATIVO
COLOMBO DE ACEVEDO, María T.	AUSENTE	MORALES, Gerardo Ruben	AFIRMATIVO
CONTI, Diana Beatriz	AFIRMATIVO	MULLER, Mabel Hilda	AFIRMATIVO
CURLETTI, Miriam Belén	AFIRMATIVO	NEGRE DE ALONSO, Liliana T.	AUSENTE
DANIELE, Mario Domingo	AFIRMATIVO	OCHOA, Raúl Ernesto	AUSENTE
ESCUDERO, Sonia Margarita	AFIRMATIVO	OVIEDO, Mercedes Margarita	AFIRMATIVO
FALCO, Luis Alberto	AFIRMATIVO	PAZ, Elva Azucena	AFIRMATIVO
FERNANDEZ DE KIRCHNER, Cristina	AFIRMATIVO	PERCEVAL, María Cristina	AFIRMATIVO
FERNANDEZ, Nicolas Alejandro	AFIRMATIVO	PICHETTO, Miguel Angel	AFIRMATIVO
GALLEGO, Silvia Ester	AFIRMATIVO	PINCHETTI de SIERRA M. Delia	AFIRMATIVO
GALLIA, Sergio Adrián	AUSENTE	PRADES, Carlos Alfonso	AUSENTE
GIRI, Haide Delia	AFIRMATIVO	PUERTA, Federico Ramón	AUSENTE
GIUSTI, Silvia Ester	AFIRMATIVO	REUTEMANN, Carlos Alberto	AUSENTE
GIUSTINIANI, Rubén Héctor	AUSENTE	RÍOS, Roberto Fabián	AFIRMATIVO
GOMEZ DIEZ, Ricardo	AFIRMATIVO	ROSSI, Carlos Alberto	AFIRMATIVO
GUINLE, Marcelo Alejandro	AFIRMATIVO	SAADI, Ramón Eduardo	AUSENTE
IBARRA, Vilma Lidia	AFIRMATIVO	SALVATORI, Pedro	AFIRMATIVO
ISIDORI, Amanda Mercedes	AFIRMATIVO	SANCHEZ, María Dora	AFIRMATIVO
JAUQUE, Celso Alejandro	AFIRMATIVO	SANZ, Ernesto Ricardo	AFIRMATIVO
JENEFES, Guillermo Raúl	AFIRMATIVO	SAPAG, Luz María	AFIRMATIVO
LATORRE, Roxana Itatí	AFIRMATIVO	TAFFAREL, Ricardo Cesar	AFIRMATIVO
LEGUIZAMON, María Laura	AFIRMATIVO	TERRAGNO, Rodolfo	AFIRMATIVO
LESCANO, Marcela Fabiana	AFIRMATIVO	URQUIA, Roberto Daniel	AUSENTE
LOPEZ ARIAS, Marcelo Eduardo	AUSENTE	YOMA, Jorge Raúl	AFIRMATIVO
LOSADA, Mario Anibal	AFIRMATIVO	ZAVALIA, José Luis	AUSENTE
M. PASS de CRESTO, Laura	AFIRMATIVO		AUSENTE

Votación Nominal

123º Período Legislativo - Ordinario - 2º Sesión

DICTAMEN EN EL PROYECTO DE LEY SOBRE REGIMEN REGULATORIO DE LA PRODUCCION Y
COMERCIALIZACION DE GAS LICUADO DE PETROLEO

ORDEN DEL DIA 1872

(S-110/03,1494/03,291/04,1091/04,1137/04,1330/04 Y 1391/04)

VOTACION EN PARTICULAR

Artículo 14º - Insistencia en la sanción del H. Senado

Observaciones: Artículo 81 Constitución Nacional.

Acta N°: 6

Fecha: 9-03-2005

Hora: 18:11:20

Tipo de Quórum: mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Mayoría Requerida:

dos tercios de los
presentes

Miembros del Cuerpo: 72

Presidente: GUINLE Marcelo Alejandro

Desempeño: NO

Presentes Identificados: 57

Votos Afirmativos: 35

Presentes No Identificados: -

Votos Negativos: 22

Total Presentes: 57

Abstenciones: -

Ausentes: 15

Votos Afirmativos Necesarios: 38

**RESULTADO de la
VOTACIÓN****NEGATIVA**

Votación Nominal

123° Período Legislativo - Ordinario - 2° Sesión

DICTAMEN EN EL PROYECTO DE LEY SOBRE REGIMEN REGULATORIO DE LA PRODUCCION Y
COMERCIALIZACION DE GAS LICUADO DE PETROLEO

ORDEN DEL DIA 1872

(S-110/03,1494/03,291/04,1091/04,1137/04,1330/04 Y 1391/04)

VOTACION EN PARTICULAR

Artículo 14° - Insistencia en la sanción del H. Senado

Observaciones: Artículo 81 Constitución Nacional.

Acta N°: 6

Fecha: 9-03-2005

Hora: 18:11:20

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Mayoría Requerida:

dos tercios de los
presentes

Miembros del Cuerpo: 72

Presidente:

GUINLE Marcelo Alejandro

Desempate: NO

Apellido y Nombre	VOTO	Apellido y Nombre	VOTO
AGUNDEZ, Jorge Alfredo	NEGATIVO	MARIN, Rubén Hugo	AFIRMATIVO
ARANCIO DE BELLER, Mónica	NEGATIVO	MARINO, Juan Carlos	NEGATIVO
AVELIN, Nancy	NEGATIVO	MARTIN, Nelida	AUSENTE
BAR, Graciela	AFIRMATIVO	MARTINAZZO, Luis Eduardo	AFIRMATIVO
BUSSI, Ricardo Argentino	NEGATIVO	MASONI, Norberto	NEGATIVO
CAFIERO, Antonio Francisco	AFIRMATIVO	MASTANDREA, Alicia Ester	NEGATIVO
CAPARROS, Mabel Luisa	AFIRMATIVO	MAYANS, José Miguel Angel	AFIRMATIVO
CAPITANICH, Jorge Milton	AFIRMATIVO	MAZA, Ada	AUSENTE
CAPOS, Liliana Delia	NEGATIVO	MELEN, Eduardo	NEGATIVO
CASTILLO, Oscar Anibal	AUSENTE	MEBA, Mario Ruben	AFIRMATIVO
CASTRO, María Elisa	AFIRMATIVO	MIRANDA, Julio Antonio	AFIRMATIVO
COLOMBO DE ACEVEDO, María T.	AUSENTE	MORALES, Gerardo Ruben	NEGATIVO
CONTI, Diana Beatriz	AFIRMATIVO	MULLER, Mabel Hilda	AFIRMATIVO
CURLETTI, Miriam Belén	NEGATIVO	NEGRE DE ALONSO, Liliana T.	AUSENTE
DANIELE, Mario Domingo	AFIRMATIVO	OCHOA, Raúl Ernesto	AUSENTE
ESCUDERO, Sonia Margarita	NEGATIVO	OVIDEO, Mercedes Margarita	AFIRMATIVO
FALCO, Luis Alberto	NEGATIVO	PAZ, Elva Azucena	AFIRMATIVO
FERNANDEZ DE KIRCHNER, Cristina	AFIRMATIVO	PERCEVAL, María Cristina	AFIRMATIVO
FERNANDEZ, Nicolas Alejandro	AFIRMATIVO	PICHETTO, Miguel Angel	AFIRMATIVO
GALLEGO, Silvia Ester	AFIRMATIVO	PINCHETTI de SIERRA M. Delia	NEGATIVO
GALLIA, Sergio Adrián	AUSENTE	PRADES, Carlos Alfonso	AUSENTE
GIRI, Haide Delia	AFIRMATIVO	PUERTA, Federico Ramón	AUSENTE
GIUSTI, Silvia Ester	AFIRMATIVO	REUTEMANN, Carlos Alberto	AUSENTE
GIUSTINIANI, Rubén Héctor	NEGATIVO	RÍOS, Roberto Fabián	AFIRMATIVO
GOMEZ DIEZ, Ricardo	AFIRMATIVO	ROSSI, Carlos Alberto	NEGATIVO
GUINLE, Marcelo Alejandro	AFIRMATIVO	SAADI, Ramón Eduardo	AUSENTE
IBARRA, Vilma Lidia	AFIRMATIVO	SALVATORI, Pedro	AFIRMATIVO
ISIDORI, Amanda Mercedes	NEGATIVO	SANCHEZ, María Dora	NEGATIVO
JACQUE, Celso Alejandro	AFIRMATIVO	SANZ, Ernesto Ricardo	NEGATIVO
JENEFES, Guillermo Raúl	AFIRMATIVO	SAPAG, Luz María	AFIRMATIVO
LATORRE, Roxana Itatí	AFIRMATIVO	TAFFAREL, Ricardo Cesar	NEGATIVO
LEGUIZAMON, María Laura	AFIRMATIVO	TERRAGNO, Rodolfo	AFIRMATIVO
LESCANO, Marcela Fabiana	NEGATIVO	URQUIA, Roberto Daniel	AUSENTE
LOPEZ ARIAS, Marcelo Eduardo	AUSENTE	YOMA, Jorge Raúl	AFIRMATIVO
LOSADA, Mario Anibal	NEGATIVO	ZAVALLIA, José Luis	AUSENTE
M. PASS de CRESTO, Laura	AFIRMATIVO		AUSENTE

Votación Nominal

123º Período Legislativo - Ordinario - 2º Sesión

DICTAMEN EN EL PROYECTO DE LEY SOBRE REGIMEN REGULATORIO DE LA PRODUCCION Y
COMERCIALIZACION DE GAS LICUADO DE PETROLEO**ORDEN DEL DIA 1872**

(S-110/03,1494/03,291/04,1091/04,1137/04,1330/04 Y 1391/04)

VOTACION EN PARTICULAR

Art. 15º a 52º

Observaciones: Se aceptan las modificaciones introducidas por la H. Cámara de Diputados en los artículos
16º, 17º, 21º, 24º, 37º, 38º, 47º y 50º.

Art.81 Constitución Nacional

Acta N°: 7	Fecha:9-03-2005	Hora:18:14:53
Tipo de Quórum: mas de la mitad de los miembros del cuerpo	Mayoría Requerida: mas de la mitad de los presentes	Miembros del Cuerpo: 72
Presidente: GUINLE Marcelo A.	Desempate: NO	

Presentes Identificados:	54	Votos afirmativos:	54
Presentes No Identificados:	-	Votos Negativos:	-
Total Presentes:	54	Abstenciones:	-
Ausentes:	18		
Votos Afirmativos Necesarios:	28	RESULTADO de la VOTACIÓN	AFIRMATIVA

Informe de auditoría de modificaciones

	Versión Original	Actual
RIOS, Roberto Fabian	Art. 46º AFIRMATIVO	NEGATIVO

Observaciones:

El Senador Rios solicita dejar constancia de su voto negativo en el art. 46º.

Modificaciones realizadas el 9/03/05

Artículo 46º

Presentes Identificados:	54	Votos afirmativos:	53
Presentes No Identificados:	-	Votos Negativos:	1
Total Presentes:	54	Abstenciones:	-
Ausentes:	18		
Votos Afirmativos Necesarios:	28	RESULTADO de la VOTACIÓN	AFIRMATIVA

Votación Nominal

123º Periodo Legislativo - Ordinario - 2º Sesión

DICTAMEN EN EL PROYECTO DE LEY SOBRE REGIMEN REGULATORIO DE LA PRODUCCION Y
COMERCIALIZACION DE GAS LICUADO DE PETROLEOORDEN DEL DIA 1872(S-110/03,1494/03,291/04,1091/04,1137/04,1330/04 Y 1391/04)

VOTACION EN PARTICULAR

Art. 15º a 52º

Observaciones: Se aceptan las modificaciones introducidas por la H. Cámara de Diputados en los artículos
16º, 17º, 21º, 24º, 37º, 38º, 47º y 50º.

Art.81 Constitución Nacional

Acta N°: 7

Fecha:9-03-2005

Hora:18:14:53

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Mayoría Requerida:

mas de la mitad de los
presentes

Miembros del Cuerpo: 72

Presidente:

GUINLE Marcelo A.

Desempate: NO

Apellido y Nombre	VOTO	Apellido y Nombre	VOTO
AGUNDEZ, Jorge Alfredo	AFIRMATIVO	MARIN, Rubén Hugo	AFIRMATIVO
ARANCIO DE BELLER, Mónica	AFIRMATIVO	MARINO, Juan Carlos	AFIRMATIVO
AVELIN, Nancy	AUSENTE	MARTIN, Nelida	AUSENTE
BAR, Graciela	AFIRMATIVO	MARTINAZZO, Luis Eduardo	AFIRMATIVO
BUSSI, Ricardo Argentino	AFIRMATIVO	MASSONI, Norberto	AFIRMATIVO
CAFIERO, Antonio Francisco	AFIRMATIVO	MASTANDREA, Alicia Ester	AFIRMATIVO
CAPARROS, Mabel Luisa	AFIRMATIVO	MAYANS, José Miguel Angel	AFIRMATIVO
CAPTANICH, Jorge Milton	AFIRMATIVO	MAZA, Ana	AUSENTE
CAPOS, Liliana Delia	AFIRMATIVO	MENEM, Eduardo	AFIRMATIVO
CASTILLO, Oscar Anibal	AUSENTE	MERA Mario Ruben	AFIRMATIVO
CASTRO, María Elisa	AFIRMATIVO	MIRANDA, Julio Antonio	AFIRMATIVO
COLOMBO DE ACEVEDO, María T.	AUSENTE	MORALES, Gerardo Ruben	AFIRMATIVO
CONTI, Diana Beatriz	AFIRMATIVO	MULLER, Mabel Hilda	AFIRMATIVO
CURLETTI, Miriam Belén	AFIRMATIVO	NEGRE DE ALONSO, Liliana T.	AUSENTE
DANIELE, Mario Domingo	AFIRMATIVO	OCHOA, Raúl Ernesto	AUSENTE
ESCUADERO, Sonia Margarita	AFIRMATIVO	OVIEDO, Mercedes Margarita	AFIRMATIVO
FALCÓ, Luis Alberto	AFIRMATIVO	PAZ, Elva Azucena	AFIRMATIVO
FERNANDEZ DE KIRCHNER, Cristina	AUSENTE	PERCEVAL, María Cristina	AFIRMATIVO
FERNANDEZ, Nicolas Alejandro	AFIRMATIVO	PICHETTO, Miguel Angel	AFIRMATIVO
GALLEGO, Silvia Ester	AFIRMATIVO	PINCHETTI de SIERRA M. Delia	AFIRMATIVO
GALLIA, Sergio Adrián	AUSENTE	PRADES, Carlos Alfonso	AUSENTE
GIRI, Haide Delia	AFIRMATIVO	PUERTA, Federico Ramón	AUSENTE
GIUSTI, Silvia Ester	AFIRMATIVO	REUTEMANN, Carlos Alberto	AUSENTE
GIUSTINIANI, Rubén Héctor	AUSENTE	RÍOS, Roberto Fabián	AFIRMATIVO
GOMEZ DIEZ, Ricardo	AFIRMATIVO	ROSSI, Carlos Alberto	AFIRMATIVO
GUINLE, Marcelo Alejandro	AFIRMATIVO	SAADI, Ramón Eduardo	AUSENTE
IBARRA, Vilma Lidia	AFIRMATIVO	SALVATORI, Pedro	AFIRMATIVO
ISIDORI, Amanda Mercedes	AFIRMATIVO	SANCHEZ, María Dora	AFIRMATIVO
JAUQUE, Celso Alejandro	AFIRMATIVO	SANZ, Ernesto Ricardo	AFIRMATIVO
JENEFES, Guillermo Raúl	AFIRMATIVO	SAPAG, Luz María	AFIRMATIVO
LATORRE, Roxana Itatí	AFIRMATIVO	TAFFAREL, Ricardo Cesar	AFIRMATIVO
LEGUIZAMON, María Laura	AFIRMATIVO	TERRAGNO, Rodolfo	AFIRMATIVO
LESCANO, Marcela Fabiana	AFIRMATIVO	URQUIA, Roberto Daniel	AUSENTE
LOPEZ ARIAS, Marcelo Eduardo	AUSENTE	YOMA, Jorge Raúl	AFIRMATIVO
LOSADA, Mario Anibal	AFIRMATIVO	ZAVALIA, José Luis	AUSENTE
M. PASS de CRESTO, Laura	AFIRMATIVO		AUSENTE

II

Sanciones del Honorable Senado

1

Homenaje al Día Internacional de la Mujer

–El texto del proyecto de declaración aprobado es el que figura en la pág. 3.

2

Situación institucional en Bolivia

–El texto del proyecto de declaración aprobado es el que figura en la pág. 15.

3

Régimen Regulatorio de la Industria y Comercialización de Gas Licuado de Petróleo

–El texto del proyecto de ley aprobado es el que figura en la pág. 25.

4

Adhesión a festividades en Córdoba

–El texto del proyecto de declaración aprobado es el que figura en la pág. 71.

5

Club Atlético Belgrano de Córdoba

–El texto del proyecto de declaración aprobado es el que figura en la pág. 72.

III

Inserción

Solicitada por el señor senador Salvatori

Señor presidente:

La ley 24.076, sancionada por este Honorable Congreso en el año 1992, por la que se aprobó el marco regulatorio del gas natural dejó establecido en su artículo 87 que la regulación del mercado de gas licuado de petróleo (GLP) se realizaría mediante la sanción de una norma legal específica.

A pesar de esta previsión legal el PEN nunca envió un proyecto de ley en ese sentido, ni tampoco este Congreso se abocó de lleno a tratar algunas iniciativas parlamentarias que fueron presentadas en los últimos diez años.

Sin embargo, no puedo dejar de mencionar que toda vez que desde el ámbito legislativo nos abocamos a tratar este tema, eran tales los intereses en pugna y la incapacidad de muchos de los actores para flexibilizar sus posiciones que fueron vanos todos los intentos por sancionar esta ley.

Esta industria, regulada por resoluciones y disposiciones del Poder Ejecutivo, ha dejado a esta actividad en una nebulosa de normas que no brindaron una solución definitiva a un aspecto tan importante como es el precio de las garrafas. A pesar de que se intentó implementar algunas medidas de emergencia, como la de la garrafa social, no resolvieron la cuestión de fondo.

Todo ello fue generando a lo largo del tiempo un vacío normativo en una materia de interés general, y especialmente sensible para los sectores de me-

nores recursos, que por falta de una regulación adecuada y de mínimos controles por parte del Estado a lo largo de toda la cadena de valor del gas licuado, reciben un producto que, en muchos casos, no cumple con las normas técnicas de seguridad y calidad y deben abonar por él un precio varias veces superior a su costo real.

Este fenómeno se agrava en la época invernal, que es cuando la gente más lo necesita.

Muchos de nosotros hemos sido receptores de justos reclamos por parte de nuestros conciudadanos por los abusivos precios a que se los obliga a adquirir el GLP, especialmente a los que habitan en pueblos o parajes aislados o en zonas cordilleranas, todavía no alcanzadas por redes de gas natural; para ellos el GLP constituye un insumo crítico para satisfacer sus necesidades básicas de calefacción y preparación de alimentos.

Todo esto también generó una enorme desprotección de los consumidores respecto de los parámetros mínimos que se les deben garantizar en función de las previsiones de la ley 24.240 y de la naturaleza del producto, que al ser un insumo básico de muchos hogares de escasos recursos y actividades industriales diversas, necesariamente requiere una adecuada regulación que ponga el acento sobre aspectos hoy totalmente descuidados, como calidad del producto, garantía de abastecimiento, precio justo y razonable, publicidad e información adecuadas, libre acceso y universalidad del servicio.

El proyecto en revisión que hoy nos disponemos a aprobar pretende reparar, en gran medida, esta ausencia del Estado y también, debemos reconocerlo, una larga demora legislativa, estableciendo para ello un marco legal adecuado para la regulación de la industria y comercialización del gas licuado de petróleo en todo el país.

Su objetivo esencial es asegurar el suministro regular, confiable y económico del GLP a los sectores sociales de escasos recursos que no cuenten con el servicio de gas natural por redes, para lo cual la autoridad de aplicación estará facultada para ejercer todas las atribuciones que se le asignan conducentes a asegurar el cumplimiento del referido objetivo.

Quedan comprendidos en el ámbito de aplicación de esta ley todos los segmentos que constituyen la cadena de valor de la industria del GLP, tales como la producción, fraccionamiento, transporte, almacenaje, distribución, servicios de puerto y comercialización en todo el territorio nacional.

Asimismo, constituyen objetivos de política general de cada una de estas actividades, a las cuales declara de interés público, entre otros, los siguientes:

1. Promover la competitividad de la oferta y la demanda de GLP y alentar su expansión, particularmente en aquellos lugares donde resulte anti-económico el desarrollo de redes de gas natural.

2. Garantizar el abastecimiento del mercado interno de GLP por parte de los consumidores a precios que no superen los de paridad de exportación, establecidos por la autoridad de aplicación.

3. La protección de los derechos del consumidor, la universalidad del servicio y el acceso al mismo a precios justos y razonables, especialmente para aquellos sectores residenciales de escasos recursos que no cuenten con redes de gas natural.

4. Propender a que los precios del GLP al consumidor sean representativos de los reales costos económicos totales de la actividad en sus distintas etapas y que la prestación del servicio se realice bajo adecuadas condiciones de calidad, seguridad y sostenibilidad.

5. Incentivar la eficiencia del sector y propender a una mejor operación de la industria del GLP garantizando la igualdad de oportunidades y el libre acceso de terceros al mercado.

Respecto a la declaración de interés público de esta actividad, contemplada en el artículo 5° del proyecto, se ha llegado a un consenso general. Las actividades de interés público son actividades reguladas, es decir que cuentan con reglas propias más allá del mercado, y con una autoridad específica para controlar su cumplimiento. Esta nueva forma de encerrar la industria del GLP es susceptible de ser regulada con el límite claro expresado en el artículo

28 de nuestra Carta Magna, es decir, respetando la esencia de la norma.

Sin perjuicio de la delegación de facultades de fiscalización y control técnico en el Enargas, la autoridad de aplicación de esta ley recaerá en la Secretaría de Energía de la Nación, quien podrá delegar en las provincias el ejercicio de sus facultades mediante acuerdos particulares con cada una de ellas.

A fin de garantizar un mayor nivel de competencia y constituirse en un desafío de cada etapa de la industria, se ha previsto que la autoridad de aplicación, con el debido asesoramiento del Tribunal Nacional de Defensa de la Competencia, en un plazo no mayor de 120 días, deberá establecer mecanismos de transferencia del producto entre las distintas etapas de producción, fraccionamiento, comercialización y distribución, a fin de garantizar que todos los agentes del mercado puedan acceder al producto en igualdad de condiciones y garantizando el abastecimiento del mercado interno.

Además deberá establecer mecanismos de estabilización de precios internos del GLP y realizar un profundo análisis de la constitución y comportamiento del sector a fin de corregir las distorsiones provocadas por excesos de concentración o de integración vertical en este negocio que ha llevado a que históricamente los precios finales al consumidor hayan estado siempre alejados de los reales costos de producción del producto.

Todos estos aspectos de este nuevo marco legal han sido motivo de un intenso tratamiento parlamentario en el ámbito de la comisión parlamentaria de minería, energía y combustibles, con activa participación de los sectores interesados y autoridades gubernamentales del área de energía, donde se logró amalgamar las distintas iniciativas presentadas en un despacho único que fuera aprobado por la Cámara y luego girado a la Cámara de Diputados, donde se le introdujeron algunas modificaciones, muchas de las cuales son aceptadas por esta Cámara e incorporadas al texto definitivo.

Otras, en cambio, han sido rechazadas manteniendo la redacción aprobada oportunamente por esta Cámara, por las razones que a continuación expondrá.

Dos de ellas están relacionadas con las modificaciones introducidas en el proyecto de Ley por la Cámara de Diputados a los artículos 7° y 14.

El artículo 7° establece las políticas generales que determinan el régimen regulatorio en las distintas etapas que intervienen en la industria y comercialización de gas licuado de petróleo.

En el inciso b) de dicho artículo, se garantiza el abastecimiento del mercado interno de gas licuado, así como también el acceso al producto a granel, a precios que no superen los de paridad de exportación, la cual deberá ser definida mediante reglamentación por la autoridad de aplicación.

La Cámara de Diputados introdujo dos modificaciones relevantes: en primer lugar el acceso al producto a granel por parte de todos los actores de mercado definidos en el artículo 2º del proyecto y en segundo lugar una metodología para el cálculo de la paridad de exportación del GLP en cada planta productora.

Sobre el primer punto, podría ocurrir que un distribuidor que sólo pueda operar como contratista de un fraccionador, acceda al mercado a granel sin cumplir con las condiciones técnicas y de seguridad que para esta actividad requiere la autoridad de aplicación, de acuerdo con las normas legales vigentes.

Con referencia al segundo punto, cabe recordar que cuando tratamos dicho inciso *b)* en la Comisión de Minería, Energía y Combustibles de esta Cámara, y también en este recinto, se estableció que el precio del GLP en el mercado interno, entendiendo como tal al precio que pagan a granel los grandes usuarios o los fraccionadores, no pueda ser nunca superior al de exportación.

Es decir, se estableció un valor referencial “único y uniforme” y se consideró oportuno que la fijación del mismo se realizara mediante una metodología reglamentada por la autoridad de aplicación.

La redacción propuesta por la Cámara de Diputados, establece una metodología con el objeto de fijar la paridad de exportación para cada planta de producción del tipo *net back*, restando del precio internacional los costos y gastos necesarios para acceder a dichos mercados.

Esto hace que el valor referencial deje de ser único y uniforme para convertirse en variable, lo que se traduce en selectivo y penalizador de las plantas de producción de GLP que están más alejadas de los puertos, lo que además de ser discriminatorio desalentará la inversión en nuevas plantas en las zonas de producción.

Siguiendo el criterio aprobado por este Senado en la sanción originaria, esta metodología privilegiará el abastecimiento del mercado interno de GLP por encima de la exportación.

En síntesis, cualquiera sea la metodología que se emplee para el cálculo de esta paridad en ningún caso deberá crear ventajas o privilegios económicos para las plantas de producción ubicadas próximas a las zonas portuarias en desmedro de las radicadas en el interior del país, próximas a las zonas de producción del gas.

Es por ello que no se aceptan las modificaciones introducidas por la Cámara de Diputados en el artículo 7º, conservándose la redacción que aprobó esta Cámara.

Otra modificación que esta Cámara rechaza es la introducida por la Cámara de Diputados en el artículo 14 del proyecto que aprobáramos y que está referido a la propiedad de los envases.

Cuando discutimos este punto en la comisión y en el recinto, entendimos que los envases debían ser propiedad de los fraccionadores, quienes tienen la responsabilidad del envasado de gas licuado de petróleo y del cumplimiento de las normas técnicas, de calidad, seguridad y otras que a esos efectos dicte la autoridad de aplicación, tal como se establece en el artículo 13.

Por lo que acordamos una redacción que encontrara un adecuado equilibrio entre los derechos que les corresponden a usuarios y fraccionadores, sin que ello afecte o vaya en desmedro de las responsabilidades de estos últimos en cuanto al cumplimiento de las normas técnicas de calidad y seguridad en lo relativo al llenado de los envases y del adecuado mantenimiento y reposición de los mismos, que a tal efecto dicte la autoridad de aplicación.

La propiedad de los envases les será atribuida a los fraccionadores de conformidad con la identificación de marca o leyenda y número de registro, pero éstos no podrán ser vendidos a los consumidores sino entregados en comodato.

Por su parte a los tenedores de envases que acrediten su propiedad, los fraccionadores dueños de la marca o leyenda deberán devolverles el importe a valor de mercado y entregarles el mismo en comodato.

No existe entonces confiscación de envases, de eso estoy absolutamente convencido. Tampoco se restringe la libertad del usuario, debido a que en el artículo 17 el fraccionador está obligado a recibir garrafas de terceros, evitando, de esta manera, la formación de mercados cautivos.

Asimismo debo resaltar el acta acuerdo que han refrendado los representantes del sector fraccionador de GLP con relación a este marco regulatorio. En especial han acordado que la asignación de la “propiedad de los envases” corresponde a los fraccionadores. Esta definición tiene por objeto asegurar la propiedad de la marca y/o leyenda y asegurar la responsabilidad del mantenimiento, acondicionamiento integral, destrucción y reposición de los mismos, así como también, los derechos exclusivos de llenado.

También se acordó que el titular de la marca y o leyenda podrá recuperar de terceros fraccionadores los envases propios, entregando envases a cambio, de igual capacidad que los solicitados, y siempre que su identificación corresponda a ese tercero.

La mencionada acta acuerdo también fue refrendada por las cámaras representativas del sector del GLP, las empresas fraccionadoras independientes de la industria, la Secretaría de Energía de la Nación y el presidente de la Comisión de Minería, Energía y Combustibles de este Honorable Senado.

En función de lo expuesto, y en el entendimiento de que con la redacción aprobada por esta Cámara

para el artículo 14 del proyecto quedan representados adecuadamente los intereses de las partes sobre este tema, no se aceptan las modificaciones introducidas por la Cámara de Diputados a este artículo, conservándose la redacción que aprobó esta Cámara.

Por último, esta Cámara acepta la introducción del artículo 50, propuesta por la Cámara de Diputados, que incorpora en el artículo 28 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, las ventas de propano, butano y gas licuado para uso domiciliario. Ello significa una disminución del 50 % de la tasa correspondiente a este impuesto, lo que se traducirá en una reducción importante en el precio final del producto y un alivio a las economías familiares demandantes de GLP, especialmente aquellas de menores recursos.

Respecto a las restantes modificaciones propuestas por la Cámara de Diputados, en general se ha logrado un adecuado consenso para su aceptación, por lo que propongo sin más trámite y a fin de no continuar postergando la sanción de una norma de por sí demorada, que hace a la mejora de la calidad de vida de una extensa franja de la población de nuestro país, propongo sea votada conforme el dictamen aprobado en comisión.

Por las razones expuestas y teniendo en cuenta el acuerdo celebrado entre los representantes del sector, anticipo mi voto acompañando al miembro informante respecto de sostener el proyecto sancionado por el Senado con las modificaciones introducidas en el dictamen en función de la revisión de diputados.

Pedro Salvatori.


H. Cámara de Diputados de la Nación
Secretaría Parlamentaria
Dirección de Información Parlamentaria